

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES



**Después de la coca:
Iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas y estrategias
de vida en el valle del Monzón**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA

AUTORA

Luciana Grillo Ramos

ASESORA

Silvana Eugenia Vargas Winstanley

Lima, abril de 2019

Resumen

La lucha contra las drogas es un fenómeno transnacional que se expresa de manera diferenciada en los espacios locales. En este marco, el Perú, uno de los mayores productores de hoja de coca ilegal, ha generado normativas e instituciones dirigidas a la desarticulación del narcotráfico en su territorio. Dentro de este, en Huánuco, se ubica el valle del Monzón, territorio que en el 2013 pasaría de ser uno de los principales centros de producción de hoja de coca, a albergar solo el 0.5% de los cultivos a nivel nacional (UNODC 2013).

El objetivo de la presente investigación es analizar de qué manera la implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas se relaciona con la configuración de estrategias de vida de los agricultores del valle del Monzón. Para ello, se (a) identifica cómo se desarrolló el proceso de implementación en materia de lucha contra las drogas en el valle; (b) caracterizan las narrativas y prácticas construidas por los agricultores a partir de la aplicación de estas iniciativas estatales; y (c) analiza de qué forma la interrelación entre el proceso de implementación y los capitales de la población se vinculan con las estrategias de vida configuradas. El estudio, cualitativo y exploratorio, encuentra que las iniciativas estatales han (a) potenciado las vulnerabilidades de ciertos grupos sociales; (b) mejorado la posición relativa de algunos, y (c) mantenido las posibilidades de otros. Estas diferencias se explican a través de factores como el origen, edad, género, experiencia agrícola previa y ubicación de las parcelas, los cuales se expresan a manera de capitales que facilitan o restringen las decisiones de los actores rurales. A partir de ellos, los agricultores despliegan estrategias de vida distintas, las cuales se evidencian mediante prácticas y narrativas desarrolladas para adaptarse y dar sentido al proceso que ahora viven.

Palabras clave: territorio; estrategias de vida; desarrollo rural; narcotráfico; capitales.

Agradecimientos

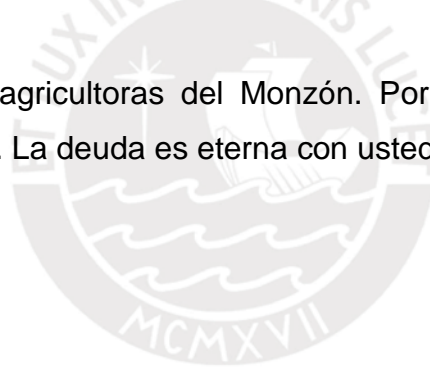
Gracias papá, gracias mamá, gracias Micaela. Por apoyarme en este y los tantos caminos que quiero recorrer. Son la definición de amor incondicional.

Gracias Alvaro. Por el cariño infinito y las reflexiones constantes. Por los mil y un aprendizajes vividos; y por los mil y un que están por venir.

Gracias Alejandra. Por ser mi compañera en este viaje. Porque contigo las transformaciones se celebren y se vuelvan crecimiento mutuo.

Gracias Silvana. Por el apoyo, las oportunidades y la confianza. Por haberme enseñado –dentro y fuera del aula– lo que significa hacer sociología.

Gracias a los y las agricultoras del Monzón. Por contarme sus vivencias y abrirme sus espacios. La deuda es eterna con ustedes.



Índice

| | |
|--|----|
| <u>Introducción</u> | VI |
| <u>Capítulo 1: Diseño de la investigación</u> | 1 |
| 1.1. Planteamiento del problema | 1 |
| 1.1.1. Estado del arte | 1 |
| 1.1.2. Objeto de estudio | 8 |
| 1.1.3. Objetivos de investigación | 8 |
| 1.2. Marco teórico | 9 |
| 1.2.1. Desarrollo territorial | 10 |
| 1.2.2. Economías ilícitas | 12 |
| 1.2.3. Medios de vida sostenibles | 17 |
| 1.2.4. Síntesis | 22 |
| 1.3. Hipótesis | 24 |
| 1.4. Metodología | 25 |
| 1.4.1. Diseño de investigación | 25 |
| 1.4.2. Ámbito de estudio y selección de casos | 27 |
| 1.4.3. Técnicas de recopilación y análisis de información | 30 |
| <u>Capítulo 2: Contexto</u> | 32 |
| 2.1. Socio demografía del valle del Monzón | 32 |
| 2.2. Repaso histórico | 38 |
| 2.3. Los actores | 47 |
| <u>Capítulo 3: Proceso de implementación</u> | 50 |
| 3.1. Operativos policiales de interdicción | 50 |
| 3.2. Control de cultivos | 55 |
| 3.3. Poserradicación | 60 |
| 3.3.1. Cultivos lícitos | 61 |
| 3.3.2. Asociatividad | 69 |
| 3.3.3. Gestión comunal | 72 |
| 3.4. Síntesis | 74 |
| <u>Capítulo 4: Estrategias de vida</u> | 77 |
| 4.1. Narrativas | 77 |
| 4.1.1. Discursos sobre la producción de hoja de coca y el narcotráfico.... | 77 |
| 4.1.2. Visiones sobre el Estado | 81 |
| 4.2. Prácticas | 85 |
| 4.2.1. Migraciones | 85 |
| 4.2.2. Modificación de las actividades económicas y jornada laboral | 88 |
| 4.3. Patrones compartidos | 94 |

| | |
|---|-----|
| <u>Capítulo 5: Discusión</u> | 96 |
| 5.1. Tipología de agricultores | 96 |
| 5.2. Capitales y estrategias de vida | 102 |
| <u>Conclusiones y recomendaciones</u> | 107 |
| <u>Bibliografía</u> | 113 |
| <u>Anexos</u> | 126 |
| Anexo 1: Entrevista a agricultores y agricultoras (Primer campo) | 126 |
| Anexo 2: Entrevista a agricultores y agricultoras (Segundo campo) | 129 |
| Anexo 3: Entrevista a funcionarios y expertos | 132 |
| Anexo 4: Matriz de operacionalización | 135 |



Introducción

La lucha contra las drogas es un fenómeno global que se expresa de formas diferentes en los ámbitos locales. Debido a que el Perú se vincula a la economía ilícita de las drogas principalmente como abastecedor de hoja de coca, la mayoría de las intervenciones implementadas desde el Estado y las organizaciones internacionales se han enfocado en el cultivo de esta materia prima. El valle del Monzón es un territorio que, por varias décadas, se dedicó fundamentalmente al cultivo de coca ilícita. Esto lo llevó a consagrarse por varios años como el principal centro de producción de esta materia prima, razón por la que en la década del 2000 se llevaron a cabo operativos policiales esporádicos que buscaban incautar insumos y destruir laboratorios clandestinos. Sin embargo, no fue hasta el 2012 que el Estado ingresó al valle con el objetivo de implementar de manera continua los programas de erradicación y Desarrollo Alternativo, con miras a que eso posibilitara la desestructuración de la economía ilícita en el territorio. Es así que, a partir de ese año, el Monzón ha experimentado un decrecimiento radical en la cosecha de hoja de coca ilegal, la cual ha sido reemplazada por parte de los agricultores por cultivos de cacao y café.

En ese sentido, la presente investigación busca comprender la relación existente entre la implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas y la configuración de estrategias de vida de los agricultores del valle del Monzón, en Huánuco. A partir de ello, se dará cuenta de cómo, en un contexto que ha experimentado una transformación reciente de sus dinámicas sociales, económicas y políticas, se ha vivido también un cambio en la configuración de estrategias desplegadas por la población. Observar cómo han cambiado las narrativas y prácticas de los productores permitirá tener un conocimiento más profundo respecto a las consecuencias que estas intervenciones tienen en la vida cotidiana de los individuos. Asimismo, se podrán conocer los resultados diferenciados que una misma iniciativa tiene sobre las personas, aun cuando se encuentran dentro de un mismo espacio territorial.

El texto se organizará de la siguiente manera. La sección a continuación presentará el planteamiento del problema, el cual incluirá el estado del arte, así como el objeto de estudio y los objetivos de investigación que guían el trabajo. Luego, se desarrollará el marco teórico utilizado para el análisis del fenómeno, dentro del cual se sintetizarán las tres perspectivas teóricas presentes en la investigación. Después, se presentarán las tres hipótesis que enmarcan el estudio, para luego explicar la metodología que se utilizó para llevar a cabo la investigación.

Luego de ello se presentará el capítulo de contexto, en el que se realiza una caracterización de la sociodemografía del valle del Monzón, así como un repaso de la historia de narcotráfico y terrorismo que se da dado en la zona. Finalmente, se presentarán los actores presentes tanto antes como después de la erradicación de hoja de coca en el valle, así como la vinculación entre ellos.

En el siguiente capítulo se describirá el proceso de implementación de iniciativas estatales en el Monzón, dividida en tres fases: interdicción, control de cultivos y Poserradicación. Respecto a esta última, se tratan tres de sus cinco componentes: cultivos lícitos, asociatividad y gestión comunal. Luego de ello, se presentan las principales estrategias de vida, divididas en narrativas y prácticas, que la población está desarrollando como respuesta a las políticas ejecutadas en el territorio.

La relación entre estos dos fenómenos se tratará en el capítulo de discusión, a través del cual se conocerá de qué manera los capitales de la población han intervenido en las estrategias que han decidido desplegar. Finalmente, se presentarán las conclusiones principales del estudio, en las que se esbozan las limitaciones de la investigación y algunas recomendaciones de política.

Capítulo 1: Diseño de la investigación

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Estado del arte

El cultivo de coca para fines tradicionales tiene lugar en el país desde hace siglos en el país. Sin embargo, el aislamiento del alcaloide activo de la planta para la producción de cocaína, y la posterior popularización de esta en países como Estados Unidos a finales del siglo XIX, generó un aumento en la demanda de hoja de coca y el comercio de sus derivados (Parra y Guerra, 2014, pp. 92). Con el pasar de los años y la acentuación del consumo de la droga, el debate internacional respecto a la necesidad de políticas contra el narcotráfico ha tendido a ofrecer soluciones enfocadas en la oferta de cocaína. Es así que el foco de atención de la “lucha contra las drogas” se ha dado principalmente en países como Perú, Colombia y Bolivia, únicos países productores de hoja de coca en el mundo (Manrique, 2015, pp. 68).

Es necesario recordar que la “guerra contra las drogas” es un fenómeno internacional, por lo que muchas de las decisiones que ha tomado el país en esta materia han implicado negociaciones con actores externos. De esta manera, el accionar estatal ha ido cambiando según el contexto sociopolítico, y los resultados de sus intervenciones han variado según el enfoque que, tanto el Estado como el ente externo financiador, le han impreso. Además de ello, la geografía y la realidad socioeconómica de los espacios que se han intervenido llevan a que los resultados de las iniciativas hayan sido sumamente diversos en el territorio peruano.

Un momento clave en las reformas institucionales del Estado peruano con respecto a esta problemática fue la creación de la Comisión de Lucha Contra las Drogas (CONTRADROGAS) en 1996. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, esta sería renombrada como Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), entidad encargada de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, además de ser la

contraparte nacional para los fondos de cooperación internacional que se dedican a esta problemática (DEVIDA 2018). Es en este periodo gubernamental en el que el país se alineó a la política de “coca cero”, mediante la cual se firmó un tratado con Estados Unidos en el que el Estado peruano se comprometía a erradicar la totalidad de hectáreas de cultivos de coca en un plazo de cinco años (Manrique, 2016, pp. 201, 202).

Sin embargo, cinco años más adelante y tras experimentar un crecimiento del área de coca ilegal, se presentó el Modelo o “Milagro de San Martín” como la vía para restringir la oferta de drogas en espacios caracterizados por presencia de cultivos, subversión terrorista, daños ecológicos y ausencia del Estado (Cabieses, 2010, pp. 01). Este modelo, enmarcado dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, pone en práctica dos de sus tres dimensiones: el desarrollo alternativo y la interdicción¹ (DEVIDA, 2012, pp. 36). En esta última dimensión, se busca erradicar los cultivos de coca, controlar los insumos químicos y encarcelar a los traficantes de drogas (Manrique, 2015, pp. 68), siendo el primero de estos objetivos en el que más se ha avanzado.

De esta manera, gran parte de los esfuerzos realizados se focalizan en los agricultores, quienes se dedican a la hoja de coca por la mayor rentabilidad y facilidad que implica su cultivo (Zevallos, 2012, pp. 60). Por esa razón, la mayoría de los habitantes en zonas cocaleras están relacionados con esta actividad, ya sea directa o indirectamente. Es así que, en el 2000, se calculaba que aproximadamente 50 mil personas estaban involucradas directamente en el cultivo y producción de coca, y de las 2 millones de personas que habitaban los departamentos de las cuencas cocaleras del país, la mitad dependía de la actividad. Los cultivadores, cabe resaltar, vienen principalmente de economías familiares campesinas con poco uso de mano de obra asalariada; ya que, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, el cultivo en Perú se da a pequeña escala, en una extensión cocalera que va de 0,5 a 2 hectáreas. (Cabieses, 2000, pp. 617, 618)

¹ La tercera dimensión -prevención y tratamiento- es aplicada para tratar la demanda de drogas, mientras que las otras dimensiones se focalizan en reducir la oferta de ella.

Dando cuenta de la realidad en la que las iniciativas estatales se despliegan, diferentes académicos han estudiado este fenómeno, resaltando los aciertos y limitaciones de estas en el territorio peruano. Al respecto, Zevallos (2014) plantea que la erradicación es una forma de cumplir con metas cuantificables, sin atacar los problemas estructurales que caracterizan la economía rural de zonas sin presencia estatal. Por esta razón, los mecanismos de control de cultivos no logran atender los intereses y carencias que llevan a los agricultores a cultivar coca ilícitamente. Así, el autor señala que el único programa demandado por los agricultores es aquel con enfoque de desarrollo rural: el desarrollo alternativo.

Sin embargo, Cabieses (2000a, 2000b, 2010) cuestiona la eficacia de este programa, señalando que la estrategia de mono producción no es coherente con la diversidad de la zona en la que se aplica, ya que la fragilidad ecológica y la calidad de los suelos generan que esta no sea apta para tal tipo de agricultura (Cabieses, 2010, pp. 07). Además, el autor cuestiona la decisión de vincular a los pequeños agricultores a mercados internacionales, en tanto ello generaría dependencia a las fluctuaciones de los precios globalizados (Cabieses, 2010, pp. 08). Por otro lado, critica el carácter vertical y no dialogante de la estrategia, a la cual acusa de crear asociaciones, juntas y cooperativas que funcionan como plataformas de diálogo y canalización de demandas, en lugar de fortalecer las instancias organizativas ya existentes en las zonas en las que los programas inciden (Cabieses, 2000, pp. 79).

Este accionar estatal, como lo señala Scott (1998), responde a una lógica intrínseca del Estado moderno centralizado. Para el autor, debido a su necesidad de regir sobre una población y territorio extenso, este actor no cuenta con la capacidad necesaria como para aplicar políticas que respondan a las particularidades de cada espacio geográfico y social. En ese sentido, para "hacer legible" su ámbito de gobernanza, el Estado hace uso de herramientas de información (tales como censos, por ejemplo) que estandarizan a la población y le proveen instrumentos para gobernar sobre ella. De esta manera, es a partir de la homogeneización de los territorios que el Estado interviene sobre ellos, lo cual dificulta desde un primer momento un accionar que

responda a las necesidades y oportunidades de cada espacio social.

Esta situación se torna problemática al observar las características agrícolas del Perú, en los que la existencia de brechas de género limitan el acceso a recursos y oportunidades de mercado para las mujeres rurales. Así lo demuestra César del Pozo (2015), indicando que, a nivel nacional, (a) las unidades agropecuarias conducidas por mujeres tienen un promedio de 40% menos de superficie cultivada que las de los hombres; (b) además de un valor económico inferior. Estas brechas de género agrícolas, que se han incrementado entre 1994 y 2012, se explican por desigualdades en la disponibilidad de la tierra, la tenencia de tierra propia, la posesión de acciones, el acceso al crédito, y la predominancia de una lengua materna indígena. En este contexto, comparadas con las parejas y con los hombres que conducen sus unidades agropecuarias solos, son las mujeres rurales que conducen solas sus unidades quienes presentan mayores vulnerabilidades a nivel económico.

En la misma línea, Diana La Riva y Denisse Castillo (2016) muestran cómo estas brechas de género también influyen las decisiones que los y las productoras toman respecto a qué cultivos producir. Estudiando el contexto cusqueño, señalan que la selección del cultivo está influenciada por factores como el acceso al crédito y a conocimiento técnico, así como a las capacidades físicas de los productores. Por esa razón, plantean que las mujeres que conducen solas sus unidades productivas son el grupo social con un alto nivel de vulnerabilidad, ya que son quienes presentan menor acceso al crédito y están menos vinculadas a cooperativas que proveen capacitación y apoyo en la vinculación al mercado. Además, debido a que usualmente poseen menor fuerza física que los varones, encuentran mayores limitaciones para el trabajo de su tierra, así como para la participación en iniciativas de cooperación colectiva como el ayni.

En ese sentido, y considerando que del 2012 al 2013 el distrito del Monzón pasó de tener 6 564 hectáreas de cultivo de coca a tener 227 (DEVIDA, 2015, pp. 10), resulta necesario seguir indagando respecto a cómo las iniciativas estatales han afectado las dinámicas organizadas alrededor de esta actividad económica. A pesar de no contar con muchas investigaciones

sobre el Monzón en específico, existen otros casos que han sido documentados y permiten una mayor comprensión de la problemática. La literatura muestra que, a grandes rasgos, las intervenciones han generado tres resultados diferentes: (i) no han logrado modificar sustancialmente las dinámicas territoriales establecidas por actores no estatales; (ii) han generado descontento en la población, quienes han considerado que las consecuencias han sido perjudiciales para sus condiciones de vida; o (iii) han sido valoradas positivamente por los agricultores cocaleros, quienes encuentran que su calidad de vida ha mejorado a partir de las iniciativas.

Respecto a la primera alternativa, la investigación de Noam López y Diego Tuesta (2015) señala que en la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia, la geografía del territorio y la precariedad material del aparato policial llevan a que las autoridades encargadas de la interdicción no puedan hacer frente a los comerciantes ilegales. Allí, los funcionarios agrícolas encuentran dificultades para lograr la cobertura y sostenibilidad de sus proyectos, debido a las complicaciones para movilizarse por el territorio y articular a los agricultores a mercados legales. De esta forma, a pesar de que intervenciones estatales son aplicadas en la zona, las comunidades nativas y las redes de tráfico ilícito de drogas y de madera son quienes ejercen el control territorial en el área.

En contraposición, diferentes investigaciones muestran cómo, en varios casos, las intervenciones sí han modificado las relaciones y dinámicas establecidas alrededor del comercio ilícito de droga. Una de ellas es la de Salisbury y Fagan (2013), quienes muestran cómo, en el caso de Ucayali, las erradicaciones de hoja de coca causaron un declive en la calidad de vida de los residentes, así como un descontento generalizado hacia el CORAH. Además, se presume que las intervenciones habrían llevado a la expansión de los cultivos de coca a zonas de conservación, lo cual podría abrir un ciclo vicioso en el que las erradicaciones impacten indirectamente en una mayor deforestación y contaminación de territorios indígenas.

Asimismo, Van Dun (2009) llama la atención sobre cómo las campañas de erradicación, al desestabilizar las dinámicas del tráfico de drogas, pueden romper las regulaciones establecidas por los narcotraficantes, dejando un vacío

de poder que lleve a enfrentamientos violentos. Sin embargo, Manrique (2015) señala que la violencia no solo ha sido causada indirectamente por las intervenciones, sino que en el valle del Monzón estas han sido aplicadas forzosamente sobre los agricultores. Así, el autor indica que el ingreso estatal se realizó criminalizando, desmembrando y arrestando a miembros del movimiento cocalero. Igualmente, en el caso particular de Tamshi, se desató una represión hacia los agricultores que se resistían a las erradicaciones, lo cual finalizó con decenas de heridos y el asesinato de dos agricultores cocaleros (Manrique, 2015, pp. 81).

En la misma línea, Ana Dammert (2008) plantea la existencia de una asociación entre el descenso de la producción de hoja de coca y el incremento de las horas de trabajo de los niños que habitan zonas cocaleras, lo cual daría indicios de una de las consecuencias indirectas que tienen las erradicaciones en estos territorios. Finalmente, el aporte de Farthing y Kohl (2005) sobre el caso de Bolivia muestra cómo la erradicación masiva emprendida en intervenciones financiadas por Estados Unidos, al no ser acompañada por programas de Desarrollo Alternativo, llevó a entre 45 mil y 50 mil familias a una severa crisis económica. Además, la negativa a trabajar con los sindicatos cocaleros y las municipalidades locales llevó a que gran parte de la población se resista a participar en las iniciativas, generando que estas tengan impactos limitados en la mejora de la calidad de vida de los agricultores.

Por otro lado, los mismos autores cuentan la experiencia del programa PRAEDAC, llevado a cabo por la Unión Europea, en el cual se observa el tercer resultado mencionado anteriormente. En este caso, la asistencia no fue condicionada a la erradicación de cultivos, además de que la iniciativa buscaba fortalecer los gobiernos locales, por lo que se consideraba vital la participación popular y trabajo conjunto con las municipalidades. Asimismo, los resultados de Ugarte (2014) muestran cómo, en el caso de Tocache, la implementación del programa de Desarrollo Alternativo habría sido valorada positivamente por la población. Allí, los agricultores consideran que esta les permite gozar de seguridad económica y social, además de invertir en sus proyectos de vida, tales como la educación de sus hijos y la mejora de su vivienda y negocio

familiar. Finalmente, contar con apoyo técnico también era un aspecto valorado positivamente por los agricultores, quienes consideraban que sin él no habría sido posible cambiar de cultivo y mantenerse en él.

Respecto al caso específico del Monzón, la investigación de Casas (2015) colocaría esta experiencia dentro de los casos de la tercera clasificación. El autor señala que, debido a la forma en que se planteó la negociación con los campesinos y la manera en la que la propuesta se llevó a cabo, los agricultores no solo han permitido la aplicación del desarrollo alternativo, sino que lo defienden frente al gremio cocalero y otros pobladores que se oponen al programa. Para Casas, esto se explica porque la construcción de la capacidad estatal se dio de manera relacional, en la que ambos actores cedieron en sus objetivos de tal forma que la política implique ganancias mutuas. Esto porque DEVIDA permitió tácitamente que los agricultores sigan sembrando coca en espacios no destinados al desarrollo alternativo, lo que llevó a que ellos se muestren más abiertos a destinar tierras a los nuevos cultivos. Además, la provisión de asistencia técnica y servicios de salud generó que los funcionarios estatales mantengan una relación positiva con los agricultores, facilitando que los últimos acepten sus programas.

De esta manera, es posible observar que las iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas han tenido resultados sumamente distintos, variando según el enfoque del que han partido y las características propias de la población y su territorio. Sin embargo, resulta necesario diferenciar qué factores podrían estar influyendo en esta variedad de resultados, de manera que esta información pueda considerarse en las próximas intervenciones estatales. Para ello, además de reconocer la heterogeneidad de las y los agricultores, es necesario situar el estudio en un territorio específico y estudiar la forma en que este es concebido por el Estado, ya que la caracterización del territorio y sus habitantes incluirá en cómo este decida aproximarse.

En ese sentido, el presente estudio busca conocer cuál ha sido la relación entre las intervenciones estatales en materia de lucha contra las drogas y las estrategias de vida de la población del Monzón. Ello permitirá profundizar respecto a cómo ha cambiado la relación que establecen los

agricultores entre ellos; entre ellos y sus organizaciones; y entre ellos y el Estado. Asimismo, posibilitará conocer cómo la desarticulación del tejido que giraba en torno al mercado ilegal de hoja de coca ha modificado las expectativas, prácticas, valoraciones y narrativas de los productores.

Los hallazgos de la investigación darán pistas respecto a aspectos a mejorar en el diseño de las estrategias estatales en materia de lucha contra las drogas, de tal forma que estas aseguren la promoción del desarrollo individual y territorial del Monzón. Saber cómo las intervenciones son percibidas y recibidas por los agricultores permite saber cómo estas deben ajustarse para mejorar la calidad de vida de la zona. En ese sentido, se espera que la investigación tenga un aporte aplicado, en el cual sus resultados puedan utilizarse para renovar las estrategias estatales que se están desarrollando en las zonas rurales del país.

1.1.2. Objeto de estudio

La pregunta que guía esta investigación es: ¿De qué manera el proceso de implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas se relaciona con la configuración de estrategias de vida de los agricultores del valle del Monzón, en Huánuco?

1.1.3. Objetivos de investigación

Objetivo general

- Explicar de qué manera los agricultores del valle del Monzón reconfiguran sus estrategias de vida a partir de la implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas.

Objetivos específicos

- Identificar de qué manera se desarrolló el proceso de implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas en el valle del Monzón.
- Caracterizar las narrativas y prácticas construidas por los agricultores del valle a partir de la implementación de las iniciativas estatales.
- Analizar de qué forma la interrelación entre el proceso de implementación de iniciativas estatales y los capitales de la población se vinculan con las estrategias de vida configuradas por los agricultores del valle del Monzón.

1.2. Marco teórico

Para analizar la interrelación entre el proceso de implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas y la configuración de estrategias de vida de los agricultores del valle del Monzón, es necesario partir de diferentes enfoques analíticos. Por un lado, el enfoque territorial permite reconocer la importancia que tienen los territorios en la construcción de fenómenos sociales, recordando que deben considerarse las diferentes variables en una localidad para comprender las dinámicas que se desarrollan en ella. En el caso particular del tráfico ilícito de drogas este enfoque se vuelve aún más necesario, ya que son las características de un territorio lo que lleva a que actividades ilícitas puedan desarrollarse en él, modificando y reconstruyendo sus dinámicas sociales, políticas y económicas.

La presencia de actividades articuladas a la economía ilícita en territorios determinados, además, tiene fuertes consecuencias en la población que reside en estos, ya que su involucramiento con la actividad, sea directa o indirecta, moldea su vida cotidiana. Así, la implementación de políticas públicas que busquen desarticular la economía ilícita modificará las narrativas y prácticas que la población ha construido en relación a la actividad, lo cual conlleva consecuencias diversas según las características de las familias e

individuos. En lo que sigue, el marco teórico se dividirá en tres enfoques: desarrollo territorial; economías ilícitas y el papel del Estado respecto a estas; y medios de vida sostenibles.

1.2.1. Desarrollo territorial

Desde finales de los ochenta, las ciencias sociales, las políticas de desarrollo rural y las reivindicaciones de los movimientos sociales han empezado a darle mayor importancia a la noción de territorio, postulándola como nueva unidad de análisis (Hernández, 2012, pp. 19). Así, se le ha prestado mayor atención a la forma en que las dinámicas sociales, económicas y políticas interactúan con la geografía, comprendiendo que los fenómenos no son independientes del territorio en el que se inscriben, sino que se construyen en interrelación con él.

Más adelante, en los años noventa, el territorio adquiere mayor centralidad y surge el enfoque de desarrollo territorial rural (DTR), un marco de análisis a partir del cual comprender los cambios en el mundo rural latinoamericano e intervenir para generar desarrollo y reducir la pobreza rural (Hernández, 2012, pp. 32). Así, Schejtman y Berdegú (2004, pp. 04) proponen entender el DTR como un proceso de transformación productiva e institucional que ocurre en un espacio rural determinado y tiene como objetivo la reducción de la pobreza rural. Así, el enfoque se sustenta en los pilares de la transformación productiva y el desarrollo institucional, los cuales deben abordarse de manera simultánea por ser interdependientes (Schejtman & Berdegú, 2004, pp. 31).

Al referirse a la transformación productiva, el DTR plantea la necesidad de articular competitiva y sustentablemente la economía local con mercados dinámicos, lo cual implica la construcción de relaciones urbano-rurales y redes de acceso al conocimiento (Schejtman & Berdegú, 2004, pp. 30, 31). En segundo lugar, se encuentra el desarrollo institucional, el cual busca impulsar la concertación entre actores locales, así como entre ellos y agentes externos (Schejtman & Berdegú, 2004, pp. 30). Este también tendría como objetivo

reducir la pobreza y aumentar las oportunidades de la población para beneficiarse de la transformación productiva, ya que si esta no se acompaña con el aspecto institucional, podría generar una mayor exclusión (Schejtman & Berdegú, 2004, pp. 30, 31).

De esta manera, se plantea que el territorio no es un espacio físico “objetivamente existente”, por lo que no puede delimitarse técnicamente a partir de variables físicas o económicas, sino que se define de manera funcional a los objetivos de los agentes de procesos de DTR (Schejtman & Berdegú, 2004, pp. 29, 33). En ese sentido, se lo postula como una construcción social, escenario de actividades cotidianas en el que se construyen las percepciones, creencias y valores que orientan la acción social, y se origina y expresa una identidad y un sentido de propósito compartido por múltiples actores (Cliche, Ranaboldo & Serrano, 2015, pp. 62; Schejtman & Berdegú, 2004, pp. 29; Chiriboga, 2010, pp. 54). Así, el territorio sería una construcción colectiva, compuesta por experiencias pasadas que alimentan nuevas prácticas sociales, además de ser donde se gestan los comportamientos colectivos y se articulan estrategias para el futuro (Cliche, Ranaboldo & Serrano, 2015, pp. 62; Damonte, 2011, pp. 13).

Asimismo, es el espacio donde se articulan la estructura productiva, las redes sociales y económicas, las coaliciones sociales y las instituciones, lo cual tiene implicancias en el crecimiento económico, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental (Chiriboga, 2010, pp. 54, 60). Las coaliciones territoriales² también podrían obstaculizar o favorecer la reducción de la pobreza y la mejora de la equidad, por lo que su rol en la configuración de las dinámicas rurales se considera clave (Fernández & Asencio, 2013, pp. 14). En ese sentido, los distintos estilos de intervención externa en un territorio tendrían también efectos diferenciados en sus habitantes (Hernández, 2012, pp. 36, 37). Por esa razón, es necesario tomar en consideración que, en un espacio rural, una estructura agraria inequitativa tendería a favorecer un desarrollo territorial inequitativo, ya que en territorios donde la actividad agrícola es relevante, la

² Entendidas como agrupamientos de actores en torno a objetivos compartidos y relacionados con las dinámicas territoriales (Fernández & Asencio, 2013, pp. 13).

distribución de la tierra se relacionaría directamente con la distribución del ingreso y el poder (Chiriboga, 2010, pp. 62).

De la misma manera, otro aspecto relacionado a las dinámicas de poder que tienen lugar en un territorio es el de los activos territoriales. Estos son dotaciones materiales y no materiales que inciden en el resultado económico y de inclusión social en un territorio determinado, y se dividen entre los físico-territoriales, económicos, culturales, sociales e institucionales (Cliche, Ranaboldo & Serrano, 2015, pp. 64). Asimismo, es importante no olvidar los “activos intangibles”, dentro de los cuales se encuentra la capacidad de agencia de los actores, quienes son los encargados de interactuar y concertar en torno a sus activos territoriales (Cliche, Ranaboldo & Serrano, 2015, pp. 64).

En conclusión, este enfoque teórico recuerda la importancia de territorializar los fenómenos, reconociendo que la manera en que se vinculan los actores, activos e instituciones está en interrelación con el espacio en el que toman lugar. Las características de un territorio influyen en los vínculos, la cultura y las organizaciones que surgen en él, razón por la que es necesario atender a sus particularidades al estudiar cualquier evento o proceso. Asimismo, este marco conceptual permite hacer un análisis comprometido con los sujetos de estudio, estudiando la relación entre el ámbito productivo e institucional para observar sus consecuencias en la reducción o profundización de la pobreza rural.

1.2.2. Economías ilícitas

La conexión con las economías informales e ilícitas es una característica sumamente importante de los espacios rurales actuales (Durand, 2016, pp. 22, 23). Estos experimentan la presencia de actores sociales que operan fuera de las reglas formalmente establecidas por el Estado, funcionando bajo su propia normativa y generando nuevos discursos y culturas (Durand, 2016, pp. 26, 27). Así, existen lugares en los que la economía ilícita no solo es la principal fuente de generación de ingresos, sino que también se vuelve predominante en el

espacio, siendo la actividad que mayor extensión territorial ocupa (Durand, 2016, pp. 30).

Es necesario considerar que la informalidad y delictividad son actividades económicas que, si bien ignoran las leyes estatales, toman en cuenta las del mercado (Durand, 2016, pp. 28). Por esa razón, al igual que las actividades lícitas, se encuentran expuestas a las lógicas de la globalización económica, que articula territorios a nivel planetario y fortalece la interrelación entre lo urbano y lo rural (Durand, 2016, pp. 28, 29). Esta articulación se compone a manera de cadena económica global, en la que los territorios cumplen roles especializados y tienen como resultado final la producción de una mercancía (Durand, 2016, pp. 56).

El caso del tráfico ilícito de drogas (TID) puede ser analizado desde la misma perspectiva. Zevallos y Mujica (2015) plantean que, en lugar de estudiar las organizaciones del TID bajo la figura de un cártel verticalmente estructurado con un poder centralizado, estas deben analizarse desde un enfoque de cadena de valor. Por ello, señalan que “el TID se dispone como una cadena de progresiva agregación de valor integrada por al menos tres eslabones con objetivos específicos: la producción del bien transformando una materia prima, la distribución del mismo en el mercado y su comercialización final” (Zevallos & Mujica, 2015, pp. 22).

Este enfoque permite comprender que el TID tiene dos características fundamentales, siendo la primera de ellas la compartimentalización o atomización del ciclo productivo, en la que cada eslabón se organiza de forma particular según cuáles sean sus objetivos. En ese sentido, en lugar de organizaciones criminales piramidales y centralizadas, el TID funciona bajo una modalidad de red de relaciones sociales sustentadas en intereses comunes, sin necesariamente lazos jerárquicos entre ellos, y que funciona a nivel global. (Zevallos & Mujica, 2015, pp. 22, 23, 25)

Sin embargo, es necesario precisar que, aunque esta cadena económica es ilícita en la actualidad, su carácter ilegal es una construcción social atribuida en el siglo XX (Durand, 2016, pp. 57). Así, aunque entre el siglo XIX y XX se desarrollaba una industria peruana legal de producción de

cocaína³ (Gootenberg, 2010, pp. 63), las prohibiciones globales hacia la droga llevaron a que entre 1947 y 1965 surgiera una cadena de producción y comercialización de cocaína ilícita panamericana, promovida por la especulación ilícita y el contexto político de la Guerra Fría (Gootenberg, 2010, pp. 68, 69).

Este fenómeno tomó un lugar preponderante en el Perú en la década de 1960, a partir de un boom internacional que impulsó la producción de hoja de coca en espacios rurales del país (Durand, 2016, pp. 43). El proceso se aceleró con la migración de colonos a los valles amazónicos de ceja de selva, quienes se incorporaron a la actividad productiva desplazándose a través de carreteras como la Marginal de la Selva (Van Dun, 2009, pp. 90-96; Durand, 2016, pp. 36, 43). En ese sentido, la vinculación de estos territorios a la industria de drogas internacional se da en los primeros eslabones de la cadena, principalmente a través de pequeños agricultores que ven en el cultivo de coca una oportunidad económica.

Al respecto, Zevallos (2014, pp. 102) plantea que, si bien la coca genera más ingresos que otros cultivos, esta no solo no genera riqueza⁴, sino que no sería rentable en extensiones menores a tres hectáreas. Asimismo, el alto valor de la venta de este producto distorsionaría la economía local, aumentando el costo de vida a la vez que, debido al carácter ilícito de las ganancias, imposibilita la inversión (Zevallos, 2012, pp. 57).

Por otra parte, el involucramiento con la actividad generaría condiciones de incertidumbre para los agricultores, quienes deben enfrentar cinco tipos diferentes de riesgo. Entre ellos se encuentran: el técnico –relacionado al rendimiento de su producción–; el económico –por la variación de precios–; el

³ Más allá de su legalidad, la industria peruana sufrió una crisis económica y política en 1915, causada por las reacciones occidentales contra los peligros médicos de la droga, su sobreproducción en el país y el aumento de competencia en el mercado económico global (Gootenberg, 2010, pp. 67).

⁴ Debido a la alta inversión que implica el cultivo, así como los meses que este demora para producir, la coca representa un monto líquido mensual de 700 soles (Zevallos, 2014, pp. 102). Esto, cabe resaltar, varía según la cuenca cocalera, ya que la capacidad productiva de estas es heterogénea. A pesar de ello, resulta importante reconocer que, en el Monzón, este ingreso sería el principal para una familia que tiene un promedio de cuatro miembros (DEVIDA, 2013, pp. 06).

tecnológico –por la disponibilidad de insumos productivos–; el institucional –en relación a las políticas de producción agropecuaria–; y el riesgo por ilegalidad –generado por la posibilidad de que sus productos sean erradicados o confiscados– (Serrano, 2014, pp. 15, 16). Además, Serrano (2014, pp. 107) plantea que el incremento de ingresos derivados de la producción de cultivos ilícitos de coca en territorios productores afecta negativamente las libertades no monetarias de la población. Esto se debe a que el aumento de agricultores dedicados al cultivo ilícito tiene como consecuencia la reducción de la seguridad en el territorio, lo que a su vez reduce el las posibilidades de asociación y el acceso a educación y salud (Serrano, 2014, pp. 109, 112, 113). Por ello, el autor sostiene que los mayores ingresos generados por la coca no necesariamente implican una mejora en el nivel de bienestar individual y social (Serrano, 2014, pp. 107).

Sin embargo, Zevallos (2014, pp. 102-104) identifica cuatro razones principales por las que, a pesar de lo señalado anteriormente, los productores de valles cocaleros deciden articularse a la economía ilícita. La primera plantea que, en comparación con otros cultivos lícitos, la hoja de coca genera más ingresos por hectárea y los provee de manera más frecuente⁵. Además, el cultivo genera mayor ocupación de mano de obra y mejores condiciones de pago, por lo que existe interés en trabajar para quienes producen coca. Por otro lado, la accesibilidad al mercado es más sencilla, ya que la adquisición del producto se da en la misma chacra, muchas veces mediante un pago anticipado. Finalmente, el autor plantea que, debido al carácter ilícito de la actividad, participar en ella generaría cohesión social entre los involucrados.

Es importante considerar que, en muchos casos, el desarrollo de la economía ilícita se ha dado en zonas con escasos recursos, deficiente infraestructura, y poca presencia y legitimidad estatal, en la que los actores que ejercen el control territorial no son autoridades públicas (Durand, 2016, pp. 32).

⁵ Por cada 100 soles obtenidos de la venta de cultivos lícitos en la cuenca baja del Monzón, 650 soles eran ganados produciendo para la economía lícita. Más aún, en algunos distritos, los ingresos por cultivos de coca tenían una relación de 29 a 1 frente a los lícitos, demostrando una alta dependencia económica familiar a tal economía (DEVIDA, 2013, pp. 35, 36). Finalmente, mientras que el café puede cosecharse para venderse cada ocho meses, la cosecha de hoja de coca puede darse hasta cuatro veces al año (Zevallos, 2014, pp. 103)

En ese sentido, el Estado peruano se caracteriza como un ente débil con poca capacidad para aplicar su normativa en el territorio, posibilitando que otros actores establezcan actividades e industrias económicas que trasgreden sus normas (Durand, 2016, pp. 38, 52).

Por lo anterior, Manrique (2016, pp. 48) plantea que el territorio es producto de una lucha política, en la que actores estatales y no estatales compiten por su control. Así, se reconoce que los Estados tienen grandes limitaciones para cumplir con sus objetivos y funciones, ya que la implementación de sus políticas se puede dificultar no solo por su precaria institucionalidad sino también por la resistencia u oposición de grupos que desafían su autoridad (Skocpol, 1985). En ese sentido, O'Donnell (1993) plantea la existencia de “zonas marrones”, las cuales serían zonas periféricas de los Estados latinoamericanos en donde la presencia del Estado se reconfigura mediante formas atenuadas de poder, en las que se presentan retos del Estado, todos con diferente fuerza y objetivos (Eaton, 2012).

Casas (2015, pp. 04) señala que, más allá del poder retador, la literatura demuestra la existencia de al menos tres condicionantes del alcance territorial estatal: los incentivos económicos, los incentivos por la posición geográfica y magnitud demográfica, y los incentivos políticos. Así, la configuración del poder estatal surgiría de la interrelación entre las agencias estatales, los diversos grupos sociales retadores, y los incentivos de penetración territorial. Por ello, resulta útil partir del enfoque del “Estado-en-sociedad”, en el que el Estado, como campo de poder caracterizado por el uso y amenaza de la violencia, es moldeado por (1) la imagen de una organización coherente que controla el territorio y (2) por las prácticas efectivas llevadas a cabo por sus múltiples partes (Migdal, 2004). De esta forma, la expansión y consolidación de la presencia estatal requiere del establecimiento de alianzas, coaliciones y conflictos con distintas fuerzas sociales en múltiples arenas, lo cual se complica al comprender que el Estado no es un todo integrado y coherente, sino que dentro de él co-existen diferentes objetivos y opiniones sobre cómo actuar (Manrique, 2016, pp. 46).

En ese sentido, resulta importante explicar de qué manera el Estado logró consolidar su presencia en zonas en las que el control territorial fue ejercido históricamente por otros actores. Para Manrique (2016, pp. 50-52), esto se logró por la transición estatal del ejercicio del “poder despótico” al “poder infraestructural” para controlar el territorio. Así, en lugar de imponer sus políticas sin una negociación institucionalizada con la sociedad civil y las élites locales, el Estado penetró en ellas para implementar sus decisiones políticas sin ejercer violencia. Sin embargo, el autor considera que el ejercicio de este tipo de poder fue posible solo cuando se había recuperado el control territorial, para lo cual la coerción y violencia sí fueron utilizadas. De esa forma, se distingue entre la “represión generalizada” y la “represión focalizada”, señalando que una vez que la primera fracasó como estrategia, se llevó a cabo la segunda de manera secuencial, centrándose primero en la lucha contra la subversión para luego enfocarse en el narcotráfico. Así, estudiando el caso de San Martín, el autor plantea que estas estrategias -sumadas a la suspensión de la erradicación, el mayor acercamiento de las Fuerzas Armadas a los agricultores, la implementación del Desarrollo Alternativo y la continua expansión del Estado y sus servicios- son los factores que explicarían la construcción del Estado en la región.

En la misma línea, Casas (2015) considera que el estudio del control territorial estatal para el caso del Monzón debe enfocarse desde una perspectiva relacional. Así, establece que los actores del Estado y de la sociedad lograron establecer alianzas y negociaciones equilibrando sus intereses y pérdidas sobre la política implementada. De esa manera, se habría construido una alianza social supeditada al interés mutuo, donde si bien los actores debían flexibilizar sus intereses, todos conseguían ganancias relativas y permitían, así, que la política pública mantuviera su cauce en el valle.

1.2.3. Medios de vida sostenibles

Para observar de qué manera el proceso de implementación de las iniciativas estatales ha modificado las narrativas y prácticas de los agricultores

del Monzón, se usará el marco conceptual de *sustainable livelihoods*, o “medios de vida sostenibles”. Para Chambers y Conway (1992, pp. 07), el concepto de medios de vida incluye las capacidades, activos -ya sean recursos materiales o sociales- y actividades requeridas por las personas para vivir. Estos se consideran sostenibles cuando pueden hacer frente a tensiones y shocks; mantener o mejorar capacidades y activos en el tiempo; proveer oportunidades sostenibles para conseguir medios de vida a las siguientes generaciones; y beneficiar otros medios de vida a nivel local y global en el corto y largo plazo. Esto último resulta importante en tanto, como el DFID (1999, pp. 07) señala, la adopción de estrategias de vida sostenibles posibilita un mayor progreso en la reducción de la pobreza. Por ello, es importante que la obtención de estos medios no dependa enteramente de apoyo externo, y que si lo hace, esta fuente sea económica e institucionalmente sustentable.

Así, el enfoque plantea que las personas cuentan con diferentes tipos y niveles de recursos, los cuales son desplegados a través de actividades y estrategias que tienen como último fin el logro de ciertos resultados en sus medios de vida (tales como acceso a educación, servicio de agua, aumento del ingreso, reducción de la vulnerabilidad climática, etc.) (Farrington, Carney, Ashley & Turton, 1999, pp. 03). Sin embargo, la elección de las estrategias no solo se deriva de las preferencias de cada individuo, sino también de las vulnerabilidades (shocks económicos, variaciones estacionales, etc.), estructuras (presencia estatal y privada) y procesos (institucionales, políticas, factores culturales) presentes en el contexto (Farrington, Carney, Ashley & Turton, 1999, pp. 03).

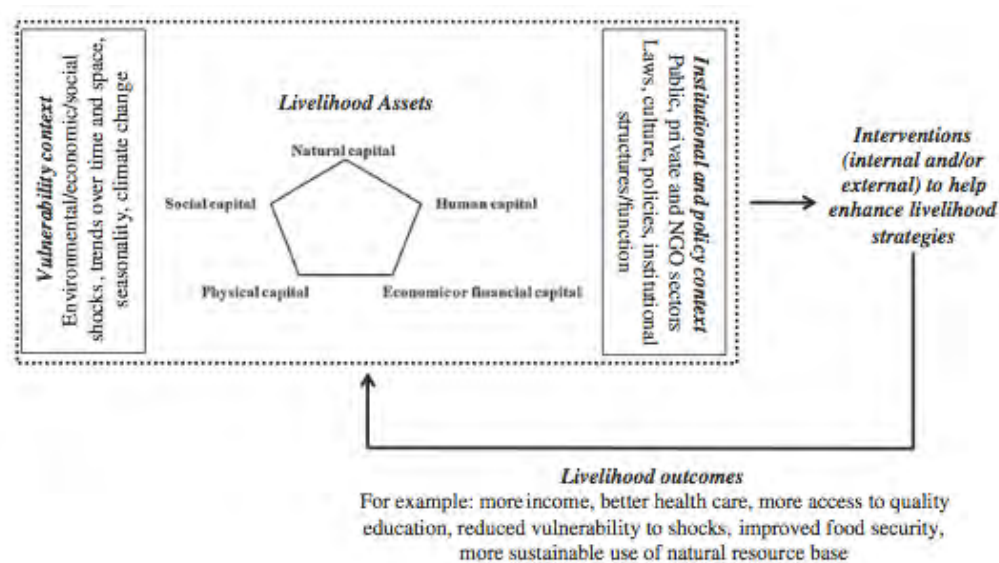


Gráfico 1. Representación gráfica del marco conceptual de medios de vida sostenibles. Fuente: Morse & McNamara 2013: 19.

Para este marco conceptual, las estrategias de vida que los individuos llevan a cabo siempre tienen como resultado deseable un mejor acceso a recursos, ya que se asume que es a partir de estos que se puede lograr una mejora en la calidad de vida y seguridad de subsistencia a largo plazo (Stockbridge & Dorward 2014, pp. 33). Sin embargo, debido a que la configuración de medios y estrategias de vida dependen de la interrelación de todos estos elementos, cada familia, aún si se encuentran en un mismo espacio rural, presenta resultados diversos respecto a su seguridad alimentaria y sustento (Stockbridge & Dorward 2014, pp. 30). Además, reconociendo la importancia que puede tener para un hogar pobre la disminución de riesgos económicos, se entiende que muchas de sus estrategias se dirijan a reducir la vulnerabilidad en esta dimensión, más aún cuando hay fuerte presencia de actividades productivas que implican fluctuaciones, como la agricultura (Stockbridge & Dorward 2014, pp. 30, 31).

A pesar de ello, el enfoque reconoce que no solo los recursos económicos son importantes para las familias rurales, por lo que postula la existencia de cinco tipos de capitales: natural, físico, humano, financiero y social. Los primeros dos hacen referencia a capitales que se encuentran en el medio físico: el natural incluye el stock de bienes naturales y los servicios

ambientales; mientras que el físico se refiere a la infraestructura, medios de producción y tecnologías del entorno. Por otro lado, tanto el capital humano como el financiero y el social se encuentran a nivel de las personas, ya que son ellas quienes los adquieren y/o acumulan interna o externamente. El primero de ellos se refiere a las habilidades, conocimientos, capacidades y trabajos con los que cuentan los individuos, mientras que el capital financiero es aquel que se encuentra en activos económicos, ahorros, crédito o débito y efectivo. Finalmente, el capital social incluye las redes, reclamos sociales, relaciones sociales, afiliaciones y asociaciones a las que pertenece una persona⁶. (Morse & McNamara, 2013, pp. 28)

Asimismo, Morse y McNamara (2013, pp. 29) plantean que, si bien todos los tipos de capitales son importantes, la priorización de estos varía en cada familia, y cambia con el tiempo. Por ello, si se considera provechoso, una familia o individuo podría sacrificar algún capital por otro(s), lo cual también puede revertirse o cambiar en otro momento (Morse & McNamara, 2013, pp. 29). Así, los capitales interactúan a través del tiempo y el espacio, y los hogares pueden reducir o incrementar algunos en detrimento de otros, razón por la que es necesario verlos como elementos dinámicos, en lugar de aislados o estáticos (Morse & McNamara, 2013, pp. 35).

Por otra parte, es necesario recalcar que los capitales no deben entenderse solo como medios para sobrevivir, sino que dan a las personas la capacidad de *ser*, proveyendo una base de poder para actuar y cambiar la sociedad, dando sentido al mundo de las personas (Bebbington, 1999, pp. 2022). En ese sentido, se puede plantear que los capitales tienen tres roles: son vehículos para la acción instrumental -ganarse la vida-, son acción hermenéutica -dar sentido a la vida- y son acción emancipadora -cuestionan las estructuras bajo las que uno sobrevive- (Bebbington, 1999, pp. 2022).

Estos capitales, sin embargo, son adquiridos y desplegados en contextos de vulnerabilidad, razón por la que los hogares deben moldear sus

⁶ Al respecto, Portes (1998, pp. 15) pide considerar que el capital social puede implicar aspectos negativos en los medios de vida de los individuos, ya que este a veces implica exclusión de 'otros', exigencia del grupo hacia los miembros y restricciones en la libertad personal, lo cual tendría consecuencias negativas.

estrategias y sus recursos en función al shock -presión repentina en los medios de vida- o estrés -presión de largo plazo- al que hacen frente (Morse & McNamara, 2013, pp. 35). En ese sentido, para Stockbridge y Dorward (2014, pp. 32, 33), el acceso a diferentes tipos de capitales permitiría reducir la vulnerabilidad de los hogares, ya que posibilitaría responder mejor a las tendencias y cambios a los que se exponen según el contexto en el que se encuentran. Sin embargo, Morse y McNamara (2013, pp. 35) señalan que, debido a que la resiliencia de los capitales varía poco según las características e intensidad de los shocks, si bien la vulnerabilidad a estos puede cambiar, lo hace a pequeña escala.

Por otro lado, Conway y Chambers (1992, pp. 06) señalan que las estrategias de vida están determinadas por aspectos como el lugar y tiempo de nacimiento o el género del individuo. Asimismo, señalan que estas estrategias están fuertemente influenciadas por el contexto social, económico y ecológico en el que se desarrollan, por lo que son cambiantes y modificables. En ese sentido, la habilidad que uno tiene de perseguir ciertas estrategias de vida depende de su base material y social (Scoones, 1998, pp. 07), así como sus oportunidades, restricciones y preferencias (Ashley & LaFranchi, 1997, pp. iii).

De la misma manera, Scoones (1998, pp. 12) resalta la importancia de las instituciones en el acceso a recursos y medios de vida, ya que, al generar obstáculos u oportunidades en los contextos rurales, tienen un rol activo en la composición de estrategias. Por tal razón, el autor plantea la necesidad de considerar las relaciones de poder incrustadas en las estructuras institucionales, las cuales se encuentran en constante dinamismo (Scoones, 1998, pp. 12). Asimismo, Morse y McNamara (2013, pp. 36) plantean la necesidad de analizar el contexto político e institucional en el que los capitales existen, ya que puede que las autoridades limiten o profundicen las situaciones a las cuales estos son vulnerables. Para esto, es importante reconocer el papel y la interrelación entre servicios estatales y no gubernamentales, ya que estos influyen el acceso a recursos, así como las oportunidades y decisiones de las personas.

En conclusión, el enfoque provee un marco conceptual que coloca a las personas en el centro del análisis, observando cómo se transforman a través del tiempo, involucrándose con sus percepciones y enfatizando la importancia que las políticas y acuerdos institucionales tienen en la vida cotidiana de los espacios rurales (DFID, 1999, pp. 05). Asimismo, tiene una mirada holística y dinámica que intenta aprehender las diferencias entre las estrategias de vida que las personas adoptan, comprendiendo que estas están en interconexión con los recursos a los que acceden, el contexto en el que se encuentran y los resultados que obtienen de las actividades que realizan (Stockbridge & Dorward, 2011, pp. 29, 30). En ese sentido, al atender la complejidad de los medios de vida en entornos rurales, esta estructura analítica promueve una mejor comprensión de la multidimensionalidad de la pobreza presente en estos contextos, así como de los procesos y vulnerabilidades que configuran el entorno (Farrington, Carney, Ashley & Turton, 1999, pp. 03, 13; DFID, 1999, pp. 05, 06). Finalmente, analiza los individuos rurales concentrándose en sus fortalezas y no en sus carencias, reconociendo sus habilidades para acceder a recursos e influenciar en su contexto, sin perder de vista las relaciones entre el escenario macro y micro ni olvidar la importancia de la sustentabilidad en el proceso (DFID, 1999, pp. 06).

1.2.4. Síntesis

Aplicar el enfoque territorial y de estrategias de vida a un fenómeno caracterizado por economías ilícitas trae muchos beneficios. Como se ha planteado, el estudio del tráfico ilícito de drogas bajo el enfoque de cadena de valor tiene un fuerte componente territorial, ya que permite comprender que cada eslabón de la cadena económica se establece en un territorio diferente bajo organizaciones y normas distintas. En ese sentido, la forma en que se organiza la producción de hoja de coca ilegal en el Monzón no solo sigue las pautas de la economía ilícita sino que también se configura en relación a los actores, instituciones y aspectos geográficos que caracterizan al territorio.

Así, las dinámicas sociales, económicas y políticas del valle se han construido en relación con la economía ilícita, por lo que las narrativas y prácticas, tanto individuales como colectivas, también se han configurado en esa interrelación. En ese sentido, las estrategias de vida desarrolladas por los productores han buscado, por muchos años, adaptarse y beneficiarse de un contexto fuertemente articulado a la producción de hoja de coca ilegal.

Debido a que las intervenciones estatales que se han aplicado en el territorio en los últimos años han transformado las dinámicas productivas, sociales y políticas del valle, se espera que las estrategias de vida de la población también se hayan modificado. Al pasar del cultivo de coca ilegal a cultivos lícitos, los riesgos a los que los agricultores se enfrentan son de otra índole, además de que las organizaciones con las que ahora se relacionan han cambiado. Es necesario que este proceso de modificación del contexto institucional y de vulnerabilidades sea analizado de manera territorial, en tanto las características particulares del Monzón influirán en las estrategias adoptadas por los y las agentes rurales. La presión por el abandono de la actividad productiva principal del valle, así como por el involucramiento de la población con nuevos cultivos y cadenas de valor, tienen lugar en un contexto territorial particular, no solo a nivel local sino nacional y global. La vinculación del Monzón con una dinámica internacional ha variado, lo cual ha repercutido en el éxodo de ciertos actores sociales y mayor presencia de otros, todo lo cual tiene efectos en las dinámicas individuales, familiares y colectivas del valle.

En conclusión, la pregunta que esta investigación se formula solo puede responderse tomando en consideración los marcos conceptuales explicados anteriormente. Es necesario comprender el funcionamiento de las economías ilícitas y el impacto que estas tienen en la caracterización de los territorios que las albergan, así como la manera en que los actores, instituciones y activos de los espacios locales configuran la manera en que estas economías operan. Asimismo, la transformación del territorio y las actividades que se desarrollan en él influenciará necesariamente la forma en que la población se provee de sus medios de vida, por lo que la configuración de sus estrategias se modificará en interrelación con el territorio y su economía.

1.3. Hipótesis

A partir de las investigaciones y perspectivas recogidas en el estado del arte y el marco teórico, es posible plantear algunas hipótesis respecto al objeto de estudio.

- El proceso de implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas se ha dado de manera desarticulada en el valle del Monzón.

Esta hipótesis propone que, debido a que el Estado peruano no es un ente integrado y coherente, sino un conjunto de múltiples partes con objetivos y prioridades diferentes, las iniciativas estatales implementadas en el valle del Monzón se han llevado a cabo de manera desarticulada. El que las iniciativas de interdicción, control de cultivos y Desarrollo Alternativo sean responsabilidad de instituciones con lógicas y propósitos distintos, habría tenido como consecuencia la priorización de metas operativas particulares y no un objetivo final conjunto.

- La manera en que se han implementado las iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas ha dificultado la construcción de estrategias de vida sostenibles para los agricultores del valle del Monzón.

Desde esta hipótesis se plantea que la actuación de las instituciones estatales en el valle han generado un escenario perjudicial para la construcción de estrategias de vida sostenibles por parte de los agricultores. Esto debido a que las metas de las intervenciones en el valle han sido el alcance de objetivos institucionales dirigidos a la lucha contra el narcotráfico y no contra las causas estructurales de la pobreza rural sobre las que este se asentaba. El que la promoción del desarrollo rural territorial en el Monzón no haya sido un objetivo

de las intervenciones ha profundizado las vulnerabilidades y dificultado la generación de oportunidades para los agricultores del valle.

- Los capitales (natural, físico, humano, financiero y social) de los que disponían los agricultores antes de la implementación de iniciativas estatales, han influenciado las estrategias de vida que han decidido configurar para responder a tal proceso.

A partir del marco conceptual de “estrategias de vida”, se propone que, en un contexto de grandes cambios institucionales y políticos, los capitales de los que dispone la población marcarán grandes diferencias en las estrategias de vida que los agricultores decidan desplegar. En ese sentido, según sus recursos y experiencias previas, los productores tendrán diferentes posibilidades en cuanto a qué estrategias utilizar para conseguir sus medios de vida, a pesar de que el valle esté pasando por un proceso de cambio, a grandes rasgos, similar. Debido a que las familias, aun estando dentro de un mismo espacio rural, viven realidades distintas en cuanto a su seguridad alimentaria y sustento, la configuración de sus estrategias variará ampliamente. Asimismo, las valoraciones sobre aquello que resulta más importante no son homogéneas en los agricultores ni se mantienen estáticas a través del tiempo. Por ello, puede adelantarse que la configuración de las estrategias de vida se dará dependiendo de la base material y social, así como las oportunidades, restricciones y preferencias de cada individuo.

1.4. Metodología

1.4.1. Diseño de investigación

Debido a la pregunta que esta investigación busca responder, se ha optado por usar la estrategia de investigación del estudio de caso. Para Della Porta (2013, pp. 226), esta se basa en la investigación empírica a profundidad de uno o más fenómenos, con la intención de explorar la configuración de un

caso y esclarecer las características de otros fenómenos similares, aportando en el desarrollo de explicaciones teóricas. Además, esta estrategia permite investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, ya que reconoce que ambos están fuertemente ligados y se construyen de manera dialéctica (Yin, 2003, pp. 13). En ese sentido, este enfoque permite observar las narrativas y los comportamientos de los sujetos de estudio en su vida cotidiana, introduciéndose en ella para analizarla.

Por otro lado, se optó por un estudio de caso simple, por lo que solo se investigó el caso del valle Monzón. Esto se debe a que este es un “caso revelador” que permite comprender un fenómeno que ha sido muy poco estudiado desde las ciencias sociales (Yin, 2003, pp. 41). En la actualidad, el valle está viviendo un proceso de transformación que busca reemplazar la economía ilícita por actividades productivas legales, lo cual tiene consecuencias económicas, sociales y políticas para la población. Así, a pesar de que las iniciativas se han implementado hace pocos años y los resultados a largo plazo aún no se conocen, es posible observar la forma en que la población está configurando diferentes estrategias de vida tanto para adaptarse al proceso, como para beneficiarse de él en el futuro.

Debido a ello, el enfoque más conveniente para responder la pregunta de investigación es el cualitativo. Este permite recopilar información a la que no puede accederse mediante otros métodos, tal como la observación de cómo actúan las personas en su contexto cotidiano (Babbie, 2010, pp. 297). Asimismo, posibilita conocer cómo un fenómeno es interpretado por quienes participan en él (Weiss, 1995, pp. 10), lo cual es central para esta investigación. Por tal razón, si bien existen indicadores cuantitativos que miden la implementación de las iniciativas estatales, esta investigación busca indagar sobre la manera en que estas se han llevado a cabo, ya que ello determina la forma en cómo modificarán la vida de las personas. Aún más importante, las estrategias de vida adoptadas por la población del valle se comprenderán observando sus prácticas y analizando sus narrativas, para lo cual es necesario hacer uso de herramientas cualitativas.

1.4.2. **Ámbito de estudio y selección de casos**

A pesar de que el valle está conformado por 13 centros poblados, la investigación solo se desarrolló en el centro poblado de Cachicoto y la capital distrital de Monzón, debido a que estos son el centro económico y político del valle, respectivamente. Sin embargo, también se conversó con productores de los centros poblados de La Granja, Caunarapa, Camote y Tazo Grande, así como con productores que tenían sus parcelas y familias en centros poblados como Sachavaca, Matapalo y Santa Rosa de Chacrita. Esto se explica porque, como lo señala el enfoque de Desarrollo Territorial Rural, el territorio no se define únicamente en base a los límites técnicos y políticos, sino a partir de la experiencia cotidiana de los actores sociales. En el caso del valle del Monzón, los productores están movilizándose constantemente entre centros poblados, los cuales están a una distancia relativamente corta en medios motorizados. Por esa razón, muchos de ellos habitan en un centro poblado pero tienen sus chacras en otro. A pesar de ello, no se espera que los resultados de este estudio sean generalizables, ni para todo el centro poblado de Cachicoto ni Monzón, y mucho menos para toda la extensión del valle.

Por esa razón, el muestreo de esta investigación no ha sido representativo, sino que la selección de casos se ha hecho a través de la aproximación a agricultores casa por casa y la estrategia de bola de nieve. Esto permitió acceder a grupos de agricultores que compartían características similares, a la vez que no se limitaba al estudio a una red social en particular.

A través de dos viajes al valle, uno realizado en abril del 2018 y el otro en agosto-setiembre del mismo año, se entrevistaron a 38 productores, 25 de los cuales fueron hombres y 13 mujeres. Del total de entrevistados, 19 habitaban en Cachicoto, 12 en Monzón, 3 en Camote, 1 en Caunarapa, 1 en Río Espino, 1 en La Granja y 1 en Tazo Grande. Sin embargo, ocho de ellos declararon no haber nacido en el valle, sino haber migrado a él cuando aún podía cultivarse coca.

| | |
|-------------|----|
| Cachicoto | 19 |
| Monzón | 12 |
| Camote | 3 |
| Caunarapa | 1 |
| Río Espino | 1 |
| La Granja | 1 |
| Tazo Grande | 1 |

| | |
|-----------|----|
| Locales | 30 |
| Migrantes | 8 |

Cuadros 1 y 2. Relación de agricultores y agricultoras entrevistadas según centro poblado y lugar de origen. Fuente: Elaboración propia.



Gráfico 2. Mapa del valle del Monzón. Fuente: DEVIDA.

Todos los entrevistados tenían más de 14 años, razón por la que, según lo planteado por el INEI, se consideran personas “en edad de trabajar”. De ellos, 4 personas eran jóvenes (de 15 a 29 años), 33 personas eran adultas (de 30 a 59 años), y solo 1 persona era adulta mayor (más de 60 años).

| | |
|-----------------|----|
| Jóvenes | 4 |
| Adultos | 33 |
| Adultos mayores | 1 |

Cuadro 3. Relación de entrevistados por edad. Fuente: Elaboración propia.

Si bien en un inicio se pensó enfocar el estudio solo en aquellos agricultores que contaban con coca ilegal al momento de la erradicación, durante el procesamiento de la información se mostró relevante también incluir a quienes no la tenían. En ese sentido, 31 personas declararon tener coca cuando llegó la erradicación, 4 señalaron no tenerla, y 2 no contaban con parcelas propias por ser muy jóvenes durante esa etapa. Por otro lado, 24 agricultores se encontraban vinculados con DEVIDA; 4 lo estuvieron previamente pero, para el momento de la entrevista, ya no lo estaban; 5 nunca estuvieron vinculados a la institución; de 3 personas no se obtuvo información al respecto; y 2 no contaban con parcelas propias.

| Posesión de coca al momento de la erradicación | Vinculación con DEVIDA al momento de la entrevista |
|--|--|
| Sí tenía coca | 20 vinculados con DEVIDA |
| | 4 se inscribieron pero ya desvinculados |
| | 5 nunca vinculados con DEVIDA |
| | 3 no se recogió información |
| No tenía coca | 4 vinculados con DEVIDA |
| No aplica | 2 no aplica |

Cuadro 4. Relación de entrevistados por posesión de coca al momento de la erradicación. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el cuadro anterior, todas las personas que señalaron no estar vinculados con DEVIDA durante sus entrevistas, tenían coca ilegal al momento de la erradicación. Por otra parte, todas las personas que señalaron no tener coca cuando llegó la erradicación, se encontraban vinculadas a DEVIDA cuando fueron entrevistados. Debido a que la situación

de la población es delicada, se decidió no brindar datos que pudiesen identificar a los entrevistados, razón por la que, cuando se presenta una cita textual, solo se coloca su rango de edad y lugar de residencia.

1.4.3. Técnicas de recopilación y análisis de información

Para recopilar la información que la investigación requiere se hizo uso de instrumentos cualitativos. En primer lugar, se entrevistaron a expertos y funcionarios públicos que residían en Lima y conocían la situación del Monzón y la forma en que el Estado ha intervenido en él y otras cuencas cocaleras. Esto porque, en su mayoría, los actores trabajaban –o trabajaron– en instituciones que intervinieron en el proceso de implementación, tales como DEVIDA, el CORAH y USAID. Ello permitió recopilar datos sobre cómo, desde tales posiciones, se considera que se han llevado a cabo las iniciativas.

Como se mencionó previamente, más adelante se realizaron dos viajes al Monzón en el que se aplicaron entrevistas semi estructuradas a diferentes actores que residen o laboran en el valle. Así, se conversó con las autoridades políticas del lugar, preguntándoles sobre su rol en la implementación de las políticas estatales, así como su percepción respecto a sus avances y dificultades. Además, se entrevistaron productores del valle, lo cual permitió conocer la heterogeneidad de estrategias de vida –observadas como prácticas y narrativas– desplegadas a partir de las intervenciones estatales, así como los resultados que estas han generado a nivel individual y colectivo.

Además, se entrevistó a ingenieros del Proyecto de Recuperación de Suelos, el cual es ejecutado por la Municipalidad de Huamalíes pero financiado por DEVIDA. De la misma manera, se entrevistó a funcionarios públicos de DEVIDA de la Oficina Zonal de Tingo María y la Oficina de Coordinación Monzón, ya que ellos son quienes se encargan de implementar en el valle, en coordinación con otras instituciones, las iniciativas en materia de lucha contra las drogas. Por eso, se les preguntó sobre su perspectiva respecto a cómo se aplican los programas estatales, así como cuáles son sus principales beneficios y dificultades. De la misma manera, se indagó sobre sus

percepciones respecto a cómo estas iniciativas han modificado las estrategias de vida de los pobladores, lo cual permitió conocer las similitudes y diferencias que existen entre sus narrativas y las de los agricultores.

| Institución | Número de entrevistados |
|--|-------------------------|
| DEVIDA: Oficina Central Lima | 3 |
| DEVIDA: Oficina Zonal Tingo María | 7 |
| DEVIDA: Oficina de Coordinación Monzón | 1 |
| Proyecto Recuperación de Suelos | 3 |
| CORAH | 1 |
| USAID | 1 |
| Experto en criminología | 1 |

Cuadro 5. Relación de funcionarios y expertos entrevistados por institución. Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis de esta información se transcribieron las entrevistas grabadas, para luego ingresarlas al programa Atlas.ti, donde fueron codificadas a partir de las variables de la matriz de operacionalización del estudio. A través de 50 códigos se facilitó el análisis de los casos, los cuales fueron luego pasados a una matriz que albergaba la información más relevante sobre la variable dependiente e independiente del estudio. A partir de ello, fue posible encontrar patrones de similitud dentro de la heterogeneidad que caracteriza la población del valle.

Además de esta información primaria, se acudió a fuentes secundarias que permitieran comprender la situación en el valle antes de la erradicación de coca, así como los lineamientos técnico-políticos a partir de los cuales se interviene en el valle. Por eso, además de la revisión de literatura, se hizo una revisión de las noticias sobre el valle publicadas por medios como La República, El Comercio, Info región, RPP e IDL-Reporteros. Asimismo, se revisaron datos sobre el distrito del Monzón a través de CENAGRO, los censos nacionales del 2007 y 2017 y los portales virtuales REDInforma e InfoMIDIS.

Capítulo 2: Contexto

2.1. Socio demografía del valle del Monzón

Para el año 2007, Huánuco era el segundo departamento con más hectáreas de hoja de coca cultivadas en el Perú. En él, el 21.3% de la población vivía en distritos con presencia de cultivos, y el Monzón era aquel con la mayor concentración en todo el país (Zevallos, 2012, pp. 44, 45). Este distrito, junto con otros tres, constituyen el valle del Monzón, territorio conformado por 13 centros poblados y una capital distrital, y ubicado aproximadamente a 40 kilómetros de distancia de la ciudad de Tingo María.

Entre los años 2001 y 2009, el Monzón producía más del 60% del total de la hoja de coca del Alto Huallaga, principal centro de producción cocalera en el país hasta el año 2011. Para el 2013, el valle albergaba el 83% del total de hectáreas cultivadas en esta cuenca, y el 16% del total cultivado a nivel nacional. (UNODC; DEVIDA, 2015, pp. 31, 34)

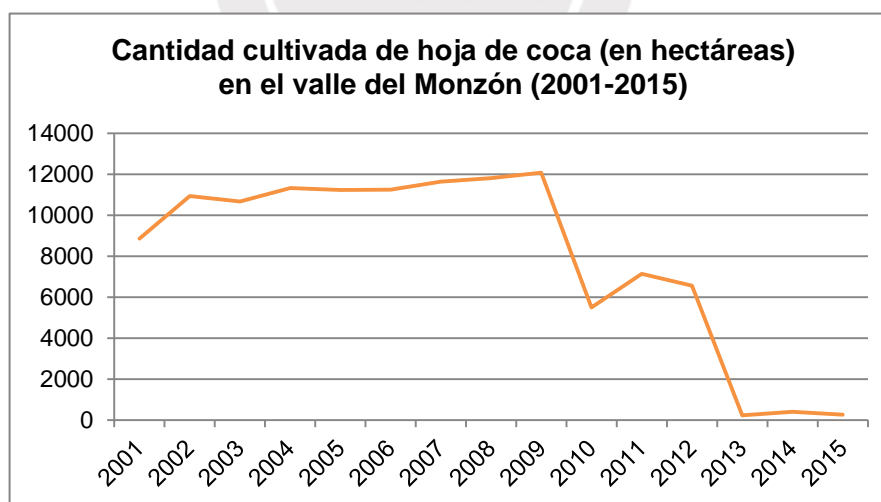


Gráfico 3. Cantidad de hectáreas cultivadas de coca ilícita en el valle del Monzón entre el 2001 y 2015. Fuente: Elaboración propia. En base a UNODC 2001-2015.

Si bien la producción de hoja de coca puede destinarse a diversos mercados⁷, en el caso del Monzón la mayoría de los cultivos eran vendidos al

⁷ Existen tres tipos de transacciones en el mercado de hoja de coca: formal, informal e ilícita, así como dos tipos de consumo: el tradicional y el narcotráfico (Glave & Rosemberg, 2005, pp.

ilegal. Según las cifras publicadas por La República (19 de febrero 2004) en base a un estudio realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en el 2000, el narcotráfico era el cliente que más producción adquiriría en el valle del Monzón, llevándose el 43% del total de la hoja de coca cultivada. Por otro lado, solo el 2% del total producido habría sido destinado a la venta legal a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), la única autorizada para la compra de este bien en el país. Un 15% se vendería de manera ilegal en el mercado de Tingo María, a pesar de que el destino de la coca sea su consumo legal, mientras que un 20% se intercambiaría con comunidades de la sierra y minas aledañas. Finalmente, un 20% iría al consumo local para faenas comunales y las pérdidas del producto a causa de la humedad.

Sin embargo, estas cifras distan mucho de las publicadas por Glave y Rosenberg (2005, pp. 15) respecto a la venta de coca a nivel nacional, donde señalan que el 92% de lo producido se destina al narcotráfico, y dentro el 8% se encontraría lo transado con ENACO, el contrabando (vendedores informales) y el consumo tradicional. Esto se explica por la diferencia de precios que cada mercado provee, ya que mientras un kilo de coca para ENACO costaría S/5.19 y para los vendedores informales S/5.66, los narcotraficantes pagarían S/9.55⁸ (García-Yi, 2014a, pp. 1114).

A pesar de estas incongruencias, la importancia de la venta de coca ilícita en el valle del Monzón se puede observar a través de la cantidad de población involucrada en el negocio. Tomando en consideración que la agricultura es la actividad económica principal en la zona, empleando al 33.3% de su población (Zevallos, 2012, pp. 47), es resaltante que gran parte de esta se encontrara vinculada a la producción de coca. Es así que, en la cuenca baja del Monzón, el 94.8% de jefes de hogar encuestados se dedicaban a la

15). Para poder cultivar coca para usos tradicionales y medicinales (y venderla de manera formal), la Ley 22095 indica que los campesinos deben estar inscritos en el Padrón General de Productores de Hoja de Coca, mediante el cual se les autoriza comercializar la producción a través de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO, 2016). Pese a ello, el padrón fue cerrado en 1978, y su modificación está prohibida por la misma ley (ENACO, 2016).

⁸ Esta cifra parece haber sido mayor ya que en las entrevistas se señaló que el precio de la arroba de coca rondaba entre 40 y 50 dólares, lo cual equivaldría a aproximadamente 4 dólares por kilo.

agricultura, y el 78.9% de ellos declaraba dedicar tiempo al cultivo de coca (DEVIDA, 2015, pp. 35, 36). Sin embargo, a través de una encuesta realizada por DEVIDA en cuencas cocaleras, es posible conocer que la mayoría de la PEA en estas zonas era masculina. Respecto a este punto, varios entrevistados señalaron que durante los años previos a la erradicación el trabajo agrícola era usualmente encargado a los hombres, mientras que las mujeres se dedicaban a las tareas del hogar. Esto porque no se requería la participación de ambos en la chacra, ya que en épocas de siembra y cosecha se contrataban peones para realizar el trabajo, siendo las mujeres e hijos los encargados de la alimentación de estos. Si bien no se conoce hasta qué punto esto pudo fortalecer tendencias machistas en los centros poblados, en un estudio hecho por DEVIDA (2003) se encontró que el 74.1% de los encuestados pensaba que es el varón quien debe tener la autoridad en la familia, siendo también que para el 57.6% el esposo es quien debe decidir si la mujer trabaja o no.

Por otro lado, la importancia que tuvo el cultivo ilícito de coca en el valle también se visualiza observando la procedencia de gran parte de su población. Las oportunidades económicas abiertas por la industria de la cocaína en el Alto Huallaga atrajo mucha migración andina que, en su mayoría, se vinculó al mercado como peón o jornalero (Van Dun, 2009, pp. 90-96). Así, en el caso de la cuenca baja, el 67% de los jefes de hogar declaró haber nacido en otra localidad (DEVIDA, 2013, pp. 20). De la misma manera, del total de agricultores encuestados por CENAGRO (2012) en el distrito del Monzón, el 30% declaró tener como lengua materna el quechua, mientras que el resto tendría el castellano, a excepción de una persona que señaló el asháninca.

Por otra parte, un rasgo relevante para contextualizar el territorio es que el 56.3% de los agricultores de la cuenca baja del Monzón cuenta con un área menor o de hasta tres hectáreas (DEVIDA, 2013, pp. 26), lo cual se vuelve problemático al considerar que la hoja de coca no sería rentable en extensiones de ese tamaño (Zevallos, 2014, pp. 102, 103). Esto se relaciona con el hecho de que el 89% de los agricultores del distrito del Monzón declarara que los ingresos de la actividad agropecuaria no eran suficientes

para cubrir sus gastos, por lo que el 77% señalaba dejar de trabajar en su unidad para conseguir otros ingresos⁹ (CENAGRO, 2012). Estos trabajos, sin embargo, son usualmente empleos no calificados, en tanto el nivel de educación del 64% de la población alcanzaba, como máximo, la primaria completa (INEI, 2007).

A pesar de que usualmente se piensa que el involucramiento en economías ilícitas provee a los participantes de mucho dinero, la atomización del ciclo productivo del TID genera que estas ganancias difieran mucho según el eslabón que uno analice. En el caso de la coca, los agricultores optan por dedicarse a este cultivo por las ventajas comparativas frente a aquellos lícitos, lo cual no implica que la coca sea una inversión rentable. Tal como lo señala Zevallos (2012, pp. 50, 51), adquirir un terreno e iniciarse en esta actividad implica una alta inversión de tiempo –en que no se recibe ningún ingreso– y dinero, debido a la necesidad de contratar peones para la preparación del terreno¹⁰. Debido al trabajo extensivo que implica la coca, estos jornaleros también debían contratarse en el plantado y cosecha del producto, la cual ocurría cada tres meses (Zevallos, 2012, pp. 51, 52).

A pesar de que la actividad no resulta rentable para la mayoría de agricultores, cuyos terrenos son menores a 3 hectáreas, ni para los colonos que deben iniciar la actividad desde cero, estos actores optan por este cultivo porque la coca (1) da más dinero que otros productos, (2) genera más ocupación que otros cultivos, y (3) es más fácil de vender que otros productos (Zevallos, 2012, pp. 58). Sin embargo, tomando en consideración que la mayoría de agricultores declara haber tenido entre 30 y 50 arrobas de coca, cada una de las cuales vendía a 40 – 50 dólares, puede calcularse que el ingreso promedio trimestral rondaba los 3 400 dólares. Sin embargo, a esto hay que restar la inversión en agroquímicos y pesticidas y, principalmente, en jornales, de los cuales se requeriría un aproximado de setenta por hectárea en

⁹ Esto se contrapone a la situación nacional, en la que, si bien el 77% señala que la actividad agropecuaria no les provee suficientes ingresos para cubrir sus gastos, solo el 41% declara dejar su unidad agropecuaria en busca de otros.

¹⁰ En el Monzón, los ex cocaleros señalan haber pagado jornales de hasta 25 soles diarios, además de proveer alimentos durante la jornada de trabajo.

época de cosecha (Zevallos, 2012, pp. 60), lo cual equivale a una inversión trimestral de S/. 5 250 por hectárea. Al tipo de cambio en el 2007, y solo contabilizando la inversión mencionada anteriormente, se tiene que el ingreso mensual de un hogar con esta producción llegaría a los 1 800 soles, siendo que el promedio de familias estaba conformada por de 3 a 4 miembros. Considerando que no se está calculando la inversión en agroquímicos, pesticidas, ni mano de obra en otras épocas fuera de la cosecha, queda claro que los ingresos son aún menores al monto señalado.

Estos ingresos, además, son utilizados en una economía local “inflada”, en la que el precio de los insumos y trabajo es más alto por la alta circulación de dinero, principalmente en dólares.

Antes compraba un racimo de hinguiri a 25 soles, 28 soles el racimo, y eso rogado; y yo no como sin plátano, que tenía que comprarme plátano, no importaba qué costaba para comer. Entonces comía, por no sembrar teniendo chacra, ¡tanta chacra por gusto! Por no sembrar.
(Agricultora, adulta, Cachicoto)

En ese sentido, dedicarse a la hoja de coca en estas localidades, más que ser una ocupación que genera grandes riquezas a los productores, es la que mayores ventajas comparativas ofrece en un contexto de limitadas alternativas. Esta situación se evidencia al observar que, en el 2007, el 81.2% de los habitantes del Monzón vivía en hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, y el 43.8% en hogares con dos o más (Zevallos, 2012, pp. 45). Antes de la erradicación, la tasa de hogares sin servicios de información y comunicación era de 95% -contra un promedio nacional de 47%-, mientras que solo el 10% tenía acceso a electricidad y el 22% a sistemas de alcantarillado y drenaje (Heuser, 2017, pp. 115). Asimismo, la pobreza en el valle ascendía al 66.4% en el 2009, mientras que el IDH del 2012 marcaba una cifra de 0.28, en comparación a un 0.5058 de promedio nacional (DEVIDA, 2015, pp. 16). Es así que DEVIDA (2013, pp. 41) estimó que, si la economía del hogar solo se sustentara en la comercialización de cultivos lícitos, en el Monzón existiría un 86% de pobreza total y una pobreza extrema del 70%.



Fotografía 1. Calle principal de Cachicoto, por la que se accede a los siguientes centros poblados del valle del Monzón. Fuente: Elaboración propia.

A pesar de esta situación, es relevante reparar en los resultados de la encuesta realizada por DEVIDA (2003, pp. 30, 31) en la zona Leoncio Prado-Monzón. Aquí se encontró que el 60% de los participantes estaba predispuesto a ser beneficiario de programas de Desarrollo Alternativo, siendo que para el 62% los cultivos de coca podían ser reemplazados por alternativos. Esto muestra que, más allá de la importancia de la coca, la población encuestada consideraba como una opción viable el vincularse al Desarrollo Alternativo. Esto, sin embargo, no se veía acompañado por una confianza en el Estado, en tanto el 77.9% consideraba que al gobierno le interesaba más erradicar el cultivo de coca que erradicar la pobreza.

En ese sentido, la población del valle ha encontrado en la producción de hoja de coca ilegal un sustento económico que les permite satisfacer, en diversos grados, las carencias que experimentan. Esto en un contexto en el que el Estado y sus servicios han tenido poca presencia, más aún en años en los que no solo convivían con el narcotráfico sino también con violencia subversiva.

2.2. Repaso histórico

La fuerte articulación con la economía ilícita de la que se ha hecho mención, se posibilitó por la limitada presencia estatal durante los años previos a la implementación de políticas nacionales. Esto, a su vez, fue facilitado por la misma geografía del territorio, caracterizada por colinas escarpadas y un único acceso a través de una vía sin asfaltar (Heuser, 2017, pp. 115). Así, actores no estatales tuvieron una fuerte injerencia en el valle y su economía por muchos años. La Poderosa Federación de Cocaleros del Valle del Monzón (PFCVM), reconocida como el gremio más importante del Alto Huallaga, mantuvo una alta influencia en los gobiernos locales y regionales, ya sea mediante la adherencia del alcalde al gremio o su apoyo a la defensa de la hoja de coca (Casas, 2015, pp. 03). Asimismo, firmas locales y grupos terroristas estaban presentes en el territorio, participando de diferentes formas en la economía ilícita y la defensa del cultivo (Casas, 2015, pp. 03).

Si bien el aumento progresivo del cultivo de coca en Huánuco data de 1945, es a partir de la llegada de los cárteles de Colombia y México que los niveles de producción y comercialización de la droga en el Alto Huallaga incrementaron exponencialmente, generando un ciclo de auge desde 1970 hasta 1995 (CVR, 2003, pp. 312). En esta época, la alta demanda y precio de la hoja de coca fomentaron el involucramiento de la población en la actividad, así como la inmigración desde la sierra de Huánuco, Pasco y Ancash a las provincias de Leoncio Prado y Huamalíes (CVR, 2003, pp. 312, 313).

En respuesta a este fenómeno, durante las décadas de 1970 y 1980, el Estado impulsó una política contra el narcotráfico basada en programas de erradicación, sustitución, e interdicción policial, las cuales centraban sus esfuerzos principalmente en los productores de hoja de coca (CVR, 2003, pp. 335). La creación de esta burocracia tuvo como respuesta el surgimiento de organizaciones campesinas que buscaban defender el cultivo de coca y que, luego de negociaciones fallidas con ministros del gobierno de Morales Bermúdez y Belaúnde, llevarían a cabo paros regionales y una huelga de 11

días, en la cual participaron miles de campesinos cocaleros de Chinchao, Monzón, Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad. (CVR, 2003, pp. 336, 337)

Así, la CVR (2003, pp. 313) plantea que el rechazo por el Estado y sus políticas era compartido a lo largo del Alto Huallaga, lo cual habría sido aprovechado por el PCP-SL para establecerse en el territorio. En el caso del Monzón, si bien el valle sirvió como ruta de ingreso al Huallaga para los subversivos en 1982, fue recién dos años más tarde que se registraron las primeras acciones de proselitismo y formación de cuadros en la zona (CVR, 2003, pp. 355).

Es desde ese año hasta 1999 que la CVR (2003, pp. 343) documenta un total de 252 muertos y desaparecidos en el distrito del Monzón (Tabla 1), cifra que, según el ex alcalde de Cachicoto, ascendería a más de mil si todos los hechos hubiesen sido registrados.

| Distrito | Total | Año en el que ocurrieron los hechos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| Monzón | 252 | - | - | 2 | | 23 | 9 | 15 | 8 | 15 | 14 | 33 | 40 | 29 | 25 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | - |

Tabla 1. Número de muertos y desaparecidos reportados a la CVR en el distrito del Monzón por año de ocurrencia de los hechos. Fuente: Elaboración propia. En base a CVR 2003: 343.

Por esta razón, para la población del valle estos años son recordados como una época en la que se ejerció gran violencia contra ellos, tanto de parte de Sendero Luminoso como del Ejército. A partir de los datos recopilados por el Centro de Documentación del LUM, se evidencia que, dentro del distrito del Monzón, ambos actores cometieron asesinatos, detenciones, torturas, desapariciones, secuestros y violaciones.

La subversión era fuerte, de parte del Estado como de Sendero. Dos terrorismos. Por ejemplo, venía la subversión por acá, llamaba a los campesinos a hacer su reunión. Pasaba eso, llegaba el ejército, lo mismo otra vez, maltrataba a la gente. Cuánta gente de acá no existe, ¿y eso quién dice? Nadie. Ni periodismo, ni el Estado, nadie.
(Agricultor, adulto, Monzón)

En ese sentido, la única representación estatal que existía en el valle en aquella época se daba a través de las incursiones del Ejército, ya que el puesto policial que antes estaba presente en la zona fue destruido por Sendero

Luminoso en 1984 (La República, 22 de mayo 2005). Sin embargo, las Fuerzas Armadas no solo se recuerdan como una institución que agredía a la población del valle, sino también como una que se beneficiaba de la economía ilícita.

Nosotros para qué, no te voy a mentir, nosotros en ese tiempo, 90, 85, 85 - 90, cuando vino la subversión, estábamos, prácticamente estábamos entre la espada y la pared. Venía la subversión a confiscarnos, venía el ejército, también. Porque si nosotros nos resistíamos era cuello pues, nos mataban. Cuánta familia hemos perdido nosotros en ese tiempo. (...)

¿Y en ese entonces cómo era el tema de la hoja de coca?

Sustentaba pues la coca, sustentaba, tanto para el ejército, como para el terrorismo.

¿Ellos permitían cultivar?

Sí, normal, hemos cultivado, el ejército, nos pedían cupo...

¿Cómo era esa relación?

Nosotros le dábamos al ejército la coca cuando nos pedían, a un sencillo nos daban, con eso educábamos a nuestros hijos.

(Agricultor, adulto, Cachicoto)

Tal como lo señala la CVR (2003, pp. 762, 763), durante los años en que el terrorismo y el narcotráfico convivieron en el Alto Huallaga, existe evidencia de que, así como habían relaciones entre el PCP-SL y las firmas locales, las habían entre estos actores y el Ejército¹¹. La mayoría de las bases anti subversivas se encontraban muy cerca de las pistas clandestinas desde las que salía la cocaína del narcotráfico, las cuales serían dinamitadas entre 1992 y 1993 (CVR, 2003, pp. 763). En el caso del Monzón, eran tres las pistas emplazadas cerca de una base contra subversiva: “Cachicoto”, “Tantamayo” y “Maravillas” (CVR, 2003, pp. 763).

Por otro lado, es necesario señalar que, si bien el repliegue del PCP-SL inició en 1992, con la captura de Abimael Guzmán y la promulgación de la Ley de Arrepentimiento (CVR, 2003, pp. 324), remanentes del partido se mantuvieron presentes en el valle durante los años 2000. Esto se puede

¹¹ Aún en el 2011 se ha encontrado evidencia de la participación de efectivos militares en la economía ilícita del Monzón. En dos operativos policiales se encontraron prendas del Ejército en laboratorios de drogas allanados por agentes de la División de Operaciones Especiales Antidrogas (Info región 29 setiembre 2011)

constatar a través de noticias publicadas durante esos años, en las cuales se registran pintas (La República, 23 mayo 2005), colocación de trapos rojos con la hoz y el martillo (El Comercio, 29 julio 2012; La República, 8 marzo 2011), y asesinatos (La República, 29 julio 2006; RPP, 7 setiembre 2009).

Según las estimaciones de Hugo Cabieses y el Crime and Narcotics Center, se aproxima que la década de los noventa fue aquella con mayor extensión de hoja de coca en el Monzón, rodeando las 30 mil hectáreas (Cabieses, 2007, pp. 68). Sin embargo, entre 1994 y 1997 se habría producido una disminución de cultivos debido a la baja del precio internacional de la coca, aunque esta tendencia se revertiría desde 1998, año en el que vuelven a aumentar los cultivos (Cabieses, 2007, pp. 69). A pesar de ello, esta baja de precios habría generado que algunos agricultores del valle decidan modificar la importancia relativa que tenía el cultivo de coca dentro de sus economías.

Durante esta década, además de las dinámicas cambiantes en el precio de la coca, ocurren también dinámicas importantes en torno a la defensa de su cultivo. Según lo señalado por Anahí Durand (2005, pp. 119), a inicios de los años 1990, el bajo precio de la hoja y el estado de emergencia en las zonas cocaleras más importantes debilitaron los gremios locales y limitaron sus posibilidades de conformar una organización nacional. Esto permitió el trabajo con la cooperación internacional en proyectos de desarrollo alternativo, tal como lo fue el caso de las Naciones Unidas en el Monzón¹².

Sin embargo, la reanudación de la erradicación forzosa en Aguaytía y Tocache en 1998 generó la fundación de la Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONAPA-Perú) (Durand, 2005, pp. 120). Cuatro años más tarde, nuevas erradicaciones se implementaron bajo la presión norteamericana por una política de “coca cero”, ante lo cual los agricultores realizaron huelgas, marchas y bloqueos de caminos (Cabieses, 2007, pp. 89). A pesar de la instalación de diálogos

¹² Esta institución llevó a cabo un proyecto agrícola que promovía el cultivo de productos alternativos tales como el arroz, brindando asistencia y maquinaria a los pobladores del valle. Sin embargo, la iniciativa sería expulsada en el año 2000 por los campesinos del Monzón, después de que el gremio asaltara la oficina de la institución en Tingo María y encontrara un documento que señalaba que, una vez instalado el Desarrollo Alternativo, se erradicaría gradual y concertadamente la coca del valle. (Agricultor del CCPP Camote)

directos entre los dirigentes del Monzón y otras zonas, y representantes del gobierno, los acuerdos de las actas firmadas habrían sido incumplidos sistemáticamente por DEVIDA (Cabieses, 2007, pp. 90).

Es así que en enero del 2003 se funda formalmente la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), en la cual los dirigentes acuerdan que las cuencas cocaleras afiliadas realizarían huelgas campesinas si el gobierno erradicaba forzosamente los cultivos en cualquiera de las zonas (Cabieses, 2007, pp. 90). Entre febrero y abril de ese mismo año se realizan marchas en las que los cocaleros acusan al gobierno de no querer dialogar ni ofrecer programas de Desarrollo Alternativo que realmente ofrezcan una salida rentable para los agricultores, además de querer descabezar la organización mediante el encarcelamiento de su dirigencia (La República, 23 febrero, 2 marzo, 20 abril 2003).

Sin embargo, las diferencias entre las organizaciones locales y regionales mellarían la unidad de la CONPACCP, siendo que, en el 2004, los delegados del Monzón y su dirigente Iburbio Morales la acusaron de ser financiados por el gobierno y querer aprovecharse de los cocaleros para sus fines políticos (Cabieses, 2007, pp. 94). Para Cabieses (2007, pp. 94), este rechazo se explica por la radicalidad de los dirigentes del valle, quienes no han querido aceptar la propuesta que la CONPACC aceptó en el 2003 para reducir gradual y concertadamente la coca.

Durante estos dos años, en el valle del Monzón persistía el rechazo a las autoridades y el Desarrollo Alternativo, por lo que se los califica de ser los campesinos “más radicales”, que “rechazan toda forma de acuerdo y reclaman al gobierno que declare legales los cultivos de la zona” (La República, 17 febrero 2004). Al respecto, es ilustrativo lo que señala Manuel Lambruschini Pardo, jefe de la Oficina Desconcentrada de DEVIDA en el Alto Huallaga:

Los pobladores del valle del Monzón son reacios a todo lo que signifique programas alternativos. Lo que buscan es vivir fuera del Estado de derecho y continuar con su ilegal cultivo. Desestiman cualquier ayuda que los haga crecer como agricultores. Hasta el momento ningún

programa de desarrollo alternativo ha podido ingresar en la zona y sin embargo ya existe un rechazo.
(La República, 17 febrero 2004)

A pesar de lo mencionado, un día después de la publicación de esa declaración, el mismo diario difundió una noticia sobre un conflicto entre los agricultores del valle y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de la Droga (PNUFID), el cual habría venido implementando programas agrícolas en la zona. A través del trabajo de campo realizado por La República, se ratificó la denuncia de agricultores que señalaban aparecer en la lista de beneficiados cuando el proyecto no les había entregado bienes ni servicios. A raíz de ello, se expresó la desconfianza hacia la institución, a la cual se le pedía retirarse y se le denunciaba de aparentar brindar ayuda inexistente, engañando tanto al pueblo como al Estado (La República, 18 febrero 2004). En la misma publicación, Iburbio Morales señalaba que, hasta ese momento, se habían firmado ocho acuerdos con el gobierno de Toledo -ninguno de los cuales había sido cumplido-, por lo que consideraban que no había voluntad estatal, y que el dinero destinado a los agricultores era absorbido por los funcionarios encargados de los proyectos.

Cabe señalar que gran parte del conflicto entre el Estado y los agricultores se ha dado alrededor de que los segundos aseveran que sus tierras solo son capaces de producir hoja de coca. Por esa razón, el secretario de la Asociación de Productores Agropecuarios del Valle del Monzón señalaba:

El gobierno nos presiona, nos dice narcotraficantes y nos quiere obligar a aceptar el desarrollo alternativo sin tomar en cuenta nuestros reclamos. Pero no quieren darse cuenta de que esta zona es accidentada y que la solución no es erradicar sino invertir en curar nuestro suelo y en la construcción de una planta procesadora de hoja de coca en nuestro valle. Que construyan una procesadora a donde podamos llevar nuestros cultivos para venderlos. Si es así, tengan por seguro que ya no peharemos. Para el pueblo de Monzón el verdadero desarrollo alternativo está en la coca.
(La República, 17 febrero 2004)

Al respecto, es importante considerar las diferencias existentes respecto a la calidad del suelo agrícola a lo largo del valle. La accidentada

geografía del Monzón, así como la diferencia de altura en la que se ubican los centros poblados, lleva a que las capacidades productivas de los agricultores varíen según el espacio que habitan. Así, la parte baja es considerada ceja de selva, y tiene la posibilidad de albergar cultivos de coca, pero también de café, cacao y arroz. Por otro lado, la parte alta es zona de sierra, y cuenta con terrenos más empinados, razón por la que se practicaba principalmente el monocultivo de coca, la cual habría sido transformada allí mismo en pasta básica de cocaína destinada al narcotráfico (CVR, 2003, pp. 355).

Esta problemática se vio acentuada por la fumigación aérea en el Monzón durante el gobierno de Fujimori, en la que helicópteros sobrevolaron el territorio esparciendo un “polvo blanco” que habría impulsado la propagación del hongo *fusarium oxysporum* con la intención de que este seque los cultivos de coca. Al respecto existen muchas versiones diferentes, ya que mientras el gobierno negó los hechos y emitió un Decreto Supremo prohibiendo tal práctica, los agricultores señalan haber presenciado la fumigación, la cual no solo habría matado sus cultivos de coca sino también otros legales, además de generar enfermedades en la población. (Cabieses, 2007, pp. 197)

Por esta razón, durante el 2005 el gremio cocalero mantuvo su posición respecto a la defensa de la coca, no aceptando las propuestas de una erradicación progresiva y concertada como lo hacía la CONPACCP. Durante esta época, además, se observa un gremio demandante, que exige al Estado legalizar sus cultivos e incluirlos en el debate de las leyes que buscan regular el cultivo de coca, así como modificar su consideración como estupefaciente dentro de la Convención de Viena. A la par, la organización rechaza los programas de Desarrollo Alternativo, ya que indica la imposibilidad de que los suelos del valle produzcan los cultivos propuestos.

Cabe resaltar que estas demandas, en más de una ocasión, se realizan a través de mecanismos de fuerza, como huelgas, paros indefinidos y bloqueos de caminos y carreteras. Si bien puede considerarse que el uso de estas vías tenía como objetivo ejercer presión en el gobierno, es necesario también considerar los intentos de diálogo precedentes a nivel regional y nacional, los

cuales resultaron en acuerdos incumplidos o desconocidos por las autoridades luego de haber sido firmados¹³.

A pesar de ello, en más de una ocasión se ha discutido que la oposición a la erradicación y Desarrollo Alternativo en el valle no solo tendría que ver con las razones manifestadas por el gremio y campesinos cocaleros, sino también con la conexión que estos tendrían con actividades ilícitas más allá del cultivo de coca. Al respecto, Casas (2015, pp. 03) señala que no eran solo las firmas locales y grupos terroristas quienes participaban en la economía ilícita y la defensa del cultivo, sino que parte de los agricultores cocaleros participaban en actividades penalizadas, tales como la maceración de coca para su posterior lavado, o como agentes subversivos y/o traficantes ilegales. La existencia de esta conexión era también aseverada para los dirigentes cocaleros, varios de los cuales fueron detenidos por cargos de narcotráfico y terrorismo mediante el “Operativo Eclipse”, en noviembre del 2010.

Es necesario recordar que, por muchos años, el gobierno y la población del valle, especialmente los dirigentes cocaleros, han generado narrativas sumamente diversas –y contradictorias entre sí– respecto a lo que ocurría en el Monzón. Por un lado, se encuentra que las autoridades estatales y la prensa lo presentaban como un territorio altamente peligroso, en el que la economía ilícita generaba violencia y antipatía social hacia el Estado.

Valle del Monzón, (...) valle que, hasta hace unos años, fue gobernado por el narcotraficante Cachique Rivera y el temible Champa. Cuenca que hospedaba a feroces columnas del MRTA, y del sanguinario Sendero Luminoso. Hoy el valle del Monzón sigue viviendo del narcotráfico, sigue siendo tierra de nadie. Los campesinos cocaleros de este valle son los únicos que a nivel nacional se oponen, con uñas, machetes y palos, al Desarrollo Alternativo. (...) En otras palabras, se niegan a que DEVIDA, organismo gubernamental, meta mano en esta

¹³ En febrero del 2003, cocaleros de los ríos Apurímac y Huallaga realizan movilizaciones denunciando la negativa de DEVIDA de reconocer 2 actas de acuerdos, argumentando que fueron suscritos bajo la presión de marchas. (La República, 23 febrero 2003)
 En medio de una movilización de 10 mil cocaleros a Lima, Elsa Malpartida señaló haber firmado 13 actas que no han sido cumplidas por el gobierno. (La República, 20 abril 2003)
 En agosto del 2012 el presidente regional de Huánuco, Luis Picón, denunció que a pesar de tener aprobado por la PCM un plan estratégico de desarrollo de cuencas cocaleras y no cocaleras, y haber tenido una reunión dos meses antes con el ministro Óscar Valdés para impulsar el desarrollo en el valle del Monzón, no se habían dado avances en la materia. (RPP, 29 agosto 2012)

zona. Para esto, don Iburcio Morales, líder absoluto de este distrito, ya le dio un ultimátum a Nils Ericsson, presidente de DEVIDA.
(Panorama, 2003)

La difusión de este tipo de mensajes ha llevado a la criminalización de los cocaleros del valle, razón por la que en muchas ocasiones los entrevistados aluden a que “ellos no eran narcotraficantes ni terroristas”, intentando desligarse de las imágenes construidas sobre ellos y sus centros poblados. La negación de estos vínculos ha sido constante en el valle (La República, 26 de noviembre de 2010), por lo que la defensa de la coca usualmente se acompañó de un discurso que aseveraba desconocer si el destino de los cultivos alimentaba o no el narcotráfico (Panorama, 2003).

Esta posición se ha construido en contraposición a la narrativa estatal que caracteriza al Monzón como un territorio en el que la economía ilícita habría generado el aislamiento económico, social y político de la población, dificultando su acceso a instituciones y servicios públicos, así como mercados legales de bienes y servicios (DEVIDA, 2015, pp. 47). Desde esta perspectiva, usualmente es la economía ilegal de la coca el factor al que se alude para explicar la “anomia social” que se habría experimentado en el valle antes del ingreso del CORAH en el 2012.

De esta manera, cuando se habla de la ausencia institucional en el territorio, los materiales y actores estatales suelen señalar que era el TID el que generaba escenarios de alta tensión y conflictividad que *limitaban* el alcance de las políticas y programas públicos (DEVIDA, 2015, pp. 15). Así, el énfasis en la responsabilidad se delega a los actores presentes en el valle, quienes habrían *obstaculizado* el trabajo del Estado, dificultándoles el ingreso al Monzón. Esta es también la opinión del funcionario del CORAH entrevistado, quien señalaba que fue la colusión entre organizaciones cocaleras, subversivos y autoridades locales lo que impedía el ingreso estatal.

Sin embargo, fue posible recoger testimonios de funcionarios que no concordaban con la versión estatal previamente señalada, sino que planteaban que la demora en intervenir el valle se ha debido a un desinterés en hacerlo, o un interés en no hacerlo.

Con un mínimo de esfuerzo de inversión estatal, o sea, el Estado haciendo su trabajo, el Estado tranquilamente puede arrollar. Es el Estado, o sea, tiene toda la maquinaria, ¿no? Entonces, (...) un Estado, por un lado desinteresado en ingresar, porque quizás estaba más concentrado en Tocache, o algo por el estilo, la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y claro, los poquitos que estaban ahí, era imposible, pues, ¿no?

(Funcionario DEVIDA)

Los militares son los dueños. ¿Le vas a quitar la mina de oro a un militar? Imposible. (...) Siempre te van a decir "No, que la gente es muy violenta, que van a ver esto". Pero acuérdate que hay la mina de oro, pues. Ya te dije, 2 500 millones de soles han manejado los militares y policías en el Monzón, en la época, solo en el gobierno de Humala. Y a Carmen [Masías Claux] la sacaron porque pidió que ingresemos, que se ingrese al Monzón con erradicación.

O sea, todo este discurso de "No se podía" es un discurso.

Es un discurso, es un discurso. Sí se puede, sí se puede.

(Ingeniero, participante en programa "Nuevas Alternativas" USAID)

Así, existen perspectivas que invitan a pensar que la caracterización del valle como un espacio violento e inseguro sería, más que una explicación para la inacción estatal, una manera de justificarla. Estas opiniones plantean que el Estado contaba con los recursos necesarios para ingresar al Monzón si así lo hubiese querido, y que ha sido su falta de decisión política, y los intereses privados de ciertas instituciones estatales, lo que ha retrasado su ingreso.

2.3. Los actores

A partir del repaso histórico elaborado, es posible observar que, durante los años previos a la implementación de los programas de erradicación y Desarrollo Alternativo, los principales actores en la zona eran: los agentes militares, los miembros del PCP-SL, las firmas locales, el gremio cocalero, las autoridades locales y regionales, y los agricultores del valle.

Si bien en muchos casos se han observado alianzas entre estos actores, es necesario resaltar que dentro de estos "grupos" también existen posiciones diferenciadas y conflictos. En el caso del gremio cocalero, a partir de las

entrevistas ha sido posible conocer la existencia de fisuras dentro de la organización, así como discrepancias entre esta y parte de los agricultores. Así, algunos ex cocaleros señalan la existencia de un malestar por abusos cometidos por los dirigentes de La Poderosa, lo cual habría llevado a algunos de ellos a organizarse para comunicar a DEVIDA su interés en que se apliquen programas de Desarrollo Alternativo en la zona. De esa manera, algunos agricultores han relatado la existencia de iniciativas locales que, a pesar de ser obstaculizadas por el gremio, lograron expresarle a DEVIDA que algunos centros poblados deseaban que inicie su trabajo en el Monzón. A pesar de ello, la dificultad para proceder con estas iniciativas en un contexto de defensa a la hoja de coca habría causado la diseminación de estos esfuerzos, llevando a que la primera intervención estatal en el valle sea la erradicación compulsiva.

En ese sentido, es posible observar que el contexto político e institucional ha cambiado en gran medida, ya que sectores antes ausentes, hoy buscan ganar presencia en el territorio. Es el caso del Estado, a través de programas, instituciones y servicios públicos, y el de empresas privadas, mediante proyectos como hidroeléctricas y construcción de pistas. Esto, a su vez, ha sido acompañado por el éxodo de gran parte de los actores sociales que antes ejercían un fuerte poder en el territorio: los terroristas del PCP-SL y las firmas de narcotraficantes locales. Sin embargo, es necesario reconocer que no puede señalarse que ya no exista presencia de este último actor, ya que tanto las entrevistas como las noticias muestran que hasta el día de hoy existe actividad del narcotráfico en el valle.

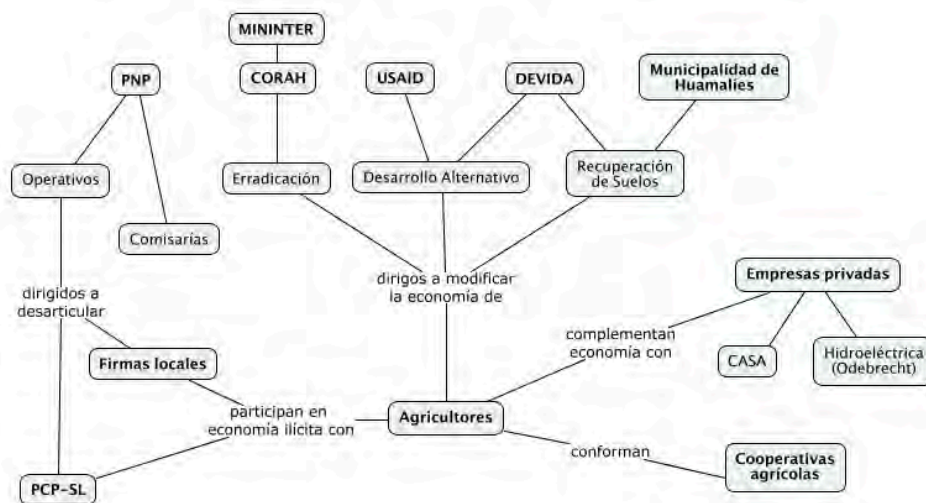


Gráfico 4. Mapa de actores involucrados en la implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas en el valle del Monzón. Fuente: Elaboración propia.

A pesar de ello, es imposible negar que en los últimos años se han modificado los vínculos sociales en el valle, siendo que la población cada vez se relaciona más con actores institucionales, alejándose de aquellos vinculados a actividades ilícitas. Según señala Heuser (2017, pp. 133) la destrucción de la economía ilícita no solo modificó el campo social introduciendo o eliminando actores, sino redefiniendo el poder de estos en el campo. Así, mientras que antes la relación con los actores de la economía ilegal era aquello que otorgaba mayor poder en el territorio, ahora la cercanía al Estado es la que promueve un mayor acceso a este capital. Esto, sin embargo, no significa que el nuevo orden social sea estable ni seguro, ya que la desconfianza de la población local frente a este abriría la posibilidad a que cambie nuevamente.

En conclusión, si bien a partir de la implementación de intervenciones estatales los actores en el valle del Monzón se han modificado, es necesario analizar de qué manera ha evolucionado la relación entre estos, para así comprender cuál es el rol que estos vínculos cumplen en la construcción de las estrategias de vida de los agricultores. En los siguientes capítulos se detallará la forma en que esta implementación se ha llevado a cabo, así como la manera en que los productores vienen construyendo narrativas y prácticas para adaptarse y beneficiarse de este nuevo contexto.

Capítulo 3: Proceso de implementación

El presente capítulo abordará cuál fue el proceso de implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas, en el valle del Monzón. Para ello, se dividirá la sección en tres partes, las mismas que hacen referencia a las etapas que ha seguido este proceso: los operativos policiales de interdicción; la erradicación forzosa de hoja de coca ilegal; y la fase de Poserradicación. Sobre ellas, mientras que la primera fue llevada a cabo en momentos específicos, las últimas han tenido un carácter más estable en el valle. Por ello, son estas las que, a nivel individual y colectivo, han tenido efectos más profundos en los agricultores.

Asimismo, es necesario adelantar que cada etapa fue implementada por diferentes instituciones estatales, siendo la Policía Nacional del Perú quien ejecutó la primera y el Ministerio del Interior, a través del CORAH, quien se encargó de la segunda. La etapa de Poserradicación, que incluye como eje principal el programa de Desarrollo Alternativo, es implementada por DEVIDA – inicialmente con el apoyo de USAID– hasta la actualidad.

3.1. Operativos policiales de interdicción

Si bien el eje de interdicción al que se hace referencia dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas incluye la erradicación de cultivos ilícitos, cuando nos referimos a la primera etapa de implementación en el Monzón aludimos únicamente a operativos policiales. Es desde el 2003 hasta el 2009 que se registran cinco de estas intervenciones en el valle, las cuales tuvieron como objetivo la incautación de insumos químicos y estupefacientes, así como la destrucción de laboratorios clandestinos (Casas, 2015, pp. 07).

De estas, una de las más relevantes fue el Operativo Fierro, ocurrido el 6 de noviembre del 2003. Este marcó el inicio del proceso que emprendió el Estado para “ingresar” al valle y controlar el narcotráfico en la zona, razón por la cual es importante analizar cómo se desarrolló este *primer acercamiento*.

Para ello, resulta relevante la publicación que el Ministerio del Interior hizo sobre la incursión, en la cual se presenta al Monzón como un “territorio liberado para el delito, marcado por la muerte, la destrucción y el sufrimiento para más de 20 mil peruanos de escasos recursos” (MININTER, 2004, pp. 07).



Fotografías 2, 3 y 4. Fotografías del Operativo Fierro, ocurrido en noviembre del 2003. Fuente: MININTER 2004.

En el operativo, cuya duración fue de 7 días, 600 agentes a cargo del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, destruyeron laboratorios clandestinos y pozas de maceración, incautaron insumos químicos, autos robados y hoja de coca, y detuvieron a cinco personas mientras trabajaban en una de las pozas de maceración halladas (La República, 8 noviembre 2003). La implementación de esta operación se hizo sin coordinación con las autoridades regionales¹⁴, quienes, así como los campesinos del valle, no sabían que se ejecutaría el operativo (La República, 8 noviembre 2003).

¹⁴ Meses más tarde, en enero del 2004, la presidenta de Huánuco declararía rechazar la erradicación y apoyar a los coccaleros, señalando que no firmaría ninguna agenda común de

A pesar de que en la publicación del MININTER (2004) se alude a que este operativo fue “el golpe más fuerte al narcotráfico en los últimos años”, es necesario recalcar que, en términos de desarticulación del TID, estas intervenciones son sumamente limitadas. En el caso del Operativo Fierro, si bien la incursión policial generó que la arroba de coca pase de costar 50 dólares a costar solo 20, tres meses más tarde el precio ya se había recuperado subiendo a 40 (La República, 17 de febrero de 2004). Aunque a corto plazo se modifiquen las dinámicas en torno al cultivo de coca y producción de PBC y cocaína, los operativos aislados no generan grandes consecuencias a largo plazo. Es así que, a partir del 2003, y de manera constante hasta diciembre del 2017, se encuentran diversas noticias sobre la destrucción de laboratorios y decomiso de droga e insumos químicos en el Monzón. Estos, aún después de la erradicación de casi la totalidad de la coca del valle, no logran frenar la producción de cocaína en la zona (Inforegión).

| Año | Descripción del operativo |
|-------------------------------|---|
| 2003 Operativo Fierro | Por primera vez en el siglo 21, el Estado peruano decide ingresar al valle del Monzón para realizar acciones de incautación de drogas y erradicación de laboratorios clandestinos. Once helicópteros artillados de la Policía Aérea fueron la fuerza de choque del operativo estatal. |
| 2004 Operativo Monzón 2004 | El operativo duró cinco días y tuvo como objetivo destruir los laboratorios rústicos para la elaboración de PBC. Se destruyeron más de 125 laboratorios rústicos para la elaboración de Pasta Básica de Cocaína (PBC) y se neutralizó dos mil 500 kilogramos de ese estupefaciente en proceso de elaboración. |
| 2005 | El 17 de marzo se realizó un operativo helitransportado de interdicción al TID. Los sectores intervenidos fueron Maravilla, Consolado, Tazo Pampa, Puente Unión y Paccha, todos del distrito de Monzón. |
| 2007 Operativo Huracán | La policía antidroga de Tingo María y la Dirección de Operaciones Especiales, DIROES, ejecutaron un operativo en las inmediaciones del caserío Soledad, en el que destruyeron seis laboratorios para la elaboración de pasta básica de cocaína. |
| 2009 Operativo Detector | El Frente Policial Huallaga realizó incautaciones de estupefacientes en la carretera que une la ciudad de Huánuco con Ancash. |

Gráfico 5. Operativos policiales de interdicción en el valle del Monzón entre 2003 y 2009. Fuente: Casas 2015: 07.

A pesar de su limitado impacto en ese ámbito, la importancia de estos operativos es simbólicamente alta en tanto exponen la maquinaria estatal en un territorio cuyas dinámicas se apoyan en la ausencia del Estado. A través de las

cooperación con DEVIDA ni USAID sin la autorización de los campesinos (La República, 25 enero 2004).

entrevistas a agricultores es posible entender que ellos reconocían la capacidad de este actor para imponerse en el territorio, aunque existen ciertas dudas respecto a qué los llevaba a no hacerlo.

Antes del ingreso, no del Estado, sino antes del ingreso de DEVIDA, decíamos "¿por qué no entraba DEVIDA? ¿por qué no entraban otros, otros, este, instituciones del Estado a poner orden acá?". Incluso decíamos "los del Ejército tienen todo el poder", pero no se, no se daba eso, ¿no? Porque sencillamente, este... eh... no podían ingresar, porque decían "no, al Monzón no entramos porque... es una zona de narcoterroristas. Y allí está Artemio. Artemio es el que manda, el que ordena".

(Agricultor, adulto, Cachicoto)

Esta percepción del Estado como un ente desigualmente poderoso también se manifestaría en la etapa de erradicación, en la que la población señala que “nada puede hacerse” frente a una intervención estatal de ese tipo. En ese sentido, más allá del impacto que han tenido estos operativos en el ámbito de interdicción, el despliegue de esta maquinaria evidencia ante la población, la fuerza y capacidad que tiene el Estado para imponerse en el orden local, si es que así lo decide.

Los efectos directos de estos operativos se hacen más evidentes cuando su atención se focaliza en la desarticulación de La Poderosa Federación de Coccaleros del Valle del Monzón (PFCVM), gremio reconocido como el más importante de la zona del Alto Huallaga tanto por los agricultores como por los funcionarios públicos (Casas, 2015, pp. 08). Es así que el 26 de noviembre del 2010 se realizó el Operativo Eclipse, en el cual se detuvieron a más de 40 personas –campesinos coccaleros, dirigentes gremiales y autoridades públicas–, denunciándolos de colusión con el narcotráfico y terrorismo de la zona (Manrique, 2015, pp. 78; Casas, 2015, pp. 08). Para Valle Riestra y Vidal (2014), la detención de 7 dirigentes del gremio coccalero, entre los cuales se encontraba Ibúrcio Morales -en ese momento alcalde del Monzón, y que permanecería en la cárcel hasta su fallecimiento en octubre del 2012 (IDL-Reporteros, 15 de octubre 2012)-, habría mermado la capacidad de oposición de la Federación, generando su pérdida de protagonismo. A esto se sumaría la aparición de posiciones a favor del Desarrollo Alternativo, tales

como la Asociación Bienestar y Desarrollo del Monzón, lo cual habría dividido a una población antes unida por el gremio (Valle Riestra & Vidal, 2014).

Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas es posible conocer que, años antes de este evento, ya existían fuertes discrepancias entre los dirigentes y la población del valle. Estas habrían sido causadas por las obligaciones del gremio sobre los agricultores, quienes debían asistir a las marchas convocadas, así como dar dinero para el funcionamiento de la organización. Caso contrario, se implementarían castigos como el “golpe económico”, a través del cual el gremio cosechaba la parcela del agricultor sancionado, quien perdería las ganancias por las que trabajó tres meses.

Los ciudadanos del valle del Monzón hemos sido arrebatados nuestros derechos al 100% por un gremio que se hacía llamar, mal llamado “Poderosa Federación de Productores Agropecuarios” que nunca se ha ceñido a lo que es agropecuaria, sino simplemente a un monocultivismo que era la hoja de coca. (...) [El gremio] ha arrebatado del ciudadano monzonino coactando a la gente de tal forma que salgamos a las marchas, a una protesta, no por convicción como le digo, sino por órdenes estrictas de ellos.
(Agricultor, adulto, Camote)

A pesar de estas tensiones dentro del valle, no cabe duda que la capacidad de convocatoria que tenía el gremio para la defensa de la hoja de coca fue mellada por los operativos dirigidos a desarticularlo. Por esa razón, este evento, junto con la captura del líder del Comité Regional del Huallaga de Sendero Luminoso, Florindo “Artemio” Flores Hala, el 12 de febrero del 2012, son eventos señalados como claves para el ingreso estatal al valle (DEVIDA, 2015, pp. 11). Así lo considera Miguel Hidalgo, ex ministro del interior, quien señala que “los cocaleros ya no tienen a un Artemio que los defienda y esté fustigando a la policía”, lo cual habría aumentado la capacidad de desplazamiento de los agentes estatales y reducido el riesgo que implicaba erradicar la coca del valle (Valle Riestra & Vidal, 2014). Así, estas políticas son señaladas por el discurso estatal como esenciales para las posteriores medidas que se aplicarían en el valle, ya que habrían generado el cese de la protección armada para la defensa del cultivo (Casas & Ramírez, 2017, pp. 55).

3.2. Control de cultivos

Antes de que se inicie la erradicación en el mismo Monzón, ocurre un suceso en los límites del valle que luego tendría implicancias en la implementación de la política en la zona. El 28 de agosto del 2012, en la localidad de Tamshi, en el distrito de Rupa Rupa, el CORAH realizó un operativo de erradicación que, a partir de lo que señala el general PNP Juan Zárate, habría sido resultado de un proceso de consenso con la población (La República, 30 agosto 2012). Si bien esta localidad está formalmente fuera del ámbito del valle del Monzón, la cercanía a los centros poblados del valle habría generado preocupación en la población, quien, considerando a Tamshi parte del valle y pensando que se continuaría con la erradicación en sus centros poblados, se movilizó hacia la localidad para detener el operativo.

Sobre este punto resulta relevante el aporte del DTR, desde el cual se cuestiona la delimitación técnica de un territorio a partir de variables físicas, señalando que en realidad este se construye a partir de las prácticas sociales cotidianas. La intervención del CORAH en Tamshi obedeció a una focalización guiada por límites administrativo políticos, sin considerar que en la experiencia cotidiana de la población, marcada por una constante movilización entre centros poblados y caseríos, se percibiría esta intervención como un golpe directo al Monzón. Por ello, la intervención no fue comunicada a los dirigentes del valle, quienes no habrían podido evitar que se genere un enfrentamiento entre los trabajadores del CORAH, resguardados por policías y militares, y los agricultores, quienes también habrían ejercido violencia contra los efectivos.

Cuando la primera vez se instaló en Tamshi, todo el valle salieron y le querían, este, hacer violencia, ¿no? Y, y ese rato los, los dirigentes, presidente, no permitieron. No permitían hacer violencia, todos querían que sea pacífica. La gente actuaban "paz, paz, ¿hasta cuándo vamos a estar en paz? Y todo pacífico vamos a estar toda la vida y ya no, ya no nos sacaba toda la coca. Ya viene erradicación, entonces nosotros debemos actuar", la gente decían.
(Agricultor, adulto, Cachicoto)

Es en este enfrentamiento que fallecen dos personas¹⁵, Reider Roque Romero y Juan Espinoza Jaimes, quienes se encontraban en la zona como espectadores. Al respecto, las familias explicaron que el suceso ocurrió cuando cerca de mil cocaleros se reunieron a orillas del río Monzón, buscando cruzarlo para llegar a Tamshi, donde ocurría la erradicación. En respuesta, la Policía reaccionaría lanzando gases lacrimógenos a la población, quien a su vez respondió lanzando piedras y objetos a los efectivos. Esto, finalmente, desembocó en el disparo de proyectiles de armas de fuego desde la policía hacia la población, alcanzando a Roque y Espinoza, causando su muerte (La República, 30 agosto 2012). De la misma manera, el vicepresidente de la Federación de Productores Agropecuarios del valle del Monzón señaló que los miembros de la PNP “dispararon a diestra y siniestra”, siendo que “cuando tratábamos de entrar al agua ellos disparaban al cuerpo” (RPP, 28 de agosto 2012). Sin embargo, desde el Estado se asegura que las muertes fueron responsabilidad de los agricultores, señalando que los disparos de los efectivos fueron hacia el aire, que habían cocaleros portando escopetas, y que se encontraron cartuchos que no correspondían al armamento utilizado por la Policía ni las Fuerzas Armadas en la zona (RPP, 28 agosto 2012; Entrevista a funcionario del CORAH).

Si bien no es motivo de esta investigación conocer a quién deben atribuirse aquellas muertes, el que estas hayan ocurrido marcó de manera importante a la población del Monzón. Esta, meses más adelante viviría la erradicación de sus parcelas, esta vez sin mostrar oposición física alguna. Como los operativos de interdicción, este evento mostró a la población la fuerza con la que el Estado podía intervenir en el territorio, así como las consecuencias que podría tener un enfrentamiento directo.

Como se ha mencionado anteriormente, existió una tendencia desde las narrativas estatales y los medios de comunicación de presentar a los

¹⁵ Desde un inicio la población aseguró que fueron tres los pobladores fallecidos, señalando el deceso de Paber Herrera Castillo. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo tuvo dificultades para ingresar al valle por el bloqueo de la carretera realizado por la población, por lo que recién dos días más tarde realizó una declaración, en la que señaló que fueron dos los fallecidos. (La República, 28 agosto 2012, 30 agosto 2012).

agricultores cocaleros, por un lado, como un grupo homogéneo que apostaba por la defensa de la hoja y, por otro, como personas desprovistas de poder, acorraladas por el narcotráfico y terrorismo, y movilizadas al unísono por el gremio cocalero. Sin embargo, a través de las entrevistas realizadas a los agricultores del valle fue posible conocer la existencia de disputas internas e iniciativas locales que se venían gestando dentro del Monzón, las cuales tendrían a los mismos productores como protagonistas.

Como se ha mencionado previamente, si bien el papel del gremio en el valle era sumamente relevante en tanto defensor de la hoja de coca, fue también un gran motivo de tensión para parte de la población. Ella, hoy en día considera a la organización un ente personalista que no reparaba en utilizar medios violentos y coercitivos para lograr sus objetivos. Esto se debe a que ella, en su intento de evitar el ingreso de los operativos de erradicación, se oponía también a iniciativas que los productores consideraban beneficiosas, como la construcción de una carretera asfaltada a Tingo María o la posibilidad de negociar una erradicación a cambio de programas alternativos. A partir de lo relatado, fue posible conocer que en ciertas localidades del valle se gestaron iniciativas que buscaban negociar una erradicación progresiva, ya que consideraban que a través de un acuerdo podrían recibir mayor apoyo en la transición de cultivos ilícitos a alternativos. Al fin y al cabo, gran parte de la población -si bien tenía a la coca como principal fuente de ingresos y estaba interesada en que esta no sea erradicada- la concebía también como un recurso ilegal, por lo que se sentía intranquila dedicándose a ella. Sin embargo, la negativa del gremio a negociar ni permitir el ingreso de programas estatales al Monzón habría obstaculizado estas iniciativas, exacerbando un malestar que se venía generando hacia los dirigentes cocaleros.

Para ese entonces ya estaban ya, los rumores, venían a Tamshi los jaladores de coca. Ya, nosotros nos ponemos de acuerdo de la margen izquierda [del río Monzón] (...) para hacer firmar el convenio para (...) gradualmente para ir erradicando según que va avanzando el producto alternativo, eso era de nosotros nuestra idea. Pero el presidente más los miembros de la Poderosa Federación se dan cuenta, vienen, van a la banda y le agarran al presidente (...) le agarran, lo mancuernan para que lo maten. Que “¿por qué él tiene que hacer esas cosas? Sin el

acuerdo de la Poderosa Federación que acá no tiene porqué entrar el alternativo, ningún programa alternativo debe de entrar al Valle de Monzón porque ellos son los únicos poderosos y reyes del valle del Monzón, que tiene que hacer, deshacer acá las cosas". (...) Por eso nosotros quedamos sin nada, sino nosotros hubiéramos quedado en la margen izquierda con la coca y con nuestro producto alternativo, pero para acá hubiera quedado sin nada, por culpa de ellos quedamos nosotros sin nada.

(Agricultora, adulta, Cachicoto)

El oficial nos dijo pues que íbamos a ir Tingo María a pedir el documento de la concertación, para que no nos jalen la coca, nos dan una oportunidad más. Y total, la gente no creyó pues, a mí la población casi me viene encima, yo era teniente gobernador de mi caserío (...) Entonces me dijo 'este pendejo se ha ido a concertar' (...). Los del gremio me querían linchar, entonces se fueron pues, se fueron los del CORAH. Y nos quedamos pues, y no pasó dos días, y dieron la vuelta en helicóptero, paró ahí, en dos días se acabó... se acabó nuestras parcelas, de todos. Del Monzón para abajo empezaron.

(Agricultor, adulto, Cachicoto)

Así, el 18 de enero del 2013 el CORAH ingresó al valle, erradicando las plantaciones de coca de los caseríos de la parte baja del Monzón. Un mes más tarde, habrían erradicado el 16% de las plantaciones, siendo los primeros caseríos intervenidos Maquizapa, Agua Blanca, Shitari, Palo de Acero, Rondos, Río Espino, Santa Rosa y Manchuria (La República, 18 febrero 2013).

Para parte de la población, la llegada de la institución fue sumamente sorpresiva, en tanto nunca se había erradicado la coca en el valle, a pesar de las constantes amenazas. Sin embargo, para otros entrevistados la intervención fue imprevista pero esperable, ya que si bien no se sabía cuándo iba a llevarse a cabo, eran conscientes de que iba a ocurrir. El movimiento desde Tingo María hacia el valle y la información de familiares o amigos que trabajaban dentro de la institución les permitió conocer que se entraría al Monzón poco tiempo antes de que ocurrieran los operativos.

Una vez que se empezó a ejecutar la erradicación, se inició desde la parte baja, más cercana a Tingo María, subiendo progresivamente hacia los centros poblados de más altura en el valle. La sensación general expresada por los y las agricultoras entrevistadas era de resignación, ya que consideraban

que no tenían posibilidades de evitar lo que estaba ocurriendo. Así, presentan la situación como una en que, mientras que el Estado tenía todos los recursos para imponerse, los agricultores no contaban con posibilidades de enfrentarlos.

Asimismo, se registró un testimonio que señalaba que, además de las razones mencionadas para explicar la falta de oposición física de los coccaleros frente a la erradicación, se encuentra la división entre la parte alta y baja del valle. Esto se debe a que, al llegar el CORAH, se habría generado el mensaje de que la intervención solo se daría en la parte baja del valle, impulsando a los agricultores de la cuenca alta a no salir en defensa de los centros poblados afectados por miedo a que ello genere la erradicación de sus cocales.

Los agricultores recuerdan este momento como uno de desesperación colectiva, donde no hubo ninguna concesión de parte del CORAH. Solo aquellos que contaban con recibos para ENACO pudieron mantener la cantidad de arrobas que durante años habían entregado a la institución, de manera que se aseguraba la eliminación de todo el producto dirigido al narcotráfico. Debido a que parte de la población sostenía su economía únicamente a través de la coca, la preocupación se vivió también los meses posteriores a la erradicación.

Nosotros cómo llorábamos. Y ahora los niños han salido del colegio, han dejado de estudiar, la universidad, lo que iban las chacras más abajo, han dejado de estudiar, bien tristes cómo lloraban. (...)

¿Y esas familias dónde están? ¿Viven en sus chacras?

(...) Él tiene 8 hijos, el señor que estaba acá, uno de ellos es. El señor no tenía para que coman, cómo lloraba, cómo sufría este hombre, daba pena, cómo sufría. Iba a tu casa, te suplicaba, "Te lavaré tu ropa" diciendo, lloraba, cómo daba pena, triste, triste era, qué triste era eso. (Agricultora, adulta, Cachicoto)

Las consecuencias socioeconómicas de la erradicación son conocidas por las instituciones estatales, razón por la cual el CORAH y DEVIDA consideran necesario llevar a cabo programas de acompañamiento después de la intervención. Por ello, a través del Cuerpo de Asistencia para el Desarrollo Alternativo (CADA), se ejecutó un Programa de Responsabilidad Social Comunitaria que busca "promover la inclusión social, mejorar su economía

familiar, lograr un cambio de actitud; así como apoyar la formación para su adecuada articulación al proceso de desarrollo” (UNODC, 2012, pp. 55).

Para ello, el programa instaló en el Monzón piscigranjas y cocinas mejoradas, además de proveer los insumos necesarios para el desarrollo de biohuertos, reforestación, formalización, algunos proyectos de construcción, y la crianza de animales menores tales como peces y cuyes (Inforegión, 2 diciembre 2013). A partir de ello, se buscaba que las familias tengan productos para el consumo familiar a corto plazo, así como para la venta si es que su producción lo permitía. A pesar de estas iniciativas, cuya cobertura inicial se restringió a la micro cuenca baja del río Monzón, las consecuencias que tuvo la erradicación generaron en la población un fuerte rechazo a las siguientes intervenciones en el valle, las cuales se implementarían en el marco del programa de Poserradicación, iniciado en julio del 2013.

3.3. Poserradicación

Desde el Plan Operativo del Monzón, la poserradicación se define como una intervención realizada de manera articulada entre diversos sectores sociales y económicos e instancias del gobierno, con el propósito de atenuar el impacto de la aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas sobre la población de diferentes valles del país (DEVIDA, 2015, pp. 54). Así, se elaboró un Plan de Poserradicación para los años 2013 a 2016, el cual tenía cuatro dimensiones operativas –económica, social, política y ambiental–, todas destinadas al objetivo principal de promover el *cambio de actitud* de la población en las zonas erradicadas hacia un desarrollo y vida lícita, sin la influencia de la economía y las actividades delictivas del narcotráfico (DEVIDA, 2015, pp. 54).

Dentro de este plan, se considera que la erradicación de cultivos es una necesidad debido al control territorial de las redes del TID, aunque se reconocen los impactos que esta intervención conlleva sobre la seguridad alimentaria, lo cual se agravaría en las familias sin diversificación productiva y con menos de tres hectáreas (DEVIDA, 2015, pp. 57). Por esa razón, la

Poserradicación busca mitigar los impactos socio-económicos de la erradicación, realizando acciones a corto y mediano plazo que provean apoyo a la población de los valles afectados.

Para lograr esto, el programa cuenta con cinco componentes: cultivos lícitos (café y cacao), gestión comunal, asociatividad, infraestructura comunal, y promoción de entornos y estilos de vida saludables. Mediante el primero se busca desarrollar las capacidades de la población en el cultivo y manejo de café y cacao, brindándoles un paquete tecnológico que les permita generar ingresos a partir de cultivos lícitos en reemplazo de la hoja de coca. La gestión comunal promueve la creación de Juntas Vecinales, a través de las cuales se aspira fortalecer las capacidades de gestión y organización de la población. Esto, a su vez, les permitiría elaborar diagnósticos participativos e implementar planes de desarrollo comunal, facilitando la incidencia de la comunidad en el gobierno para que este apoye proyectos de desarrollo en su beneficio. Por otra parte, el componente de asociatividad promueve las asociaciones de comités de productores, difundiendo los beneficios sociales y económicos que conlleva ser miembro de una cooperativa agrícola, y vinculando a la población con compradores de la zona. El componente de infraestructura comunal apoya a los caseríos en la mejora de locales comunales que requieran algún trabajo de refacción, más no en la construcción de espacios nuevos. Finalmente, la promoción de entornos y estilos de vida saludables se enfoca en el trabajo con jóvenes y niños, proveyéndoles espacios de música y deporte con el objetivo de, a través de ellos, promover un *mejor uso de sus tiempos libres*, así como un *estilo de vida lícita*. (DEVIDA 2017; Entrevista a funcionario DEVIDA). Debido a que son aquellos que actualmente tienen un rol más relevante, el presente capítulo se concentrará solamente en los componentes de cultivos lícitos, asociatividad y gestión comunal.

3.3.1. Cultivos lícitos

Como se ha mencionado previamente, el escenario que dejó la erradicación generó que, en un inicio, parte de la población se mostrara reacia

a participar de los programas impulsados por DEVIDA. Por ello, una estrategia emprendida por DEVIDA fue su desvinculación de los programas de erradicación que se habían implementado en las localidades, señalando que estos eran producto de una política de Estado que los sobrepasaba. Así, los funcionarios planteaban que, si bien estaba prohibido sembrar coca en los terrenos seleccionados para cultivos alternativos, era “cosa de ellos” si la cultivaban en zonas más alejadas del valle, aunque señalando que muy probablemente esta sería erradicada nuevamente por el CORAH (Casas, 2015, pp. 15).

[Después de la erradicación] Obviamente sí era tenso, ¿no? Era la preocupación de la población de qué iba a llegar. Algunos más amenazantes que otros. Y lo que hizo DEVIDA fue comunicar a todos, ¿no? Comunicar a todos lo que iba a suceder. Desvincularse, un poco, de las acciones de erradicación. Bastante, de hecho. Este, por lo menos abajo [a nivel local], ¿no? Arriba no, pero abajo sí. Y decir que eso no iba a ser un tema obligatorio. Pero claro, que ellos no podían controlar las acciones de erradicación. Incluso el mensaje era 'Si ustedes quieren seguir continuando sembrando coca, háganlo. Pero nosotros no podemos... Lo más probable es que se lo erradiquen. Entonces, este, es lo que hay'. Una especie por el estilo, ¿no? 'Es lo que hay'.
(Funcionario DEVIDA)

Esta estrategia, a través de la cual el Estado se mostraba como un ente con distintos frentes, objetivos y procedimientos, permitió que parte de la población se empezara a acercar a DEVIDA, desligándola de las acciones del CORAH y viendo en ella una posibilidad para mejorar la situación en la que su familia se encontraba. En ese sentido, la implementación de esta fase, si bien busca amortiguar las consecuencias de la erradicación, en parte se sostiene en ellas, ya que gran parte de la población se vincula a los programas impulsados por la urgencia y necesidad, en un contexto de escasas alternativas.

La implementación de esta fase, además, se sostuvo en discursos que deslegitimaban el previo cultivo de coca en el valle, llegando incluso a la responsabilización de los productores de las consecuencias del narcotráfico.

En la medida en que una persona, hombre o mujer, este, toma consciencia de que su actividad afecta a otros, en la salud, en lo ambiental, en lo económico. Cuando tú le planteas "Oye, pero, sabes que lo que tú siembras no se va pa' los gringos. Bueno, irá también algo.

Pero mira cuánta gente drogadicta hay en Perú y cuantas familias están destruidas y...". Cuando tú le hablabas así a la gente, la gente "Wow. Hace daño a la salud", "Sí, acá te mienten los narcos diciendo que todo esto se va, se vende a, a Estados Unidos y Europa. Gran cantidad se queda en el Perú. Y por cada drogadicto multiplícale por 5 que son su familia, y por 5 más que son sus amigos. Y que todos ellos sufren y también tienen un dolor por ver a un ser querido hundido en las drogas. ¿Te gustaría que tu hijo fuera así?". Pucha, cuando les decíamos, sobre todo a las mujeres "Wow. No, ni cagando. No".
(Ingeniero, participante en programa "Nuevas Alternativas" USAID)

Tal como lo señaló uno de los funcionarios de DEVIDA entrevistados, en el Monzón habría calado un discurso criminalizante que llevó a algunos agricultores a auto percibirse como trasgresores de la ley. Esto, además de promover el rechazo a la actividad económica previamente realizada, habría sido un impulso para que la población se traslade a cultivos alternativos.

Sin embargo, los centros poblados del valle no reaccionaron de manera homogénea a la llegada de la Poserradicación, siendo que, mientras que algunos estaban muy interesados en beneficiarse de sus programas, otros no se vincularían hasta años más adelante¹⁶. Al respecto, es necesario precisar que para que un caserío reciba los programas de DEVIDA, su autoridad debe firmar un Acta de Compromiso, lo cual abre paso a que sus habitantes decidan si quieren o no vincularse directamente con la institución.

Los primeros caseríos firmantes fueron los de Catalán y Milagros, el 15 de julio del 2013, siendo que ese mes 11 caseríos más firmaron un acta con DEVIDA. A partir del testimonio de una agricultora fue posible conocer que esta decisión colectiva motivó tensiones en las localidades del Monzón, ya que mientras parte de la población quería beneficiarse de lo que ofrecía la institución, otros se negaban a permitir su entrada.

DEVIDA ingresa por primera vez al Valle del Monzón, al caserío de Camote, donde toda la gente venía hacer trinchera acá, para que no pasen de Cahicoto para arriba porque no querían saber nada con DEVIDA. (...) De ahí nos empezaron a dar, todas las cosas nos

¹⁶ Resulta importante resaltar que Tamshi centro, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, firmó su Acta de Compromiso con DEVIDA recién el 11 de mayo del 2017, cuatro años más tarde de que la institución empezara su trabajo en el valle. Esto, puede imaginarse, se relaciona con los hechos ocurridos en agosto del 2012, aunque no se haya tratado el tema directamente con ninguno de los entrevistados.

empezaban a dar. Otros también querían, nosotros ya teníamos una cosa, otra cosa, teníamos pescado para comer, hasta pollos nos daban. Nos daban hortalizas, teníamos bastante verdura para comer. (...) Cantidad sacábamos, nos compraban, y ellos querían también así. (...) "Pero si su autoridad no quiere, ustedes conversen con su autoridad", Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? (...) "¿Usted por qué no viene acá? y hacemos una reunión y te nombramos a usted como presidente, usted para que haga entrar a Cachicoto hacemos así" (...) Cachicoto, Granja, Nuevo Oriente, Chacrita, Mata Palo, Pozo Rico. Pozo Rico me he ido así, (...) así he empezado a crecer, y ellos se han apoyado entre otros, otros.

(Agricultora, adulta, Cachicoto)

Así, el ingreso de DEVIDA a los diferentes caseríos se enmarcó en dinámicas internas de conflicto y organización, a través de las cuales la población concertaba si deseaba o no vincularse a sus programas. Sin embargo, la firma del acta comunal no debe interpretarse como signo de armonía en la relación entre los agricultores y la institución, en tanto el inicio de esta estuvo sumamente marcado por la tensión y necesidad. Existen casos en los que un caserío firmante tiene muy poca de su población trabajando con DEVIDA, como ocurre en Cachicoto, Cashapampa y Sachavaca, donde menos del 10% de la población se ha vinculado con la institución estatal¹⁷.

Firmar un compromiso directamente con DEVIDA implica para los agricultores, por un lado, recibir apoyo individual a manera de insumos agrícolas y asistencia técnica, así como, por otro, comprometerse a no resembrar coca. El no cumplir con esta última condición tiene consecuencias legales, en tanto el Decreto Legislativo 1241 penaliza la resiembra de coca con condenas de 3 a 8 años de prisión (Manrique, 2015, pp. 83). A partir de tres testimonios recogidos en el valle fue posible conocer que ya existen casos de agricultores que, acusados de resembrar, han sido citados por la Fiscalía.

Para comprender esta situación, es necesario ahondar en los costos y beneficios que el Desarrollo Alternativo significa para los agricultores del valle. Debido a las características geográficas del territorio, los cultivos que DEVIDA promueve son el cacao, en zonas de menor altura, y el café, en parcelas de

¹⁷ Información obtenida a partir del padrón de participantes inscritos en el programa de Poserradicación de DEVIDA, actualizado al 25 de agosto del 2018.

territorios más altos. Por esa razón, los agricultores de la cuenca baja del valle suelen dedicarse al primer cultivo y los de la cuenca baja al segundo. Sin embargo, debido a que algunos agricultores cuentan con parcelas en diferentes localidades, se tiene que algunos cuentan con ambos.

A partir de la información presentada en las cartillas de DEVIDA tituladas “Costos en las etapas de instalación, crecimiento y producción – flujo de caja” (Tablas 2 y 3), es posible conocer, aproximadamente, cuál es la inversión y ganancia que el café y cacao significan para un productor agropecuario.

| Costos e ingresos por el cultivo de una hectárea de cacao (en nuevos soles) | | | | | | | |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1er año | 2ndo año | 3er año | 4to año | 5to año | 6to año | 7mo año |
| Costos | 4848 | 2592 | 3093 | 2801 | 3011 | 3011 | 3011 |
| Ingresos por cacao | 0 | 476 | 2040 | 4760 | 8160 | 8160 | 8160 |
| Ingresos por plátano | 0 | 4500 | 7500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancia | -4848 | 2384 | 6447 | 6459 | 5149 | 5149 | 5149 |

| Costos e ingresos por el cultivo de una hectárea de café (en nuevos soles) | | | | | | | |
|---|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1er año | 2ndo año | 3er año | 4to año | 5to año | 6to año | 7mo año |
| Costos | 3677.5 | 3323 | 6590.5 | 4266.5 | 5166.5 | 5566.5 | 5566.5 |
| Ingresos por café | 0 | 0 | 1400 | 2800 | 5600 | 7000 | 7000 |
| Ingresos por plátano | 0 | 3000 | 4500 | 3000 | 1500 | 0 | 0 |
| Ganancia | -3677.5 | -323 | -690.5 | 1533.5 | 1933.5 | 1433.5 | 1433.5 |

Tablas 2 y 3. Costos e ingresos por el cultivo de una hectárea de cacao y café (en nuevos soles). Elaboración propia. En base a DEVIDA 2014a, DEVIDA 2014b.

A partir de los datos presentados por la institución, se entiende que una hectárea de cacao requiere una inversión de S/. 4 848 el primer año, periodo durante el cual no se percibe ningún ingreso. Esta inversión sería recuperada al tercer año, cuando los ingresos por el cacao y el plátano –sembrado para dar sombra al cultivo principal y generar ingresos temporales– cubrirían los gastos hasta ese momento y generarían las primeras ganancias al agricultor.

Por otro lado, el cultivo de café, en comparación al cacao, no solo implica una inversión bastante más alta sino que su producción también demora más y genera menores ingresos. Por ello, tal como lo señala la cartilla de DEVIDA, aun cuando el café es bien manejado bajo sistemas agroforestales, recién es posible recuperar la inversión y recibir ganancias a partir del sexto año.

En ese sentido, los cultivos alternativos requieren sí o sí que la población cuente con otros ingresos durante tres y seis años, según el producto. Esto se agrava considerando que los datos brindados han sido calculados –al menos en el caso del cacao– en base a la experiencia de una comunidad en la región Ucayali, de la zona Puerto Inca. Considerando que uno de los principales problemas del Monzón es la degradación de sus suelos, la producción de sus cultivos no solo demora más tiempo sino que también es menor en volumen e implica mayor inversión en comparación a zonas más productivas. Por esa razón, los cultivos alternativos empezarían a brotar mínimo a partir del tercer año, siendo que en suelos más degradados demorarían hasta cinco años.

Por ello, una de las mayores amenazas que pone en riesgo al programa se relaciona con el estado de los suelos en el valle. La poca productividad de estos se explica principalmente porque, a causa de la geografía y el previo monocultivo de coca –el cual implicaba alto uso de agroquímicos y poco descanso de las tierras–, estos se encontrarían degradados. Esto, en conjunto con la naturaleza de los cultivos lícitos, lleva a que el cacao y el café solo puedan crecer en determinados espacios, limitando la cantidad de hectáreas que se le puede dedicar a estos cultivos.

En respuesta a esta problemática fue que se inició la implementación del proyecto “Recuperación de suelos degradados por el cultivo de coca con fines ilícitos”, financiado por DEVIDA y ejecutado por la Municipalidad de Huamalíes. Iniciado en el 2015, el proyecto se retiró del valle en mayo del 2018, después de beneficiar a un aproximado de 1200 familias con una hectárea de guaba a cada una. Según lo mencionado por los ingenieros, aunque el proceso de recuperación de suelos toma entre 5 a 7 años, debido a que esta plantación

crece al primer o segundo año, los agricultores deciden cultivar en estas hectáreas de manera adelantada, afectando la productividad de los terrenos.

A pesar de que en un inicio la población se mostró reacia a participar, considerando que era “una mentira más” y que “cómo van a sembrar guaba, si guaba no se come ni se vende”, con el pasar de los años la iniciativa aumentó sus beneficiarios. Esto principalmente porque, a diferencia de los programas ejecutados por DEVIDA, el proyecto tiene una retribución económica a manera de jornal para los participantes. Así, durante el año que dura el apoyo, además de la entrega de los materiales que requiere la iniciativa, se desembolsa un total de S/. 1 692 por la mano de obra invertida por los participantes.

Aunque la iniciativa ha tenido éxito en el valle, el problema radica en la tardanza con que este programa se llevó a cabo en el Monzón. No ha sido hasta dos años después de iniciada la implementación del Desarrollo Alternativo que se han empezado medidas dirigidas a tratar la calidad de los suelos, a pesar de que es esta la que define el éxito de los cultivos alternativos. Por esa razón, esta iniciativa ha llegado tarde para aquellos productores que, afiliados al programa de DEVIDA, invirtieron en terrenos no aptos para la producción de café ni cacao, llevándolos a la pérdida de su tiempo y dinero.

A partir de lo señalado por la Oficina de Coordinación de DEVIDA en Cachicoto, esta decisión responde a dos razones principales. La primera es la idea de que el fracaso de los cultivos es responsabilidad de los productores, ya que, en palabras del funcionario entrevistado, “no hay mal suelo, hay mala persona que no quiere hacer agricultura”. Por otro lado, la falta del análisis de suelo previo a la implementación del Desarrollo Alternativo fue justificada señalando que, de haberlo hecho, la población se habría aferrado a la idea de que no puede hacerse nada en el territorio por la baja calidad de sus suelos.

Esta decisión ha tenido consecuencias negativas para la relación entre DEVIDA y los agricultores, en tanto la situación ha mellado la confianza de estos en el personal de campo de la institución. Esto porque han sido ellos quienes los han guiado en el traslado a cultivos lícitos sin advertirles que estos, muy probablemente, no producirían. Asimismo, los agricultores denuncian que estos actores tergiversan la realidad del valle comunicando que los cultivos

lícitos se están cosechando de manera exitosa y registrando fotográficamente solo aquellos que no han sido afectados por enfermedades. Finalmente, existen reclamos respecto a que la asistencia técnica brindada es de baja calidad por el poco interés y conocimiento de la zona de los extensionistas, quienes, junto con los funcionarios, se denuncia que absorberían gran parte del dinero destinado a los agricultores.

Gran parte de las dificultades mencionadas se relacionan con el hecho de que DEVIDA actúa de manera aislada en el Monzón, principalmente por la dificultad que tiene para convocar en el territorio a otras entidades públicas. A pesar de que esta institución es la encargada de coordinar esfuerzos para incidir en zonas coccaleras, la entidad recibe poca respuesta de parte de los demás ministerios, los cuales, se señala, tienen *otras prioridades*.

¿Y dónde están estos sectores? ¿no? ¿cómo han aparecido a lo largo de esto? Y ahí sí encuentras tú tensiones incluso, ¿no? De un DEVIDA que, a pesar de que es el ente coordinador de las drogas, tiene muchos problemas, y lo ha tenido a lo largo de su historia, para articular esfuerzos, ¿no? Para decirle al Ministerio de Economía: 'Oye, invierte aquí', al otro 'Invierte aquí', Agricultura: 'Invierte aquí'. No han querido invertir. O sea, el discurso siempre ha sido 'No llegan, pues'. Pedimos, articulamos, todo, pero no, porque ellos tienen también sus propias prioridades.

(Funcionario DEVIDA)

En ese sentido, el apoyo de organizaciones internacionales como USAID habría sido vital para “balancear” algunas de las dificultades que se le presentaban a DEVIDA, la cual recién desde el 2013 empezó a ejecutar los proyectos que antes coordinaba. En ese sentido, la intervención en el Monzón es la primera que esta institución planifica e implementa directamente, lo cual generó dificultades por la poca experiencia en ámbitos como la contratación de personal y el trabajo con el calendario agrícola, lo cual se complicó aún más por las demoras en los procesos estatales. Así, gracias al apoyo de USAID, siete u ocho días después de la firma con los caseríos se pudo iniciar con la sustitución de cultivos, lo cual habría sido improbable si es que DEVIDA hubiese actuado de manera solitaria. Los procesos burocráticos que ella debe atravesar como institución estatal dificultan las respuestas rápidas, arriesgando

el éxito de las iniciativas. Por ello, ante los funcionarios estatales, el aporte de USAID ha sido esencial en la implementación del Desarrollo Alternativo, ya que ha proveído insumos, presupuesto y *expertise*, así como programas de salud para la población.

3.3.2. Asociatividad

Por otro lado, se encuentra el componente de Asociatividad, el cual trabaja el fortalecimiento de organizaciones -cooperativas, asociaciones y comités de base- dentro del ámbito de intervención, además de la vinculación de estas al mercado. En ese sentido, DEVIDA promueve la creación de estos organismos y fomenta la vinculación de los agricultores a ellos, ya que se reconoce que la venta colectiva de sus productos agrícolas sería económicamente más beneficiosa para ellos que la venta individual.

Así, en el valle del Monzón existen 55 organizaciones, de las cuales solo se encuentran activas dos cooperativas y tres asociaciones de productores. Estas son fortalecidas a través de iniciativas como el sinceramiento del padrón, la renovación de sus juntas directivas, la elaboración de planes operativos y la formación de los socios en temas administrativos y comerciales.

En el caso de la Cooperativa Agraria Valle del Monzón, ubicada en el centro poblado de Cachicoto, fue posible conversar con sus dos últimos representantes, quienes informaron respecto a sus principales problemas en la actualidad. Respecto a ellos, el principal se refiere a la dificultad que tiene la organización para convocar a sus socios, quienes no suelen involucrarse en las tareas de gestión que esta requiere.

La gente ya dicen ya "Pero, en vez de darle a la cooperativa, ¿por qué no me ha dado a mí?", se molestaron también por eso. (...) Ellos quieren agarrar y comer al toque, y DEVIDA dice que "no, yo voy a darle a la cooperativa". Y ahora estamos con la cooperativa, he andado yo con los técnicos, todo, no he encontrado la aceptación de socios, y de los inscritos, en el libro tengo 100, pero trabajando, apostando tengo 10, 8. (Agricultor, adulto, La Granja)

Tal como fue señalado por una representante del componente Asociatividad, esto se relaciona en gran medida con la falta de experiencia que tiene la población en la organización con fines económicos. Si bien la población tenía experiencia organizándose a través del gremio cocalero, hacerlo a través de una cooperativa o asociación tiene grandes diferencias. Por un lado, el gremio tenía un fin principalmente político, y sus acciones, a pesar de ser constantes, eran específicas para la defensa del cultivo en determinadas coyunturas. Por otro lado, estas organizaciones comerciales requieren del compromiso continuo de los socios, quienes deben gestionar colectivamente tareas que impactan en su situación económica. Por más conjunta que haya sido la defensa de la coca, todas las dinámicas económicas en torno a esta se hacían de forma individual, a través de una economía de mercado que poco se apoyaba en lazos sociales. La mano de obra era conseguida a través del pago de jornales, mientras que la venta del producto se hacía directamente en la chacra, por compradores individuales que acordaban un precio directamente con el productor de coca.

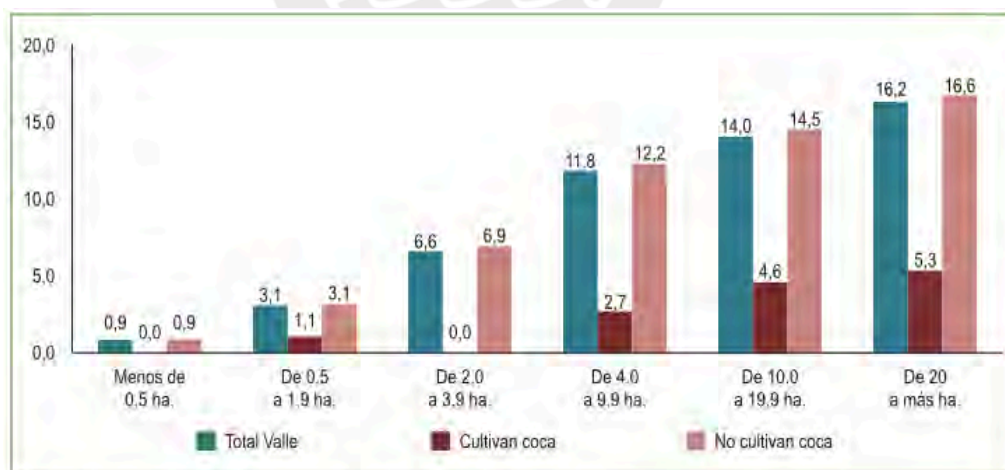


Gráfico 6. Productores agropecuarios que pertenecen a algún tipo de organización, según tamaño de las unidades agropecuarias (%). Fuente: CENAGRO 2012.

Así, en el 2012, el 90.6% de los agricultores del Valle del Alto Huallaga no se encontraba organizado en ningún mecanismo asociativo (comité, cooperativa, etc.) (CENAGRO, 2012). Al analizar al 9.4% se observa que, por

un lado, sus niveles de organización aumentan en relación directa con el tamaño de sus unidades agropecuarias, y por otro, son pocos coccaleros los que se encuentran en este grupo (CENAGRO, 2012).

Esta falta de experiencia dificulta el trabajo en grupo, siendo que los socios perciben que los beneficios que conlleva estar organizados, son menores a los compromisos que ello implica.

La peor dificultad y la, la que, lo que sucede acá es que el Estado nos dice "asóciense", pero nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar independiente. Entonces es bien difícil reunir, agrupar. (...) Lo que necesitamos es capacitarnos, ¿qué beneficios trae el ser organizado? A mí me da mucha pena, por ejemplo, decir que yo soy un socio y no sé qué cosa es, qué es mi responsabilidad como socio. Porque toda la vida hemos vivido independiente. (...) Cuando tú les llamas (...) "Queremos capacitar a sus asociados en el tema del café o en el tema del cacao", y llamo a los socios y dicen "no, pero eso es capacitación, capacitación y capacitación. Todo el tiempo capacitación, ¿qué cosa voy a hacer con capacitación?". Entonces eso no lo entienden, no lo entendemos.
(Agricultor, adulto, Cachicoto)

Esto se agrava considerando las necesidades que tiene la población en la actualidad. Debido a que la cooperativa recién está empezando a funcionar - dado que la producción de café y cacao está iniciando en el valle-, su capital financiero es reducido, lo cual limita su capacidad de compra y la lleva a requerir que los socios brinden parte de su producción sin recibir un pago inmediato. Esto implica un gran corto para agricultores con baja producción e ingresos poco diversificados, razón por la cual, aun siendo socio de la cooperativa, la mayoría de productores acuden a intermediarios locales para vender sus productos. A pesar de saber que el precio que ganan por sus cultivos es menor con estos actores, la urgencia económica los lleva a optar por esta estrategia, lo cual socava también las posibilidades de crecimiento y consolidación de las cooperativas.

Sin embargo, aun cuando las cooperativas acopian el producto de sus socios, la vinculación de estas organizaciones con el mercado no es directa sino que mantiene la figura del intermediario. Así, los encargados de la cooperativa aumentan el valor de su producto por venderlo en grandes volúmenes, ya sea a través de contactos en ciudades como Tingo María o

tratando directamente con personas que se acercan a sus locales. Las únicas ventas directas que se registran son aquellas en las que se comercializan productos con valor agregado, tales como chocolate, café tostado, o cacao nibs, los cuales son producidos en una planta ubicada en el centro poblado de Bella, en Bajo Monzón.

En ese sentido, si bien el componente de Asociatividad resulta sumamente relevante para mejorar las condiciones de vida de los agricultores del valle, en tanto es una oportunidad para aumentar sus ingresos económicos y un espacio para fortalecer su organización social, sus alcances por ahora son bastante limitados. Esta situación, sostenida también en la baja productividad actual, lleva a que los productores aún estén lejos de tener acceso a mercados de exportación ni trabajen por la certificación orgánica de sus productos, lo cual reduce también las ganancias potenciales de sus cultivos alternativos.

3.3.3. Gestión comunal

El componente de gestión comunal fue inicialmente llamado “Socialización”, en tanto era el encargado de hacer el “primer acercamiento” entre DEVIDA y la población después de la erradicación de hoja de coca. En ese sentido, es necesario recalcar que el primer acercamiento de la institución al valle no fue a través de los programas de cultivos alternativos, sino mediante la iniciativa “Caravana para el Desarrollo y la Inclusión”, implementada desde este componente. Esta tenía como objetivo acercar los servicios estatales a poblaciones afectadas por la erradicación. Así, el 6 de julio del 2013 llegó a Cachicoto la RENIEC, los programas Beca 18, Juntos, Qali Warma y Pensión 65, así como el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se instalaron módulos que buscaban orientar a los asistentes sobre cultivos alternativos, además de realizarse eventos deportivos y de entretenimiento (Info región, 7 de julio 2013). Según lo señalado por Casas (2015, pp. 15, 16), esta iniciativa fue muy valorada por las madres de familia, quienes consideraban beneficioso el acercamiento de programas de salud para ellas y sus familias.

Sin embargo, el equipo de Gestión Comunal de DEVIDA señaló que, considerando que este tipo de intervenciones profundizaban en la población una lógica paternalista y no aseguraban una presencia estable de las entidades estatales en el valle, optaron por cambiar de estrategia. Por ello, en la actualidad, este componente busca generar en la población la capacidad de gestar sus propias iniciativas, de manera que cada vez requiera menos la intermediación de una institución estatal. Para ello, se fortalecen las Juntas Vecinales Comunales (JVC), las cuales, en el marco de la nueva Ley de Municipalidades, reemplazan a los anteriores agentes municipales. Este trabajo, además, permitiría que la población conozca la complejidad de los procesos implicados en la satisfacción de sus necesidades, de manera que haya una mayor familiarización con los procesos que la gestión social implica. Dentro de este objetivo, el rol de DEVIDA sería apoyar en la articulación de la población con las entidades que ellos solicitan, de manera que sean ellas quienes gestionen su propio desarrollo. Esto se organizaría a través del Plan de Desarrollo Comunal y Plan de Trabajo Anual, documentos elaborados por la comunidad para identificar no solo sus demandas sino también qué actores estatales deben ayudarlos en cada proceso.

Así, este componente es el encargado de articular a otras instituciones estatales para que tengan presencia en el valle, aumentando la comunicación entre ellas y la población del Monzón. Aunque se han logrado intervenciones de algunas entidades, a partir de lo conversado con el equipo encargado de este componente se conoce que este punto es en el que mayores dificultades se tienen, ya que por más de que las instituciones manifiestan su predisposición, son pocas las que realizan acciones concretas en el valle.

Finalmente, otra de las dificultades que este componente encontró en el valle es la desconfianza de la población, ya que ello generó que en un inicio su involucramiento en las iniciativas propuestas sea reducido. Sin embargo, el equipo señaló que esta relación estaría mejorando, lo cual puede observarse a través del aumento de la participación en faenas comunales. Estas últimas se organizan en torno a necesidades específicas, tales como la mejora de

infraestructura en la localidad. Así, mientras al inicio congregaban un promedio de 20 personas, ahora lograrían convocar alrededor de 70.

Si bien resulta sumamente importante indagar cómo estas organizaciones proceden en el futuro, a partir de lo conversado con el equipo de DEVIDA se entiende que los alcances de este trabajo aún son limitados. Esto, por un lado, porque la población tiene mayores incentivos y facilidades para participar en iniciativas con objetivos a corto plazo, lo cual mella la oportunidad de trabajar colectivamente por proyectos más sostenidos en el tiempo. Por otra parte, se evidencia nuevamente la dificultad de articular a diferentes entidades estatales para trabajar en el valle, lo cual aumenta la presión en DEVIDA por ser la principal institución que se relaciona de manera directa con los productores.

3.4. Síntesis

En conclusión, la implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas en el valle del Monzón se divide en las fases de operativos policiales de interdicción, erradicación y Poserradicación. Entre ellas, la articulación ha sido escasa, aunque en conjunto hayan logrado la reducción del cultivo de coca y el narcotráfico en la zona. De hecho, cada fase ha sido implementada por diferentes actores estatales, cuya forma de proceder y presentarse a la población ha variado notablemente.

En las primeras dos etapas se hizo uso del monopolio legítimo de la fuerza para ingresar al valle, encarcelar dirigentes y erradicar hoja de coca, para lo cual se desplegó una maquinaria estatal ante la cual la población consideraba no tenía herramientas suficientes para enfrentarse. Esto, sin embargo, entra en contradicción con las narrativas previamente difundidas por el Estado y la prensa, las cuales retrataban a los agricultores como agentes que impedían el ingreso estatal al valle. Si bien esto es usualmente justificado haciendo mención a la presencia del narcotráfico y terrorismo en la zona, existen también testimonios que cuestionan hasta qué punto no ingresar al Monzón era una decisión política e intencional.

En la misma línea, la encuesta realizada por DEVIDA en el 2003 muestra la predisposición de gran parte de la población del valle para beneficiarse de los programas de Desarrollo Alternativos; lo cual cuestiona la presentación de los agricultores del Monzón como personas que se negaban a la transición a cultivos lícitos. Esta última idea es implícitamente reforzada en los objetivos de los programas de Responsabilidad Social del CORAH y los de la fase de Poserradicación, que señalan buscar un “cambio de actitud” en la población del valle. A través de esta premisa se asume que hay una población poco cooperante con el alcance del “desarrollo y vida lícita”, cuando en realidad gran parte de ella estaba de acuerdo con migrar a cultivos alternativos desde mucho antes del ingreso de la erradicación. Sin negar la presencia de un gremio que dificultaba los procesos de concertación entre el Estado y la sociedad civil, debe reconocerse que el ingreso al Monzón se sostuvo en una relación desigual de poder que trató con violencia a los agricultores del valle, invisibilizando las iniciativas de cooperación ya presentes en el territorio.

La forma en que se llevó a cabo este ingreso generó en la población gran preocupación y malestar, en tanto mucha perdió casi la totalidad de sus medios de vida a partir de este. Por ello, resulta interesante que la responsabilidad de esta situación recaiga en gran medida sobre el gremio cocalero, en tanto los productores consideran que fue este quien no supo negociar con el Estado. A pesar de ello, se registra un resentimiento hacia el ente estatal, lo cual habría llevado a que algunos centros poblados rechacen los programas de DEVIDA. Esta situación, aunque aún ocurra en algunos caseríos, no es la más generalizada, en tanto las necesidades económicas de la población la han impulsado a requerir el apoyo de esta institución.

Desde el enfoque de estrategias de vida, se entiende que las intervenciones estatales retratadas en este capítulo han modificado en gran medida (1) el contexto institucional y de política, y (2) el contexto de vulnerabilidades en el valle. Respecto al primero, esto se evidencia por la presencia de nuevos actores –principalmente públicos pero también privados– y leyes en el valle, los cuales buscan impulsar en los agricultores una total desvinculación del mercado ilícito. Ejemplo de ello es que el involucramiento de

los agricultores con el Desarrollo Alternativo implique que estos acepten una penalización legal en caso opten por la resiembra de coca.

Esto, como es de esperarse, tiene impactos en el contexto de vulnerabilidades, en tanto los shocks y riesgos a los que los productores estaban expuestos han cambiado. Antes, los riesgos en el Monzón se referían a la posibilidad de que haya una baja en el precio internacional de la coca, así como a la ocurrencia de actos de violencia por la presencia de firmas locales y grupos subversivos. Ahora, los agricultores siguen expuestos a la baja de precios de sus cultivos, solo que ahora estos son lícitos y proveen un ingreso menor, lo cual agrava las consecuencias que tiene esta variación económica. Asimismo, enfrentan mayores riesgos en la producción de sus cultivos en tanto existen menores probabilidades de que estos tendrán éxito en sus parcelas, debido a su degradación. Finalmente, enfrentan la vulnerabilidad creada por el Estado que los penaliza legalmente por la resiembra de coca, en un contexto que presenta fuertes limitaciones para la producción de café y cacao.

Así, las iniciativas estatales implementadas han tenido fuertes efectos en las dinámicas sociales, políticas y económicas del valle. En el siguiente capítulo, se conocerán las estrategias de vida –sumamente heterogéneas– que la población ha desplegado en este nuevo contexto.

Capítulo 4: Estrategias de vida

En este contexto de transformación, la población del Monzón ha modificado sus estrategias de vida en diferentes grados y direcciones. Las prácticas previamente desplegadas por los agricultores para conseguir sus medios de vida no tienen la misma efectividad en la actualidad, en tanto las dinámicas del valle han variado enormemente. De la misma manera, las ideas a través de las cuales los actores significaban sus actividades se han transformado, generando nuevas perspectivas y narrativas sobre el contexto actual. Estos cambios, además, se han visto acompañados por la permanencia de estrategias que, ya existiendo antes del ingreso estatal, han sido reforzadas a partir de este. Así, el proceso vivido en el valle no ha implicado una homogeneidad en las estrategias desplegadas, sino que ha evidenciado nuevas y antiguas diferencias entre ellos.

4.1. Narrativas

4.1.1. Discursos sobre la producción de hoja de coca y el narcotráfico

Tal como se señaló en el capítulo anterior, tanto la erradicación como la Poserradicación tienen como objetivo un “cambio de actitud” en los agricultores ex cocaleros. En ese sentido, en la implementación de estas iniciativas se ha buscado de manera explícita que la población del valle re defina sus comportamientos y perspectivas, principalmente en torno a la actividad económica que antes realizaba. Como se ha mencionado, durante este proceso la criminalización de la actividad fue un discurso extendido, en tanto desde la prensa y personal de campo se enfatizaba el vínculo entre los cocaleros y el narcotráfico, en algunos casos llegando a responsabilizar a los agricultores de las consecuencias que este fenómeno transnacional tiene.

En respuesta a ello, fue posible encontrar agricultores que negaban esta relación, diferenciando, por un lado, su actividad de la de los narcotraficantes y, por otro, la hoja de coca de la cocaína. En ese sentido, algunos ex cocaleros

mantienen que el cultivo de coca no los convierte en delincuentes y que, a diferencia de lo que muchas veces se les ha dicho, ellos no son narcotraficantes. Al contrario, señalan que no mantenían relaciones de cercanía con estos actores, a quienes además caracterizan como aficionados y no grandes narcotraficantes. En ese sentido, este grupo busca replantear las ideas usualmente sostenidas respecto al valle, negando las imágenes que actores externos han construido sobre el Monzón. Sin embargo, es importante mencionar que dentro de este grupo se encuentra una narrativa frágil respecto a la violencia que el cultivo de coca podría haber generado, ya que mientras algunos niegan la existencia de esta relación, otros presentan discursos contradictorios. Así, si bien en un inicio pueden plantear que es mentira la figura de “tierra de nadie” que se le acuñó al valle, más adelante recuerdan los asesinatos y desapariciones de la época del terrorismo.

Se entiende que, tras muchos años de defensa colectiva a la hoja de coca –en los que el discurso sostenido ante cualquier extraño negaba la presencia de caos y violencia en el valle–, la primera reacción ante preguntas sobre el pasado del Monzón haya sido asegurar que en este se gozaba una vida pacífica. Sin embargo, la indagación sobre la vida cotidiana y las sensaciones que esta generaba muestra que, previo a la erradicación, muchos agricultores vivían en constante temor por las incursiones del terrorismo en la zona. Respecto a esta época, se recuerdan torturas y desapariciones, así como una limitación del ejercicio de libertades individuales. Por esa razón, los testimonios recogidos relacionan directamente la violencia pasada con la presencia de terroristas en el Monzón, sin necesariamente vincularlos directamente con el narcotráfico¹⁸.

Además de estas narrativas, se registraron discursos que deslegitimaban el cultivo de coca en diferentes grados. Así, existe un grupo de agricultores cuya posición es bastante tajante, ya que consideran que ella ha

¹⁸ Si bien esto no descalifica la interrelación entre ambos fenómenos, puede comprenderse que, a nivel de experiencia cotidiana, los agricultores no hayan percibido el ejercicio de violencia directa contra ellos por parte de narcotraficantes, mientras que sí por terroristas. Respecto a los primeros, la violencia vinculada a su presencia se recuerda más por los enfrentamientos que ocurrían entre ellos, antes que por aquellos entre ellos y la población.

llevado a la población a la ociosidad y la vida fácil. Señalan que, por resultarle más sencillo, la población prefería dedicarse de manera exclusiva a la coca, la cual generaba ingresos suficientes para contratar personal que permitiera a los dueños no trabajar sus parcelas. Esto explicaría por qué parte de la población prefería comprar alimentos de pan llevar en lugar de sembrarlos directamente, ya que resultaba más rentable dedicar toda su tierra a la cosecha de coca y cubrir sus necesidades con los ingresos que esta generaba.

Para este grupo, los ingresos percibidos por la hoja de coca son conceptualizados como “dinero fácil”, el cual habría inducido a la población al despilfarro y no al ahorro ni inversión. Así, se crea una idea de que el dinero del narcotráfico es dinero *sucio* y efímero, que no contribuyó a una auténtica mejora de las condiciones de vida de la población, sino más bien al desarrollo de actividades como la borrachería y la prostitución, así como a la expansión de violencia familiar y delincuencia en la zona. Bajo esta perspectiva, la ilegalidad de la planta es un aspecto que, por sí mismo, carga negativamente la actividad, caracterizándola como igual de desdeñable que cualquier otra ilegal.

¿Y por qué cree que [algunos agricultores] prefieren cultivar coca?

¿Qué sería mejor de la coca?

Ellos quieren porque es fácil, fácil.

Es más fácil.

Fácil. En dos meses nomás de plata, se llena. Cada dos meses, dos meses, dos meses, dos meses. Ilícito. No en todo eso, todo es contra, pe'. Es como el, ahorita al toque te pones allá y robas esa moto y ya estas con moto, ilícito. (...)

Usted considera que cultivar coca ilícita es como eso, es como robar.

Como robar. Es para mí como robar, matar. Porque fácil. Dicen que trabajan, se suda, pero no. Yo considero así.

(Agricultor, adulto, Cachicoto)

Antes [de la erradicación] todo era comprado, qué afán, qué vas a criar un chancho, compro un chancho a la pachamanca, “come, ya está”, esa es la ociosidad. Y por eso, por la coca, la coca te lleva mal camino, yo doy gracias a Dios que la coca se ha acabado, de verdad, sinceramente. (...) Ahora sí, [mi esposo] se va a la chacra, dando vueltas, su ganado, su carnero, sus animales, sus plantas, ¡Qué lindo! (...) Cuando había coca, había mucho terrorismo; cuando había coca, había mucha

delincuencia; cuando había coca, había mucho, mucho, mucho maltrato familiar; cuando había coca, había todo, todo malo era. En cambio ahora no, ahora mi vida es tranquilo, sembramos, trabajamos, comemos, tomamos, dormimos, antes no era así.
(Agricultora, adulta, Cachicoto)

En contraste con esta posición, se encuentran los agricultores que, presentando narrativas de deslegitimación al cultivo de coca ilícita, matizan su discurso contextualizando las motivaciones que impulsaban su actividad. Por un lado, estos productores le confieren una carga moral negativa a la hoja de coca a causa de su ilegalidad, por lo que caracterizan la actividad como algo que “no es bueno”, y al traslado a cultivos alternativos como un “cambio de vida”. Esto, si bien puede haber sido influenciado por discursos estatales, también se relaciona con la amenaza constante de que se erradicarían sus cultivos. En ese sentido, el carácter ilícito de la planta, además de generar en algunos la sensación de estar haciendo algo incorrecto, los lleva a percibir que la continuidad de su actividad se encuentra en constante riesgo.

[Sobre la erradicación] *O sea, están decepcionados por lo que el Estado les hacía, el gobierno les hacía. Pero al mismo tiempo estaban conscientes de que estaban haciendo cosa ilegal, plantar coca no es bueno. Pero no les quedaba otra porque no, o sea, una buena producción no hay acá.*
(Agricultor, adulto, Cachicoto)

¿Y qué opina que ya no se cultive hoja de coca?

Por parte digo que ya no debe ser ya, eso. Porque eso es riesgo, pe'. De qué vale de que siembres, vuelta van a venir a jalar otra vez. Como es ilícita. En cambio el café cueste lo que cueste, ya pe', ya es legal. Aunque sea poquito, pero es legal.
(Agricultor, adulto, Monzón)

Por otro lado, y a diferencia del grupo anterior, estos productores señalan que las ganancias recibidas por el cultivo servían para cubrir sus necesidades básicas –alimentación, principalmente– y asegurar el acceso de sus hijos a educación superior. En ese sentido, una de las principales consecuencias de la erradicación fue la reducción de la posibilidad, antes bastante extendida, de enviar a sus hijos para su profesionalización fuera del distrito. Para este grupo de agricultores, aunque fuera ilícita, la coca fue un

vehículo que aseguraba la movilidad social familiar. Por ello, a pesar de que se acepta la ilegalidad de la actividad y en algunos casos se considera que tuvo consecuencias negativas, su cultivo se justifica por haber sido la única vía de acceso a estas oportunidades sociales. En ese sentido, la deslegitimación de la coca se matiza porque su fin no era el despilfarro ni la *vida fácil* –como menciona el grupo anterior–, sino el acceso a una “vida tranquila” y la formación de sus hijos en instituciones educativas de mayor calidad.

A pesar de que pueden diferenciarse estos tres tipos de narrativas en el valle, es necesario aclarar que en muchos casos estos discursos se entremezclan, razón por la que existen algunos puntos en los que los productores suelen estar en mutuo acuerdo. Así, a pesar de sus diferencias, todos los entrevistados conciben que el proceso que los ha llevado del cultivo de hoja de coca al café o cacao ha sido sumamente difícil para ellos a nivel local y familiar. La explicitación de las tensiones y dificultades que la erradicación motivó es generalizada, razón por la que esta intervención se conceptualiza como violenta y en ningún caso se legitima la forma en que el Estado la llevó a cabo. Asimismo, es compartida la idea de que la hoja de coca les permitió vivir mejor de lo que los cultivos alternativos lo hacen, ya que no solo la carga laboral era menor sino que habían mayores oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas a nivel individual y familiar.

4.1.2. Visiones sobre el Estado

En contraste con la heterogeneidad de discursos respecto a la legitimidad del cultivo de coca ilícita, entre los agricultores existe un mayor consenso cuando se les pregunta sobre el rol atribuido al Estado en la actualidad. Como se ha señalado anteriormente, en los años previos a la erradicación existían disputas en el valle respecto a si permitir o no el ingreso de este actor a la localidad. Sin embargo, hoy en día, aún entre los agricultores que defienden el cultivo de coca y reclaman la ineffectividad de DEVIDA, está presente la demanda por un cada vez mayor apoyo estatal, ya que se

considera que es a través de esta vía que más probablemente se puedan mejorar las condiciones de vida de la población.

Así como lo señala Heuser (2017, pp. 133), tras la intervención estatal hay una creciente expectativa porque los actores institucionales apoyen el desarrollo de la región proveyendo alternativas rentables y construyendo infraestructura. Asimismo, la población relaciona con la presencia estatal algunas características de cambio en el valle, tales como menor violencia, “desorden” –principalmente por la reducción de la vida nocturna y el consumo de alcohol– y mayor seguridad. Respecto a esta última, la instalación de comisarías en algunos centros poblados del Monzón es considerada como una “garantía” para la población, la cual en muchos casos percibe una disminución de la delincuencia y conflictos que antes tenían lugar en el valle. De la misma manera, dos de los entrevistados señalaron querer que vuelva la base del Ejército que se había instalado cerca de Cachicoto hasta principios del 2017, aludiendo a que esta proveía mayor protección a la población y disminuía las posibilidades de que se resiembra coca.

Esta vinculación entre presencia institucional y mejores condiciones de vida se puede observar también en que, al comparar los dos últimos censos nacionales, se encuentre una clara ampliación en el acceso a servicios. Así, del 2007 al 2017, en el distrito del Monzón el acceso a alumbrado público ha aumentado en 31.7%, a la vez que la cantidad de viviendas que no contaban con red pública de desagüe dentro de la casa se ha reducido en 32.3% (INEI). Si bien no puede atribuirse por completo esto a la presencia estatal en el valle, tampoco es posible descartar que esta mejora no tenga un impacto positivo en la percepción que la población tiene del Estado.

Asimismo, esta tendencia es también reforzada por las nociones que extienden los mismos actores estatales, quienes presentan sus intervenciones como una vía hacia el desarrollo, contraponiéndolas con las actividades ilícitas, a las cuales caracterizan como obstáculos para que el valle prospere.

CORAH es una entidad que mucho, eh, ha sido, eh, cuestionada por los, sobre todo por las organizaciones políticas, algunas, obviamente de traficantes algunos, que están asociadas a traficantes, me refiero. Pero que se ha demostrado que es una de las más, digamos, necesarias,

para mejorar la situación social y económica de un lugar cocalero. Porque si no te erradico vas a seguir dependiente y cada vez más pobre. Y vas a ser cada vez más excluido. (...) Entonces él necesita a CORAH, que le erradique. Y además, pero que no le erradique, sino además le ayude [con el programa de Responsabilidad Social].
(Funcionario CORAH)

La oportunidad está acá [con DEVIDA], el Estado está acá después de 30 años que los han rechazado.
(Funcionario de la Oficina de DEVIDA en Cachicoto, Monzón)

Esto, sin embargo, tiene amplias consecuencias para DEVIDA, siendo que es la institución estatal con mayor presencia actual en el valle. Por esa razón, los agricultores canalizan a través de ella todas las demandas que tienen hacia el Estado, aun cuando estas sobrepasan sus posibilidades y competencias. Así, la población, quien carece de empleo de calidad, pide a DEVIDA que su intervención incluya remuneración económica a manera de jornales. Asimismo, pide que se amplíen las actividades productivas ofrecidas a los agricultores, que se provea acceso a un mercado seguro y rentable, y que se mejore la calidad de los servicios de salud y educación. Si bien todas estas demandas son completamente legítimas, además de esperables en una localidad que por muchos años no se ha relacionado directamente con una institución estatal, queda claro que DEVIDA –así como cualquier institución aislada– no tiene la capacidad para hacer frente a las mismas.

En un contexto de fuertes carencias, esta incapacidad se traduce en un alto descontento, por lo que es necesario aclarar que, si bien la población desea una mayor presencia estatal en el territorio, esto no significa que DEVIDA goce de completa legitimidad ni confianza en el valle. Prueba de esto es que el 6 y 7 de marzo del 2018 el Frente de Defensa de la provincia de Leoncio Prado haya convocado a un paro macroregional, en el que una de las principales demandas era el retiro de DEVIDA del valle del Monzón (Inforegión, 28 de febrero 2018). De la misma manera, se registraron testimonios que denunciaban malas prácticas de la institución, a la cual se considera desleal en la difusión de sus resultados.

La economía, estamos bajo de economía, en el valle de Monzón. No solo yo, hay cantidad de agricultores. Los ingenieros saben, pero no sé por qué informan, al revés informan. Solamente, los ingenieros del cacao vienen a la chacra, donde está lo más mejorcito, le toman foto. Ya. Esa información llevan. Y por qué no toman ese, ese cacao que está saliendo flacuchento, igual como yo. ¿Uno enfermizo por qué no toman?
(Agricultor, adulto, Cachicoto)

En los casos más extremos, los testimonios responsabilizan al Estado de fenómenos el hambre y la delincuencia, ya que se considera que sus intervenciones no han proveído de alternativas viables a los campesinos, sino que más bien han agudizado sus necesidades.

Pero tantos niños de hambre, tantos ancianos abandonados [llora]. A veces digo, por el gobierno mismo hay terrorismo, hay delincuencia, la necesidad, el hambre, ver a esos jóvenes desocupados, delincuentes. Era una, una realidad triste. Bueno, hasta ahora, ¿no? Que DEVIDA, pues, es una entidad grande, es poderoso, que sigue maltratando al campesino. Solo los que se llenan los bolsillos son las autoridades.
(Agricultora, adulta, Monzón)

Como se observa, parte del descontento hacia la institución también se debe a la sensación de que gran parte del presupuesto destinado a los programas es utilizado para el pago de los salarios de los funcionarios y extensionistas encargados de ejecutarlos. Al respecto, diversos agricultores manifiestan que ellos serían una fuente de trabajo para estos actores, quienes tienen asegurados sus puestos mientras que el valle enfrenta muchas privaciones. Por ello, denuncian que existe un desinterés de parte de los ingenieros en que sus cultivos realmente tengan éxito, en tanto sus sueldos no dependen de los resultados agrícolas de los beneficiarios.

De esta manera, es posible observar la convivencia de dos discursos respecto al rol y desempeño estatal en el Monzón. Por un lado, se considera que su trabajo es incompleto y que su intervención ha impactado negativamente en la economía familiar de la población. Sin embargo, a diferencia del discurso cocalero antes de la erradicación, se exige una mayor presencia del actor en el valle, por lo que hay una alta demanda por una extensión y mejora de sus servicios. Esto se hace, además, señalando que, de

no ser así, la población muy probablemente retorne al cultivo de coca, ya que las alternativas brindadas no representan una opción viable a largo plazo.

4.2. Prácticas

Además de las diferencias entre los agricultores en términos de narrativas, también puede observarse mucha heterogeneidad en las prácticas que estos han desplegado a partir de la implementación de iniciativas estatales en el valle. En el caso de estas, los factores que más intervienen en la decisión de un productor para optar por una u otra práctica son los capitales que este sostenía. A partir de la información recopilada, se tiene que los más relevantes para los agricultores han sido el natural y financiero, seguidos por el humano y social, según el caso.

4.2.1. Migraciones

Como se ha mencionado previamente, la creciente demanda internacional por pasta básica y clorhidrato de cocaína provocó en el Alto Huallaga un aumento en la producción de hoja de coca y en la migración de pobladores andinos que veían en el narcotráfico una oportunidad para vincularse al mercado como peón o jornalero (Van Dun, 2009, pp. 90-96; CVR 2003, pp. 383). Por ello, cuando se iniciaron los operativos de erradicación, en el Monzón habitaban dos tipos de agricultores: los permanentes (locales) y los estacionales (migratorios).

El principal afectado [por la erradicación], o el que se moviliza en todo caso, no es el propietario, es el golondrino. Es un golondrino que tiene en su cálculo esa contingencia, que tiene que estar un tiempo en un valle y otro tiempo en otro valle. Y muy pocas veces llega a asentarse en la localidad de forma estable, porque no es su lógica. (...) [Pero en el Monzón] vas a encontrar a agricultores que antes, que fueron, que son papayeros o que tienen café y cacao, y que ellos han sido antes cocaleros. Entonces son gente que vive ahí, que va a estar ahí siempre. (...) Que es su tierra. Que fueron colonos en los años, a mitad del siglo, del siglo XX, pero que ya son lugareños, ¿no? Ya son de la localidad.
(Criminólogo especializado en economías ilegales y política de drogas)

Si bien la migración ha sido una de las estrategias más adoptadas por la población después de la erradicación de la coca –siendo que la cantidad de viviendas desocupadas en el distrito del Monzón pasó de ser el 1.7% en el 2007 a ser el 9.8% en el 2017 (INEI)–, es necesario distinguir que esta se ha llevado de forma diferenciada según el perfil de los agricultores. Por un lado, hubo quienes salieron de manera definitiva del valle cuando se dio la erradicación, y respecto a ellos es posible señalar que, en su mayoría, correspondían a los agricultores estacionales de los que se ha hablado previamente.

¿Y mucha gente migró cuando se dio esa erradicación?

Sí, sí, bastante.

¿Y los que se fueron eran personas de acá o eran...?

No, eran personas flotantes, que les llaman. Gente que solo venía por negocio, venía por, así, hay mucha gente que anda así, pues. En, en todo el Perú hay gente que anda así. Viendo dónde está picante, ahí va, pone su negocio, pone su bar, no sé, pone su cantina y así vive, ¿no? Se acaba, "acá no pasa nada, chau, nos vemos". Y se va, son gente así. Y muchas veces son gente también que se llevan la plata, claro.

(Agricultor, adulto, Cachicoto)

A pesar de esta imagen de los peones cocaleros, es necesario resaltar que no todos los foráneos que llegaron al valle se fueron de él cuando llegó la erradicación. Ocho de los entrevistados manifestaron no haber nacido en el Monzón, sino que, atraídos por la posibilidad de obtener un trabajo como jornalero, llegaron al valle cuando aún se cultivaba coca. Sin embargo, debido a que en el momento de la erradicación no contaban con los capitales suficientes para migrar, o consideraban que los costos de hacerlo eran más altos que los beneficios –ya sea por la edad que tenían, o por tener hijos pequeños, por ejemplo– optaron por quedarse en el valle.

Sin embargo, a partir de los testimonios se puede inferir que, en comparación a los foráneos, fueron pocos los locales que adoptaron esta estrategia. Respecto a ellos, se dan algunas razones por las que estos agricultores habrían decidido migrar a pesar de ser de la localidad: se mudaron

a las chacras que tenían en otras zonas; decidieron irse porque no contaban con una cantidad suficiente de hectáreas como para dedicarse a cultivos lícitos; o tenían contactos en otros lugares del país que podían acogerlos en su lugar de residencia. En este último punto se evidencia la importancia del capital social en la configuración de estrategias para algunas familias. En el caso de una entrevistada, tener contactos fue lo que le permitió contar con una vivienda donde habitar cuando migró a Lima, así como conseguir un trabajo cuya remuneración valoraba, de manera rápida. Sin embargo, la dificultad de su esposo para adaptarse a la capital los llevó a regresar al valle, situación aludida por varios entrevistados que señalaron haber pasado por lo mismo. Así, es necesario resaltar que en la actualidad se está dando el retorno de muchos de los productores que decidieron migrar luego de la erradicación, muchas veces motivados por la dificultad de adaptarse a un nuevo contexto, ya sea por la diferencia de sus dinámicas con las del valle o por las precarias condiciones de vida a las que tienen acceso.

Por otro lado, una estrategia que es más compartida por los agricultores locales es aquella en la que uno o varios miembros de la familia migra con el objetivo de generar dinero y enviar remesas. Esto suele ser realizado por el padre de familia, aunque se ha registrado también que en varios casos son los hijos, ya jóvenes-adultos, quienes envían ingresos económicos para que sus padres puedan vivir sin ejercer un trabajo remunerado en el valle. Los trabajos ejercidos por los miembros migrantes varían según se trasladen a una ciudad o al campo, pero habría evidencia de que parte de la población se desempeña como peón en las chacras de otros agricultores, algunos de ellos dedicados igualmente a la coca.

La economía actual sigue siendo coca, pero no porque producimos harta coca aquí, sino porque nuestra gente, hemos estado acostumbrados por más de 30 años, más, 30 años ha sido cuando nos convertimos ya en productores y comercializador [sic]. (...) Entonces en su mente está eso, ¿no? De seguir, de continuar en ese trabajo. Pero son gente que viven acá, entonces van siguiendo la ruta del narcotráfico, pero tienen sus familias aquí, aquí viven. Aquí tienen la esposa, aquí tienen los hijos, entonces eso ha sido su forma de ganarse el dinero, entonces ellos siguen la ruta. Y la ruta está a nivel nacional, nadie puede negar eso, está en, está por Ucayali, está por el VRAE, toda esa zona, continúa.

Entonces esas personas van, trabajan ahí, van a cosechar, van a trabajar, y traen la economía acá. Traen la economía, traen el dinero, ya traen sus mil, dos mil dólares, le dejan a la familia, entonces ese dinero es lo que se mueve aquí. No es netamente el cacao, no es netamente de la, del café, es también de la hoja, de la coca, es del narcotráfico.
(Agricultor, adulto, Cachicoto)

Aunque en muchos casos ocurre que estas migraciones son intermitentes –periodos de medio año o menos en los que los individuos van a trabajar y luego vuelven a su hogar–, para varios de los entrevistados esta migración parcial en las familias ha tenido como consecuencia su ruptura, no solo a nivel de parejas sino también de relación entre padres e hijos. Al respecto, resulta necesario seguir estudiando las consecuencias que este proceso migratorio estaría generando en la esfera familiar.

4.2.2. Modificación de las actividades económicas y jornada laboral

Dentro de la población que decidió mantenerse en el Monzón, también se evidencian diferencias respecto a las actividades económicas que los agricultores actualmente desempeñan, así como los resultados que esto tiene en la satisfacción de sus necesidades individuales y familiares. En este contexto, el capital natural resulta sumamente relevante en la decisión de qué estrategia económica adoptar, ya que de este dependía la extensión y calidad de la tierra con la que los pobladores contaban al momento de la erradicación.

Resulta importante recordar las diferencias geográficas del valle, siendo que la parte alta del Monzón evidencia tener menor capacidad productiva que la parte baja. Lo mismo ocurre a medida que las tierras se van alejando de la orilla del río, razón por la que tener una parcela en la playa aumenta las oportunidades de un agricultor de tener éxito en la siembra de cultivos alternativos. A partir de lo registrado por Van Dun (2009) es posible conocer que la condición de migrante reduce las posibilidades de los agricultores de acceder a buenas tierras, en tanto su llegada a los valles cocaleros es tardía y la disponibilidad de parcelas reducida. Sin embargo, debido a que tras la erradicación gran parte de los agricultores que decidieron migrar vendieron sus

tierras, se encuentra que después de este evento la oferta de parcelas productivas aumentó, pero lo hizo en un momento en el que pocos agricultores contaban con capital financiero para invertir en nuevas hectáreas.

En ese sentido, un primer grupo de agricultores es el de aquellos que contaba con de media a dos hectáreas al momento de la erradicación, usualmente en zonas altas de baja productividad y difícil acceso. Debido a que cosechaban un máximo de 15 arrobas cada tres meses previo a la erradicación, sus ingresos rondaban entre 150 y 200 dólares mensuales, los cuales eran utilizados principalmente para cubrir sus gastos de alimentación y la educación de sus hijos, de ser el caso.

Con la llegada de DEVIDA, si bien muchos se inscribieron para recibir los beneficios del Desarrollo Alternativo, los resultados de estos en sus tierras fueron mínimos, razón por la que perciben que su inversión de tiempo y dinero ha sido en vano y que los cultivos alternativos no son una opción rentable para ellos. Esto se debe a que su producción es bastante baja, lo cual se agrava porque el precio del cacao y café ronda los 5 a 7 soles por kilo. Con una producción anual de máximo 100 kilos –siendo que algunos reportaron cosechas sumamente menores a esa cifra–, el mantenimiento de los cultivos les resulta más caro que los ingresos que genera. Además, el traslado de la producción desde sus parcelas hasta una carretera o centro poblado donde puedan venderlos, así como el de los materiales que DEVIDA les entrega –tales como abono o herramientas– aumentan la carga laboral de los agricultores.

Para nosotros bien difícil cuando nos entregan así un montón de abonos, roca, dolomitas. Eso vaya a cargar, ya lejos. Por eso todo no, no lo mantengo [el cacao]
(Agricultora, adulta, Cachicoto)

Por esa razón, este grupo no se sostiene a partir de cultivos alternativos –aunque los mantengan–, sino que actualmente se dedica a sembrar cultivos de pan llevar que les permitan cubrir su alimentación. De la misma manera, adquieren otros ingresos económicos a través de la migración de un miembro de la familia o el envío de remesas de parte de hijos que no viven en el distrito,

así como de la realización de trabajos de servicios como el lavado de ropa a otras familias. Para ellos, la migración permanente no ha sido una opción por considerar que la vida en la ciudad es muy diferente a la del campo, además de que, en el caso de personas mayores de 65 años, se considera muy improbable la obtención de un empleo fuera del valle.

Por otro lado, existe un grupo de productores que, si bien no tiene grandes extensiones de tierra (de 1 a 5 hectáreas), el nivel de productividad de estas les ha permitido tener un mayor éxito con los cultivos alternativos, en la mayoría de los casos de la mano con DEVIDA. Esta, sin embargo, no es la única actividad a la que se dedican, en tanto su producción es baja por encontrarse en los primeros años de cosecha, y por la proliferación de enfermedades que afectan sus cultivos.

A raíz de ello, los productores alcanzan sus medios de vida recurriendo a la venta de sus animales, al trabajo en locales de servicio como bodegas y pequeños restaurantes -que pueden o no ser de su propiedad-, al trabajo como transportistas en moto taxis, entre otros. Como se observa, si bien este grupo, al igual que el anterior, ha ampliado sus actividades laborales, la diferencia está en las ganancias monetarias que estas les generan, así como en el capital principal en el que se sostienen. Estas prácticas son una opción para los productores debido a que ha sido a través de su capital financiero que han adquirido los bienes que ahora les proveen ingresos. Este, en muchos casos, fue obtenido a través del dinero producido por el cultivo de coca, el cual habría generado un excedente suficiente como para realizar tales inversiones.

Otra agrupación de agricultores es aquella que no se encuentra vinculada a los programas de DEVIDA, a pesar de que también hayan sido afectados por la erradicación de su hoja de coca. Dentro de este grupo se encuentran las personas que, gracias a su posesión de capital humano y financiero, han tenido la posibilidad de optar por estrategias fuera del marco de los beneficios de DEVIDA sin que, a diferencia del caso anterior, esto signifique una alta devaluación de sus condiciones de vida.

Este es el caso de un agricultor que, gracias a su experiencia previa en la cosecha y venta de otros productos, optó por dedicarse a cultivos distintos al

café o cacao. Esta decisión la tomó reconociendo que, por ser la única opción que se ofrece a todos los agricultores, la alta oferta de estos productos devalúa su precio. Así, el productor se dedica a sus parcelas sin requerir el apoyo de DEVIDA, a la vez que complementa la actividad con trabajos manuales temporales en empresas privadas. Asimismo, se registró el caso de una familia que, por contar con títulos profesionales, tenía la posibilidad de ejercer una ocupación laboral alternativa para sostenerse económicamente. Así, la poca rentabilidad que implicaba trabajar su chacra los llevó a abandonar la agricultura después de la erradicación, dedicándose ahora exclusivamente a desenvolverse en sus profesiones.

Por otro lado, se encuentran los agricultores que, si bien no están vinculados a DEVIDA, sus razones para no hacerlo difieren del grupo anterior. Este es el caso de los productores que dedican parte de su tiempo al trabajo en la chacra pero también realizan trabajos temporales en empresas privadas cuando les surgen oportunidades de trabajo. Por esa razón, además de tener dificultades para asistir a las capacitaciones proveídas por DEVIDA, reconocen descuidar sus cultivos. A través de los testimonios recogidos se conoce que estos agricultores optan por no pedirle apoyo a la institución –por considerar que les exigen más de lo que los benefician–, o se retiran del programa una vez que no logran cumplir con las responsabilidades que este conlleva.

Finalmente, se encuentra el grupo de productores que, con el apoyo de DEVIDA, registra un buen rendimiento en sus cultivos alternativos. Se trata de aquellos que cuentan con una mayor extensión de tierras, las cuales además tienen una capacidad productiva apta para el desarrollo del café o cacao.

Como se mencionó anteriormente, es posible trazar una relación entre tener terrenos de alta productividad y detentar capital financiero. La primera razón se debe a que una mayor extensión de tierras en la época de la coca significó, como es de esperarse, mayor producción y, por lo tanto, mayores ingresos económicos. Por otro lado, fueron las personas que contaban con capital financiero quienes tuvieron la oportunidad de comprar las tierras cerca al margen del río que se pusieron en venta tras la erradicación. Actualmente,

estas les permiten beneficiarse del programa de Desarrollo Alternativo y producir cultivos comerciales con mayor facilidad.

Para estos agricultores, así como para aquellos que no tuvieron éxito con cultivos alternativos, queda claro que las tierras anteriormente explotadas para la producción de coca no tienen los nutrientes que requiere el café o el cacao. Esto se debe principalmente a que para el producto ilícito utilizaron de manera intensiva agroquímicos que deterioraron el estado de sus tierras. Esta perspectiva fue confirmada por el equipo del programa de Recuperación de Suelos, el cual señaló que, debido a la acidez de los suelos del valle, ni el café ni el cacao pueden crecer en tierras previamente dedicadas a la coca que no han pasado por un proceso de recuperación¹⁹. Lamentablemente, este equipo también señala que la mayoría de los agricultores cuentan con este problema, dado que tienen suelos extremadamente ácidos: con un pH de 4 a 5 mientras que el cacao requiere un mínimo de 5.5 para producir²⁰.

Sembré café, ese en mi chacra lo que han jalado. Entonces ahí sembré mi café. (...) DEVIDA vino, nos inscribió, nos ofreció, nos dio las bolsas, nos dio, este, semilla. Hemos trabajado, dale, dale, nada. Nada ha resultado, nada. No ha resultado hasta el momento. (...)

¿Y qué razón le dan? ¿Por qué no crece?

Es que la tierra es estéril, ya pe', ya no hay, no hay mantenimiento.

¿Y antes no le dijeron eso?

*No, no nos han dicho eso. Nadie nos ha dicho que “esta tierra es malo, no siembres”, nada. Sino los ingenieros venían un ratito, ahí estaban viendo, “este está bien, acá siembra”. Pero a final de cuentas ellos andaban con fin de ganar. Ellos sí se ganaban sueldo. Para el agricultor no había nada, no había nada para el agricultor.
(Agricultor, adulto mayor, Monzón)*

¹⁹ Se debe recordar que este equipo empezó su trabajo en el 2015, años después del inicio de los programas de Desarrollo Alternativo en el valle. En ese sentido, muchos agricultores han experimentado el fracaso de sus cultivos por la incapacidad de su suelo de producirlos, y ha sido después de eso que han iniciado la recuperación de sus parcelas.

²⁰ La diferencia respecto a la cercanía del río fue confirmada por ellos, quienes señalaron que el pH en la orilla es de 7 a 7.5 mientras que las parcelas más alejadas pueden llegar a 4.

Ante esta situación, una de las mayores interrogantes es por qué no se evaluó con más detenimiento el estado de los suelos antes de iniciar la siembra de cultivos alternativos. Sin embargo, al conversar de la problemática con un funcionario de la Oficina de Coordinación Monzón, este señaló que hacer esto hubiese significado aceptar que la intervención era inviable para parte de la población. Asimismo, la urgencia en la que los agricultores se encontraban al momento de la erradicación llevó a que DEVIDA intente actuar con la mayor rapidez posible, lo cual, si bien en un inicio pudo asegurar una mejor interacción con la población, actualmente debilita su legitimidad.

Cabe resaltar que la posesión de tierras productivas no solo se explica por su compra en la etapa pos erradicación, ya que parte de los agricultores del valle contaban con parcelas en buen estado cuando DEVIDA llegó al valle. Este es el caso, principalmente, de agricultores oriundos del Monzón, quienes además de tener una mayor extensión de tierras, han contado con parcelas en diferentes zonas del valle.

Sin embargo, no todos los agricultores que tienen éxito actualmente en el Desarrollo Alternativo consideran que lo que marcó la diferencia entre ellos y otros agricultores fue la calidad de su parcela. Al contrario, algunos consideran que su éxito es resultado de su constante trabajo y dedicación, ya que los cultivos alternativos implican mucha mayor carga laboral que la coca.

¿Por qué no les rinde? porque ellos no toman interés, porque ellos no cumplen con atender a la chacra. (...) Las tierras, las que han sido cicales sí son de tierras pobre, eso tienen que tener más cuidado, más abono, más tratamiento, más interés en esas tierras porque esas tierras son pobre. (...) Pero no todas las chacras en los centros poblados son malos, sino que ellos aducen que no tenemos terreno para otras plantaciones sino solo coca, ese es un argumento para ellos por no querer sembrar otras plantas, solamente por querer seguir viviendo de la coca, ese era su argumento de ellos.

(Agricultora, adulta, Cachicoto)

Finalmente, es necesario mencionar que dentro de este grupo también se encuentran agricultores que al momento de la erradicación no contaban con hoja de coca en sus parcelas. En ese sentido, tuvieron mayores oportunidades para beneficiarse del Desarrollo Alternativo en tanto sus tierras no requerían

ser recuperadas, sino que se encontraban en un estado propicio para el cultivo de café o cacao. Al respecto, es ilustrativo que tanto el presidente actual como el anterior de la Cooperativa Agraria Valle del Monzón (CAV Monzón), no cultivaban coca al momento de la erradicación.

4.3. Patrones compartidos

A pesar de las diferencias encontradas entre los agricultores del Monzón, es necesario señalar que entre ellos existen prácticas compartidas. En el aspecto productivo, estas tienen que ver con la diversificación de los cultivos a los que la población se dedica, en tanto ya no es común que optar por el monocultivo de ningún producto. Si bien antes de la erradicación algunos agricultores sembraban cultivos de pan llevar, muchos otros se dedicaban exclusivamente a la coca, lo cual les generó alta tensión en el momento que esta fue erradicada por el CORAH. El aprendizaje que este evento generó, además de que los ingresos de las familias se reduzcan drásticamente, que la población prefiera cultivar productos de autoconsumo además de los comerciales, de manera que también reducen sus gastos monetarios.

Otro cambio observable a nivel de prácticas se da en la forma en que los agricultores comercializan sus productos. Durante la época de la coca, la venta de este cultivo se realizaba directamente en la parcela, razón por la que los cocaleros no tenían que destinar dinero, tiempo ni esfuerzo físico en el traslado ni venta de su producto. Esta realidad es sumamente diferente a la actual, en la que los productores deben buscar el mercado en el que venderán el café o cacao. La importancia de la figura del intermediario se observa aún en los afiliados a cooperativas agrícolas, a pesar de que este ofrezca un precio más bajo que el de la asociación. Una de las razones que explican este comportamiento es la urgencia de dinero en los productores, quienes prefieren vender sus cultivos a un menor precio con tal de recibir un pago de manera inmediata. Debido a que las cooperativas no cuentan con los recursos para comprar la producción de todos sus socios, les piden entregar sus cultivos sin recibir un pago a cambio, de manera que la asociación pueda venderlos al por

mayor, ampliar sus recursos económicos y luego hacer los liquidaciones correspondientes. Sin embargo, en un contexto de fuertes carencias y urgencias económicas, esta estrategia es poco adoptada, dificultando la consolidación y fortalecimiento de una de las únicas organizaciones que agrupa a los agricultores del valle en la actualidad; a la vez que reduce sus posibilidades de obtener un pago justo por sus cultivos.

Finalmente, guardando las diferencias respectivas, todos los agricultores del valle han debido modificar sus prácticas entorno al consumo a partir de la erradicación de sus cultivos de coca. La intervención ha significado, a nivel general, un aumento en la carga laboral y una disminución en los ingresos, llevando a una modificación del estilo de vida de los pobladores del valle. Esto puede observarse a diferentes niveles: mientras algunos productores han disminuido sus espacios de ocio, otros han reducido los alimentos que consumían, y otros han recortado las oportunidades de sus hijos de acceder a una educación de mayor calidad.

En conclusión, tanto las prácticas compartidas como las más específicas muestran que el proceso de implementación ha tenido efectos diferenciados sobre los agricultores del valle. Estos, a su vez, han generado narrativas diversas que significan el contexto de cambio en el que se encuentran, al cual algunos muestran interés de adaptarse mientras otros expresan ansias por modificarlo. Así, es posible observar que las estrategias de vida que los agricultores deciden configurar no son en ningún caso homogéneas, aun cuando la intervención estatal parece aplicarse de manera igualitaria en el territorio. Los capitales de la población entrarán en juego con el contexto de vulnerabilidades e institucional, dando lugar a resultados diferentes según las decisiones que los actores decidan tomar.

Capítulo 5: Discusión

5.1. Tipología de agricultores

A partir de lo explicado en los capítulos anteriores es posible observar que, con el ingreso estatal al Monzón, han surgido cambios y permanecido continuidades en la población del valle. A pesar de que las intervenciones y paquetes entregados han sido los mismos, las diferencias de capitales en los agricultores han generado que sus respuestas a las iniciativas estatales varíen, siendo que sus posibilidades y aspiraciones también han estado influenciadas por la posición social, política y económica que detentaban. En ese sentido, a partir de la interrelación entre las políticas implementadas y las estrategias desplegadas, es posible identificar –entre los agricultores observados–, la existencia de al menos tres *grupos* de productores.

Un primer grupo se refiere a aquellos que, estando mejor posicionados durante la época de la coca, sufrieron un menor impacto negativo a causa de la erradicación y, a la vez, se benefician en mayor medida del programa de Desarrollo Alternativo. Esto se debe a que, si bien las pérdidas económicas fueron más altas para los productores con más cicales, estos agentes también detentaban un mayor capital financiero generado por la producción de coca ilícita, lo cual les permitió contar con bienes y/o activos que ampliaron su margen de respuesta ante la erradicación. Así, si bien esta los perjudicó, son quienes mayores posibilidades han tenido para recuperarse de la intervención.

De esa manera, al llegar DEVIDA, este grupo contaba con mayores extensiones de tierra y posibilidades de adquirir terrenos mediante su capital financiero, lo cual aumentó sus oportunidades de beneficiarse del programa de Desarrollo Alternativo. Los insumos brindados por la institución, así como aquellos comprados por ellos mismos, tuvieron éxito en las parcelas de estos productores, quienes encuentran que su inversión en tiempo y dinero sí ha tenido resultados positivos.

En esa línea, estos agricultores valoran en gran medida el apoyo de DEVIDA, en tanto consideran que les ha aliviado la carga económica que

habría implicado el traslado a cultivos lícitos después de la erradicación. Así, sostienen narrativas que aprueban la presencia de la institución en el territorio, a la vez que reclaman una mayor atención estatal; ya que consideran que es a través de este apoyo que el valle tiene mayores oportunidades de progresar. En ese sentido, más allá del reconocimiento de las dificultades que ha conllevado la erradicación, apuestan por un desarrollo de la mano con el Estado, a la vez que deslegitiman las dinámicas vinculadas al cultivo de coca.

Si bien el grupo antes descrito ha mantenido una posición de ventaja en ambos escenarios –durante y después de la coca–, se observa el caso de un grupo cuya posición ha mejorado a partir de las intervenciones estatales en el valle. Se trata de quienes no tenían cicales al momento de la erradicación, ya que, aunque no hayan visto reducidos sus cultivos, la intervención los interpeló modificando el contexto en el que se desenvolvían. La entrada de DEVIDA al valle después de la salida del CORAH, si bien dirige su atención principalmente a quienes se dedicaban al cultivo de coca ilícita, no excluye de sus programas a quienes no la producían. Por esa razón, la oferta de la institución en el territorio se presenta como una oportunidad para quienes, ya dedicándose a cultivos lícitos, tienen ahora la posibilidad de recibir apoyo técnico y material. Son estos agricultores quienes poseen el mayor capital natural en el valle, ya que sus parcelas no solo no se encuentran degradadas sino que ya están iniciadas en el cultivo de productos como el café y cacao, además de otros dirigidos a la venta y/o autoconsumo.

Asimismo, si antes de la erradicación los ingresos percibidos por sus cultivos legales eran menores que los de sus contrapartes cocaleros, en el contexto actual son quienes mayores posibilidades de éxito tienen en el ámbito productivo. Por esa razón, así como el primer grupo descrito, estos agricultores presentan narrativas que legitiman la presencia de actores estatales en el territorio, en tanto es a partir de su entrada que han obtenido mayores oportunidades para desarrollarse económicamente.

Cabe resaltar que, además de vincularse a DEVIDA a través del Desarrollo Alternativo, algunos agricultores de ambos grupos se relacionan con la entidad participando en otras actividades que esta promueve, ya sea

asistiendo a capacitaciones y ferias de comercialización fuera de su distrito, o tomando un rol de liderazgo en las cooperativas agrícolas. En línea con lo sostenido por Heuser (2017), en el escenario actual del Monzón la vinculación al Estado es una fuente de poder que mejora la posición de los actores en el campo social. Si bien esta vinculación no se da de la misma manera en todos los casos, para algunos agricultores la presencia estatal significa un vehículo de aumento de su capital humano, el cual se considera luego posibilitaría mejorar sus condiciones de vida. Estos productores no ven al Estado como una fuente de apoyo superficial ni temporal, sino que –al verlo como el actor con mayor influencia en el territorio– buscan fortalecer su vínculo con él. A partir de ello, esperan adquirir conocimientos técnicos y mercantiles que luego les permitirían aumentar su capital financiero, el cual observan como una forma directa para acceder a sus medios de vida.

Finalmente, el tercer grupo identificado es aquel conformado por productores cuyas oportunidades eran limitadas en la época del narcotráfico, y ahora también presentan menores posibilidades de beneficiarse de las iniciativas promovidas desde el Estado. A pesar de ser quienes mayor soporte necesitan, son también quienes cuentan con las menores condiciones para maximizar el potencial que este apoyo podría significarles; principalmente porque poseen parcelas de menor extensión y capacidad productiva –ya sea por la localización de estas o su previa explotación con el monocultivo de coca–. Esta falta de capital natural les ha dificultado tener éxito con el programa impulsado por DEVIDA, llevándolos a considerar un fracaso el haber intentado trasladarse a cultivos alternativos. La frustración de sus expectativas, así como la pérdida de su tiempo y dinero, ha creado un fuerte descontento en ellos, razón por la que señalan haber sido engañados por el Estado. Este, representado a través de los ingenieros agrícolas de DEVIDA, los habría llevado a invertir por tres años en una iniciativa que consideran nunca tendría éxito dadas sus condiciones. Por esa razón, parte de los agricultores ya entró en conflicto con estos actores, pidiéndoles que no regresen más a sus chacras y que los desvinculen del Desarrollo Alternativo.

Esta mala experiencia con los cultivos alternativos ha generado que este grupo desarrolle narrativas de deslegitimación a DEVIDA, institución en la cual desconfían profundamente. En algunos casos, este discurso es acompañado por uno que contrapone la situación actual –caracterizada como una en la que hay alta pobreza– con aquella vivida cuando se dedicaban al cultivo de coca. Así, señalan que, a pesar de su ilegalidad, la coca les permitió cubrir sus necesidades básicas y asegurar el acceso a educación superior de sus hijos, razón por la que su calidad de vida era mejor a la experimentada actualmente.

Este tipo de narrativas se encontraron de manera más recurrente en las entrevistas realizadas en Monzón capital, lo que muestra que, dentro del mismo valle, también hay diferencias importantes respecto a cómo se ha experimentado la implementación de las iniciativas estatales. Como se ha mencionado previamente, esta localidad tiene terrenos más ácidos y empinados, dado que su geografía es más accidentada que la de la cuenca baja del valle, donde se encuentra el centro poblado de Cachicoto. Asimismo, por ser la capital distrital, es en este espacio en el que la actividad política ha tomado un cuerpo más institucionalizado, en tanto allí se ubica la alcaldía del Monzón, por muchos años ocupada por dirigentes del gremio cocalero. Además de ser quienes sostienen los discursos más politizados, son estos los agricultores que también tienen mayores incentivos para apoyar las movilizaciones que se están generando contra esta institución, a la cual perciben como un ente que no provee alternativas viables a la población.

Sin embargo, parte de los entrevistados de este grupo considera que, a pesar de no haber tenido éxito en el traslado a cultivos lícitos, es a través de un mayor apoyo estatal que lograrán mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, en lugar de rechazar la presencia de instituciones en el valle, reclaman un mayor compromiso de su parte con la población. Estos productores opinan que el desarrollo del valle está en los cultivos alternativos, considerando que, si bien la coca generó oportunidades para sus familias, también tuvo consecuencias negativas para el valle.

Finalmente, es necesario reparar en los agricultores que mencionaron no estar afiliados al Desarrollo Alternativo. A partir de los datos del Censo

Nacional del 2017 y el padrón actualizado de participantes de DEVIDA, en agosto del 2018 solo el 15% de la población de los caseríos firmantes del valle se había inscrito a los programas de la institución. Debido a que no todos los caseríos del valle han aceptado el ingreso de DEVIDA, si es que se hiciera el cálculo para el total del Monzón, la proporción de beneficiarios sería aún menor. En ese sentido, la mayoría de la población no se encuentra vinculada directamente con DEVIDA, y a partir de los testimonios de los entrevistados es posible conocer algunas de las razones por las que esto ocurre.

Por un lado, se encontraron pobladores que, por considerar que los cultivos alternativos no son rentables, decidieron mantenerse al margen de esta iniciativa estatal. Es el caso de quienes, por su capital humano, pueden sostenerse con los ingresos de sus ocupaciones profesionales, así como de quienes llevan a cabo prácticas económicas diversificadas que les permiten mantener sus condiciones de vida. Asimismo, se encuentran en este grupo las personas que prefieren dedicarse al cultivo de coca para ENACO, el cual sería más apto para su tierra que el café o cacao.

Por otro lado, existen quienes no están vinculados a DEVIDA por no tener la capacidad de responder a los compromisos que ello implica, ya sea porque así lo consideran de antemano o porque, habiéndolo intentado, han decidido retirarse del programa. Al respecto, los testimonios muestran que son las adultas mayores –más aún cuando no cuentan con familiares que puedan ayudarlos activamente– quienes mayores dificultades presentan para hacerse cargo de cultivos alternativos, en tanto estos implican un trabajo físico muy demandante. Por otro lado están quienes, por recurrir a empleos temporales en empresas privadas, no se dedican a sus chacras de manera continua ni asisten a las capacitaciones que DEVIDA impulsa para ellos.

Yo soy campesino y yo he estado con DEVIDA, ¿ya? Y de ahí me he retirado por motivos que no he podido ir a las reuniones, a las ECAs [Escuelas de Campo] que ellos te presionaban. Ahora y yo, y yo, y yo tengo que mi familia, tengo que ver para darle pan del día, no voy a estar todo... el de cacao es de largo plazo, por no asistir a su ECA, que me sacaron del proyecto.

(Agricultor, adulto, Cachicoto)

En ese sentido, es importante superar las nociones que caracterizan a los agricultores que no se vinculan con DEVIDA como personas que apuestan por la resiembra de coca ilícita o buscan una “salida fácil” evitando el café o cacao por implicar mayor carga laboral. Es necesario que se ahonde respecto a cuáles son las razones por las que la mayoría de agricultores ha decidido no vincularse a los programas de Desarrollo Alternativo, de manera que se revisen las barreras institucionales que podrían estar profundizando la exclusión de estos grupos.

En ese sentido, es urgente que la Estrategia de Lucha contra las Drogas, dentro de la que se enmarcan las iniciativas descritas previamente, parta de un enfoque territorial que reconozca las particularidades del medio físico-social que busca intervenir. La denominación de un territorio como “valle del Monzón”, no implica que este sea un ente integrado ni homogéneo, cuyos habitantes puedan responder de igual manera a los programas estatales.

Tal como lo señala Scott (1998), se reconoce que la homogeneización en el accionar estatal responde a su búsqueda por hacer “legible” el territorio y así poder intervenirlo, dado que no necesariamente cuenta con la capacidad para atender las características de cada localidad o familia de manera diferenciada. Esto, sin embargo, no puede excusar el diseño de políticas que, reconociendo los impactos negativos que tienen en el acceso a medios de vida, no respondan a las necesidades ni capacidades de gran parte de la población sobre la que actúan. Dentro de las instituciones que ejecutan estos programas se conocen los efectos que tiene la erradicación en los agricultores de los valles cocaleros, así como las dificultades que estos tienen en el traslado a cultivos alternativos. A pesar de ello, la priorización de metas operativas eclipsa la necesidad de medir los resultados de estas iniciativas en la mejora de las condiciones de vida de los y las agentes rurales. Esto, además, se relaciona con la falta de participación que tiene la población en el proceso de diseño e implementación de estas iniciativas, lo cual ha sido justificado en el pasado aludiendo a la participación de los agricultores en la economía de la coca ilegal. En ese sentido, resulta urgente territorializar la política de lucha contra las drogas de la mano de los y las agricultoras de las cuencas del país, a través de

un enfoque participativo que recoja las potencialidades geográficas, sociales y económicas de cada espacio.

5.2. Capitales y estrategias de vida

Por otro lado, es necesario hacer ciertas precisiones respecto al rol que tienen los diferentes capitales en este contexto. Son el capital financiero y el natural los que, en el escenario actual, se muestran como aquellos de los que depende en mayor medida qué estrategias de vida los productores decidirán emplear. Esto porque, en términos agrícolas, son estos los que influyen más en el éxito o fracaso de la producción de nuevos cultivos. En un nivel medio se encuentra el capital humano, el cual expande las posibilidades mediante las cuales los individuos pueden obtener sus medios de vida, como es el caso de quienes tienen experiencia con la mercantilización de cultivos lícitos y quienes cuentan con credenciales que les permiten conseguir empleos no agrícolas.

Por otro lado, el capital social parece ser poco valorado por los agricultores, quienes no suelen priorizar la organización comunal como estrategia de vida. A pesar de que a nivel discursivo manifiesten que existen grandes beneficios en asociarse, la población, que por muchos años ha llevado a cabo su actividad económica de manera atomizada, sigue optando por producir y comercializar sus productos individualmente. Esto se ve motivado, principalmente, por las urgencias económicas que los productores enfrentan en la actualidad, lo cual les dificulta entregar su producción a una cooperativa que no tiene la capacidad de pagarles de manera inmediata, minando las posibilidades de que esta pueda consolidarse.

En la misma línea, el capital social no es muy utilizado a nivel de actividad agrícola dentro del valle, ya que los agricultores suelen trabajar de manera individual sus parcelas, contratando a terceros bajo la figura de peones cuando requieren apoyo —y pueden pagarlo—. Solo en un caso se registró el uso de una estrategia de trabajo colectivo, en la cual los agricultores se agrupaban para trabajar las parcelas de todos los participantes de manera rotativa. Más allá de ese testimonio, los demás agricultores manifestaban la

alta carga laboral que para ellos significan los cultivos alternativos, los cuales requieren mucho más tiempo que el que invertían previamente.

Sin embargo, un aspecto en el que el capital social ha tenido alta relevancia ha sido en la migración –ya sea de manera permanente o temporal– y traslado a actividades no agrícolas de los pobladores del valle. Gran parte de los agricultores que mencionan haber migrado del valle luego de la erradicación, señalan que lo hicieron por contar con un familiar o conocido que pudiera recibirlos y/o guiarlos en el lugar de destino. Así, se encuentra que la obtención de un trabajo no agrícola fue posible para muchos agricultores justamente por contar con una conexión que les ofreciera acceso a puestos no calificados, permitiéndoles así diversificar sus medios de vida.

Finalmente, el capital físico –entendido como infraestructura, medios de producción y tecnología– en el valle es sumamente limitado, ya que las condiciones geográficas dificultan el trabajo de la tierra a través de medios no manuales. Sin embargo, y en relación al capital social tratado anteriormente, el acceso a tecnología para la transformación de los productos alternativos se da mediante instancias colectivas, ya que suelen ser las cooperativas las que cuentan con el capital físico presente en el Monzón. Debido a que las agencias de cooperación internacional y DEVIDA promueven la asociatividad, las instituciones han brindado a las organizaciones comunales algunos medios para agregar valor a los cultivos de la población, motivándola a aumentar su participación en estas instancias. Así, cuando la población busca despulpar su cacao o moler su café, debe acudir a una cooperativa agrícola, ya que es esta la que posee el capital físico que permite tal transformación. Sin embargo, este servicio se sigue dando a través de una transacción monetaria individualizada, en tanto el productor –sea o no socio– paga por cada uso de la maquinaria.

Al respecto, es necesario problematizar el rol que está cumpliendo –y que antes cumplía– el capital financiero en el valle del Monzón. Han sido ya discutidas las diferencias que existen entre el cultivo de coca y los cultivos alternativos, pero en muchos casos esta brecha de rentabilidad ha sido desestimada a partir del carácter ilícito de la coca. Si bien es cierto que ningún cultivo lícito será nunca igual de rentable que la hoja, es necesario que se

reflexione respecto a cuáles son los gastos en los que la población ha dejado de incurrir a partir de la erradicación.

La disminución que genera la erradicación de coca en el acceso a educación por parte de escolares ya ha sido documentada por Dammert (2008). Sin embargo, poco se sabe sobre el efecto que tiene esta intervención en el acceso a educación superior de los jóvenes de zonas cocaleras. En el valle del Monzón, existe una preocupación generalizada respecto a que, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, ya no es posible asegurar la profesionalización de los hijos a partir de la actividad productiva. Esta sensación no está solo presente a nivel de percepción, en tanto varios de los agricultores señalaron haber tenido que interrumpir los estudios de sus hijos por falta de dinero, así como ya no poder cubrir la educación de hijos menores que acabaron, o acabarán, su secundaria después de la erradicación.

A diferencia de lo podría pensarse, la dedicación a una actividad ilícita no ha significado en los cocaleros la construcción generalizada de ideales transgresores. Si bien no puede negarse el involucramiento de algunos agricultores en las etapas posteriores de la cadena de producción de cocaína, gran parte de los cocaleros se dedicaba al cultivo de coca como una vía para satisfacer sus necesidades básicas y aumentar las posibilidades de sus sucesores de acceder a la movilidad social mediante vías lícitas. Así, el afán de lucro y ascenso en una carrera delictiva no parece haber sido la motivación de los entrevistados para dedicarse al cultivo de coca, lo cual se comprende también al observar que la previa dedicación a esta actividad se justifica aludiendo a los fines –socialmente legítimos– que ella perseguía.

De esta manera, ha sido la universidad la institución a la que más han aspirado las familias cocaleras, siendo que en la actualidad esta posibilidad solo se mantiene viable dentro de los grupos más privilegiados. En ese sentido, es necesario que se adopte una posición estatal en torno a qué acciones han de tomarse para que no se amplíen las brechas de desigualdad entre agricultores, reconociendo que el acceso a educación cumple un rol sumamente importante en la estratificación de los grupos sociales.

Por otro lado, es relevante reparar en las consecuencias diferenciadas de la intervención en los hombres y mujeres del valle, reconociendo la existencia histórica de brechas de género en el acceso a capitales. Si bien se requiere una investigación especializada en esta problemática, es posible reconocer desde ya la presencia de vulnerabilidades en las mujeres, principalmente las adultas mayores. Durante el trabajo de campo se reconocieron las dificultades de este grupo para realizar el trabajo físico agrícola, más aún cuando no cuentan con redes sociales de apoyo. Asimismo, se registró que, cuando un productor requiere contratar peones, suele recurrir a hombres por considerar que serán más productivos que las mujeres, a quienes se observa como personas de menor fuerza física²¹.

A partir de esto, resulta importante discutir la incorporación de un nuevo tipo de capital al marco teórico de estrategias de vida, principalmente en un contexto agrícola en el que el trabajo está sumamente ligado al potencial físico de las personas. En ese sentido, incluir el capital corpóreo permite reconocer que los grupos sociales tienen capacidades físicas diferenciadas –ya sea por género²², edad, estado de salud, entre otros– que amplía o limita sus estrategias de vida. Así, será posible prestar mayor atención a las vulnerabilidades propias de esos contextos, en los que, además del capital humano, es necesario el trabajo del cuerpo²³.

En definitiva, es necesario continuar la indagación respecto a cómo se ha relacionado el proceso de implementación de políticas públicas en el valle y las estrategias de vida desplegadas, no solo a nivel individual y familiar sino también comunal. Al respecto, cabe preguntarse si las iniciativas estatales

²¹ Sin embargo, se señaló que esta creencia está perdiendo vigencia, en tanto cada vez son más las mujeres contratadas como jornaleras. Esto no necesariamente implica una menor vinculación de ellas con tareas domésticas, sino más bien una sobrecarga laboral que conlleva el desempeño de ambos trabajos en paralelo. Es así que, durante el trabajo de campo, se observaron mujeres acompañadas por sus hijos en la cosecha del cacao –los mayores apoyándolas directamente y los menores cargados en su espalda mientras laboraban–.

²² Señalar que el género tiene relación con la fuerza física no significa plantear que todas las mujeres –por ser mujeres– tienen un menor capital corpóreo que los hombres; de la misma manera que no se asume que toda persona joven –solo por ser joven– tendrá mayor capital corpóreo que un adulto mayor.

²³ Reconocer esto implica también prestar mayor atención a las consecuencias que tienen las desigualdades a nivel de cuerpo y salud, así como las barreras que puede implicar tener una discapacidad física, por ejemplo, en un espacio rural.

tienen como uno de sus objetivos el fomento de un desarrollo territorial inclusivo, en el que no se amplíen las brechas previamente existentes. En un contexto post-erradicación, en el que se promueve un mayor acceso a servicios e instituciones estatales, es necesario trabajar directamente por la reducción de la desigualdad territorial, ya que existen muchos factores que, de no ser abordados, llevarán a su profundización. Es a partir de ese esfuerzo, participativo, multinivel e intersectorial, que será posible asegurar que las políticas aplicadas en el valle sean una herramienta para los y las agentes rurales en el alcance de medios de vida sostenibles.

En conclusión, comprender cómo la implementación de iniciativas estatales ha influido en la configuración de las estrategias de vida de los agricultores cocaleros del Monzón, ha permitido reafirmar la importancia de reconocer la heterogeneidad de los contextos rurales en las intervenciones que cualquier actor institucional genera sobre un territorio. Por más compleja que sea la situación política en una zona, la participación de la población que se verá afectada es vital para asegurar que la presencia estatal amplificará las oportunidades de vida de los actores, y no las brechas existentes entre ellos.

La única forma de reconocer la complejidad de los espacios rurales es asegurar la inclusión de sus actores en los procesos de transformación que atañen estos territorios. Esto no será posible si las intervenciones son encargadas a instituciones estatales de manera aislada, en tanto estos procesos requieren una articulación multisectorial que atienda las necesidades que, históricamente, los agricultores han debido satisfacer al margen del Estado. Es una responsabilidad generar políticas informadas que en ningún caso aumenten las vulnerabilidades a las que están expuestos los ciudadanos. Esto solo se logrará en la medida en que se comprenda que estos, muy lejos de ser receptores pasivos y homogéneos, son actores cuyas decisiones determinarán en última instancia qué estrategias desplegar. Es, en ese sentido, una obligación investigar sobre estas últimas, de manera que las futuras intervenciones, en lugar de construirse a partir de objetivos e indicadores políticos, tengan como medio y como fin el que las personas sean el motor de su propio desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones

A partir del análisis hecho en los capítulos anteriores, resulta relevante plantear algunas conclusiones y recomendaciones.

1. La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, cuyo fin último es la reducción del narcotráfico, no se centra en las personas a las que se dirige, sino en el logro de las metas operativas de cada una de sus fases. Por ello, desatiende la razón por la cual los agricultores cultivan coca y plantea soluciones que, en la mayoría de casos, potencian la vulnerabilidad de los actores focalizados. Asimismo, la política parte de una lógica vertical que no diseña, consulta ni implementa la estrategia de la mano de los agricultores cocaleros, por lo que no siempre responde a sus intereses, dinámicas ni posibilidades. Por esa razón, es necesario que la estrategia adopte un enfoque participativo en todas sus fases, reconociendo y potenciando las capacidades de la población. En ese sentido, el modelo de desarrollo impulsado por el Estado ha de construirse con las familias del valle, y debe ser ese desarrollo lo que genere, como consecuencia, la reducción de los cultivos ilícitos de coca, y no al revés. A pesar de la ilegalidad que implica vender hoja de coca al narcotráfico, es necesario que el Estado reconozca las razones que llevan a los agricultores a dedicarse a esta actividad. En los casos de los pobladores que solo participaban en el TID mediante el cultivo de coca, su motivación principal ha sido la satisfacción de necesidades básicas y la búsqueda por lograr la movilidad social de sus hijos, no la vinculación a una dinámica criminal. Para abordar las causas estructurales que motivan el sembrío de coca, la Estrategia Nacional debe diseñarse no solo *considerando* sino *partiendo* del contexto socioeconómico que se vive en estos valles cocaleros. Así, el Estado dejará de atacar frontalmente a las comunidades que encuentran en el cultivo un medio para sustentarse y, expandiendo sus libertades y opciones, fomentará que sean ellas mismas quienes no requieran dedicarse a tal actividad.

2. El accionar estatal en el valle ha sido desarticulado entre las etapas de interdicción, erradicación y Poserradicación. En la actualidad, esa desarticulación se vive entre sectores, los cuales no trabajan en conjunto con

DEVIDA para atender las urgencias que la erradicación de la coca ha generado en el Monzón. Así, la población canaliza a través de esta institución todas las demandas que tienen hacia un Estado históricamente ausente en su territorio, sobrepasando las capacidades que esta tiene y aumentando el malestar de la población frente a ella. En ese sentido, es una prioridad que la función de coordinación que tiene DEVIDA sea reconocida por los demás ministerios, de manera que respondan a su llamado para trabajar en las cuencas cocaleras del país. Si la lucha contra las drogas es una prioridad nacional, entonces también debe serlo la reducción de la pobreza y desigualdad en la población cocalera, lo cual requiere un compromiso multisectorial permanente.

3. Una de las prácticas adoptadas por gran parte de la población del Monzón cuando se dio la erradicación fue el éxodo, ya sea de manera permanente como transitoria. Aunque usualmente se señale que fueron los agricultores foráneos los principales migrantes, parte de ellos se mantuvo en el Monzón después de la intervención del CORAH. A partir de las entrevistas se conoce que una edad avanzada, así como un reducido capital financiero y social, son razones para que un individuo o familia descarte esta estrategia de vida. Los principales destinos de migración registrados fueron otras cuencas cocaleras y ciudades intermedias. En el caso de las primeras, las razones por las que la migración –aún cuando se planificaba como permanente– se volvió transitoria, fue la llegada de la erradicación a la zona. En el caso de las ciudades, fue la dificultad de adaptación de los productores a la vida urbana.

4. A partir de la implementación de iniciativas estatales, los productores del valle han modificado sus actividades económicas y jornada laboral de manera sustancial, aunque de manera diferenciada.

- a.** Por un lado, existe un grupo de agricultores que, contando con un capital financiero y natural suficiente, han tenido éxito en el traslado a cultivos alternativos. Este grupo es quien presenta discursos de mayor legitimación hacia DEVIDA, en tanto se observa como una institución que amplía las oportunidades de la población del valle.
- b.** Por otro lado, están quienes, a pesar de haber intentado transitar a cultivos alternativos, no han tenido éxito en ellos por su reducido capital

natural y financiero. El fracaso de su inversión en tiempo y dinero ha llevado a que este grupo desarrolle narrativas de deslegitimación al trabajo de DEVIDA, con quien ya no se encuentran vinculados. En ese sentido, la agricultura ya no es su principal ocupación económica, sino que acceden a sus medios de vida mediante la migración de uno de sus miembros, el cultivo para autoconsumo, y/o realizando trabajos de servicio para otros pobladores del valle.

- c.** Existe otro grupo de agricultores que, por tener un mayor capital natural y financiero, presenta mejores resultados en el traslado a cultivos alternativos. Sin embargo, por estar en los primeros años de cultivo y a causa de la proliferación de enfermedades agrícolas, complementan sus ingresos con actividades como la venta de animales y el trabajo en el sector servicios.
- d.** Finalmente, están quienes no se encuentran vinculados al programa de Desarrollo Alternativo. Es el caso de quienes cuentan con un capital humano y financiero que les permite generar ingresos de manera autónoma. Sin embargo, también lo es de quienes no logran cumplir los compromisos que demanda el programa, ya sea porque les surgen oportunidades de trabajo que dificultan el cuidado de sus parcelas, o porque físicamente no pueden hacerse cargo del trabajo que implica el cultivo de café y/o cacao. En esta situación se encuentran los adultos mayores o mujeres solteras que no cuentan con capital financiero ni social que les provea apoyo en el trabajo de sus chacras.

5. La intervención estatal ha generado nuevas vulnerabilidades en un territorio previamente marcado por altos niveles de pobreza y precariedad.

- a.** Esto lo ha hecho, por un lado, llevando a agricultores a invertir tiempo y dinero en parcelas no aptas para el cultivo de productos alternativos y, por otro, penando la resiembra para aquellos que se involucran en el Desarrollo Alternativo. Al respecto, se sugiere: (1) ampliar los cultivos alternativos ofrecidos, de manera que la elección de qué productos cultivar sea realizada en conjunto con los productores, considerando las posibilidades productivas de sus parcelas; (2) eliminar la penalidad por

resiembr a la que se someten los agricultores al vincularse con el Desarrollo Alternativo.

- b.** Por otra parte, al disminuir el capital financiero de las familias, se han reducido las posibilidades de movilidad social de los jóvenes del valle a través de la educación superior. Al respecto, se propone trabajar en coordinación con PRONABEC, de manera que –mientras la situación económica del valle se regule– los jóvenes del valle interesados en perseguir una carrera académica cuenten con información sobre los programas de becas disponibles.

6. La implementación de iniciativas estatales en el Monzón ha tenido efectos diferenciados en las estrategias de vida adoptadas por los agricultores, las cuales han variado según los capitales a los que estos productores tenían acceso. Dentro de estos capitales, el financiero y el natural son los que mayor relevancia directa han tenido en la configuración de las estrategias de vida, mientras que la importancia del humano y social ha sido más indirecta.

- a.** Los agricultores que se encontraban mejor posicionados en la época de la coca son los que han sufrido un menor impacto negativo de la erradicación y han logrado absorber más los beneficios del programa de Desarrollo Alternativo. El capital financiero al que les dio acceso la producción de coca ilícita les permitió contar con bienes o activos que ampliaron su margen de respuesta frente a la erradicación, posibilitando que mantengan una posición de ventaja en ambos escenarios –durante y después de la coca–.
- b.** Por otro lado, los agricultores que no tenían coca en el momento de la erradicación son quienes mayores posibilidades han tenido de vincularse exitosamente con DEVIDA, en tanto contaban con un capital natural y humano que les daba ventaja sobre quienes se dedicaban al monocultivo. Por ello, este grupo actualmente se encuentra sumamente vinculado con la institución, ya sea como contratados o a través de cargos en la cooperativa.
- c.** Finalmente, quienes en la época del narcotráfico ya contaban con un bajo acceso a capitales son quienes más afectados se han visto por el

programa de erradicación. A la vez, son quienes, a pesar de requerir con mayor urgencia del apoyo de DEVIDA, cuentan con menores condiciones para maximizar el potencial que esta ayuda podría significarles.

En ese sentido, resulta urgente que las intervenciones estatales en materia de lucha contra las drogas sean sensibles a la heterogeneidad del territorio, ya que no hacerlo puede terminar ampliando las brechas sociales y vulnerabilidades ya existentes.

7. Es necesario reforzar los componentes de gestión comunal y asociatividad del plan Poserradicación, en tanto estos tienen la potencialidad de mejorar, a nivel colectivo, las condiciones de vida del valle. Esto podría lograrse prestándole mayor atención al capital físico que requiere la población para agregarle valor a los productos que genera. Así, se sugiere promover el acceso de las cooperativas a maquinaria y tecnología, de manera que los socios puedan beneficiarse de ellas y tengan incentivos para interesarse por el fortalecimiento de la organización. De la misma manera, apoyarla en el acceso a medios de transporte y a canales de comercialización directa reducirá la presencia de intermediarios, aumentando su rentabilidad productiva.

Considerando la complejidad del caso estudiado, esta investigación no busca generar afirmaciones universales ni mucho menos asegurar que lo esbozado aquí representa la realidad de todos los agricultores del valle. Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra, justamente, el que los testimonios solo hayan sido recogidos en dos centros poblados del valle, a pesar de su centralidad política y económica en el valle. Asimismo, las entrevistas fueron realizadas en las zonas más urbanas del Monzón. A pesar de que se conversó con personas cuyas parcelas y viviendas estaban alejadas de las vías principales, no puede aseverarse que se cuenta con mucha información respecto a la situación de estos grupos sociales. A partir de diversos testimonios se conoce que son quienes viven en sus chacras, las cuales en muchos casos se encuentran a una hora a pie desde los centros poblados, quienes más necesidades tienen y menor apoyo reciben.

En esa línea, se considera necesaria la elaboración de un estudio de metodología mixta que, a través de la aplicación de encuestas, no solo permita ampliar el ámbito de estudio sino que también posibilite afinar la relación existente entre los capitales de la población y las estrategias que adoptan. Esto generaría más pistas sobre cómo intervenciones políticas en contextos de alta conflictividad tienen efectos diferenciados en la población que se interviene. A partir de ello, será posible aportar mayores herramientas a las instituciones encargadas de diseñar y ejecutar este tipo de políticas. Esto, sin embargo, requiere además de un compromiso multisectorial que, más allá del logro de metas cuantificables, tenga la voluntad política –y humana– de fortalecer procesos de desarrollo desde y para los actores rurales del país.



Bibliografía

Ashley, C. & LaFranchi, C. (1997). *Livelihood Strategies of Rural Households in Caprivi: Implications for Conservancies and Natural Resource Management*. Windhoek: Directorate of Environmental Affairs, Ministry of Environment and Tourism. Recuperado de:
<http://www.the-eis.com/data/RDPs/RDP20.pdf>

Babbie, E. (2010). *The Practice of Social Research*. Belmont: Wadsworth CENGAGE Learning.

Bebbington, A. (1999). Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty. *World Development*. 27(12), 2021-2044. Recuperado de:
http://www.myduquesne.duq.edu/s/831/images/editor_documents/Social%20Thought/Capitals%20and%20Capabilities.pdf?cc=1&sessionid=80693e12-c759-4c98-81ef-e5f966604c4f

Cabieses, H. (2000a). Balance de la situación regional: preguntas y propuestas sobre desarrollo alternativo. En SEPIA, *El problema agrario en debate* (Vol. 8). Lima: SEPIA. Recuperado de:
http://sepia.org.pe/facipub/upload/cont/880/cont/file/20080903030806_Hugo_Cabieses__BALANCE_DE_LA_SITUACION_REGIONAL.pdf

Cabieses, H. (2000b). Desarrollo alternativo en el Perú: debates, tipologías y reconsideraciones. En CEPES, *Debate agrario: análisis y alternativas* (Vol. 32). Lima: CEPES. Recuperado de:
<http://www.cepes.org.pe/debate/debate32/04-articulo-da32.pdf>

Cabieses, H. (2007). Coca compleja, drogas y cocaleros en los Andes. Hablan los diablos. En B. Cáceres, H. Cabieses, A. Durand. R. Soberón, R. Rumrill, *Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú. Versión recargada*. Lima: Programa Democracia y Transformación Global. Recuperado de:
<http://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/Hablan-los-diablos-1.pdf>

Cabieses, H. (2010). El 'milagro de San Martín' y los síndromes del 'desarrollo alternativo' en el Perú. En Transnational Institute, *Informe sobre políticas contra drogas* (34). Recuperado de:
<https://www.tni.org/files/download/brief34s.pdf>

Casas, F. (2015). Determinantes de la capacidad estatal como componente para el alcance estatal en territorios inseguros: El caso de la política antidroga implementada en Monzón. En *VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP)*. Congreso llevado a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Recuperado de:
<http://files.pucp.edu.pe/sistema-ponencias/wp-content/uploads/2014/12/Frank-Casas-ALACIP.pdf>

Casas, F. & Ramírez, M. (2017). Actores y escenarios como determinantes clave de la política de drogas en Perú: El caso de la implementación del control de hoja de coca en el valle del Monzón (2010-2015). *Revista de Ciencia Política y Gobierno*. Lima, año 4(7), 33-58.

Chambers, R. & Conway, G. R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*. [material para el Institute of Development Studies]. Brighton: IDS. Recuperado de:
<https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/775/Dp296.pdf?sequence=1>

Chiriboga, M. (2010). Dinámicas Territoriales Rurales en América Latina. En EUTOPIA. *Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (1), 51-68. Recuperado de:
<http://revistas.flacsoandes.edu.ec/index.php/eutopia/article/viewFile/934/889>

Cliche, G., Ranaboldo, C. & Serrano, C. (2015). *Enfoque territorial para el empoderamiento de la mujer rural en América Latina y el Caribe*. Lima: IEP. Recuperado de:
http://rimisp.org/wp-content/files_mf/1464971135LibroALCdigital2016.pdf

Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). El PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto Huallaga. En CVR, *Informe final*. (277-308). Lima: CVR. Recuperado de:
[http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20V/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20violencia%20\(continuacion\)/2.%20HISTORIAS%20REPRESENTATIVAS%20DE%20LA%20VIOLENCIA/2.9%20PCP-SL%20EN%20EL%20ALTO%20HUALLAGA.pdf](http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20V/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20violencia%20(continuacion)/2.%20HISTORIAS%20REPRESENTATIVAS%20DE%20LA%20VIOLENCIA/2.9%20PCP-SL%20EN%20EL%20ALTO%20HUALLAGA.pdf)

Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga. *Informe final*. (381-416). Lima: CVR. Recuperado de:
[http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20V/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20violencia%20\(continuacion\)/2.%20HISTORIAS%20REPRESENTATIVAS%20DE%20LA%20VIOLENCIA/2.12%20LA%20ESTRATEGIA%20%20DE%20PACIFICACION.pdf](http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20V/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20violencia%20(continuacion)/2.%20HISTORIAS%20REPRESENTATIVAS%20DE%20LA%20VIOLENCIA/2.12%20LA%20ESTRATEGIA%20%20DE%20PACIFICACION.pdf)

Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción. *Informe final*. (739-773). Lima: CVR. Recuperado de:
[http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20V/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20violencia%20\(continuacion\)/2.%20HISTORIAS%20REPRESENTATIVAS%20DE%20LA%20VIOLENCIA/2.23.%20NARCOTRAFICO.pdf](http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20V/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20violencia%20(continuacion)/2.%20HISTORIAS%20REPRESENTATIVAS%20DE%20LA%20VIOLENCIA/2.23.%20NARCOTRAFICO.pdf)

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2003). *Realidad socio-económica de la población en las zonas de intervención del PDA*. Lima: DEVIDA.

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2012). *Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012-2016*. Lima: DEVIDA. Recuperado de:
http://www.devida.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/ENLCD-Español_20_junio_-español.pdf

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2013). *Diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca baja del Valle del río Monzón* [diapositivas]. Recuperado de:
<https://es.scribd.com/document/361847377/Diagnostico-Cuenca-Baja-Valle-Monzon-2013>

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2014a). *Diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca baja del Valle del río Cultivo del cacao. Costos en las etapas de instalación, crecimiento y producción – flujo de caja* [manual].

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2014b). *Cultivo del café. Costos en las etapas de instalación, crecimiento y producción – flujo de caja* [manual]. Lima.

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2015). *Recuperando el Monzón*. Lima: Observatorio Peruano de Drogas. Recuperado de:
<https://www.devida.gob.pe/documents/20182/96750/MONZON-LIBRO.pdf/48402eed-0e54-471a-a536-c50a20eca68e>

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2017). *Lineamientos u orientaciones técnicas, para la implementación de la actividad: "Atención a la Población Pre y Post Erradicación"* [informe]. Recuperado de:
<http://www.devida.gob.pe/documents/20182/25076/Actividad-pre-post-erradicaci%C3%B3n-PIRDAIS.pdf>

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (3 de diciembre de 2018) Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas DEVIDA: Quiénes somos. Recuperado de:
<https://www.devida.gob.pe/web/guest/quienes-somos>

Dammert, A. (2008). Child labor and schooling response to changes in coca production in rural Peru. *Journal of Development Economics*, 86, 164-180.

Damonte, G. (2011). *Construyendo territorios: narrativas territoriales aymaras contemporáneas*. Lima: GRADE, CLACSO. Recuperado de:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/grade/20120208015759/ConstruyendoTerritorios.pdf>

Del Pozo, C. (2016). Brechas de género en el valor económico de las unidades agropecuarias en el Perú. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social. Recuperado de:
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/10_pb_n_a1_t11_informe_final_v5.pdf

Della Porta, D. & Keating, M. (2013). *Enfoques y metodologías de las Ciencias Sociales: una perspectiva pluralista*. Madrid: Akal.

Department for International Development (DFID). (1999). *Sustainable Livelihood Guidance Sheets* [material de guía]. Recuperado de:
<http://files.enonline.net/attachments/871/dfid-sustainable-livelihoods-guidance-sheet-section1.pdf>

Durand, A. (2005). El movimiento cocalero y su (in)existencia en el Perú. Itinerario de desencuentros en el río Apurímac. *Bulletin de l'institut français d'études andines*, 34(1), 103-126.

Durand, J. (2016). El que puede puede. Dinámicas informales e ilegales en los espacios rurales. En J. Durand, J. Urrutia & C. Yon (Eds.). *Perú: El problema agrario en debate* (Vol. 16). Lima: SEPIA. Recuperado de:
http://sepia.org.pe/facipub/upload/cont/1412/cont/files/1_PONENCIA%20DE%20BALANCE%20-%20Jose%20Francisco%20Durand.pdf

Eaton, K. (2012). The State of the State in Latin America: Challenges, Challengers, Responses and Deficit. *Revista de Ciencia política*, 32(3), 643 – 657.

El Comercio. (10 de diciembre de 2010). Dirigentes cocaleros detenidos en operación Eclipse 2010 aceptaron que se reunieron con 'Artemio'. *El Comercio*. Recuperado de:
https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/dirigentes-cocaleros-detenidos-operacion-eclipse-2010-aceptaron-que-se-reunieron-artemio-noticia-682057?ref=flujo_tags_219698&ft=nota_17&e=titulo

El Comercio. (29 de julio de 2012). Aparecen trapos rojos en el Huallaga. *El Comercio*. Recuperado de:
https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/aparecen-trapos-rojos-huallaga_1-noticia-1448286?ref=flujo_tags_219698&ft=nota_10&e=titulo

El Comercio. (28 de agosto de 2012). Mininter no confirma muertes por enfrentamiento en Huánuco. *El Comercio*. Recuperado de:
https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/mininter-no-confirma-muertes-enfrentamiento-huanuco-noticia-1461961?ref=flujo_tags_219698&ft=nota_9&e=titulo

El Comercio. (28 de agosto de 2012). PNP confirmó dos muertos en enfrentamiento con cocaleros en Huánuco. *El Comercio*. Recuperado de: https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/policia-nacional-confirmando-dos-muertos-enfrentamiento-cocaleros-huanuco-noticia-1462180?ref=flujo_tags_219698&ft=nota_8&e=titulo

Farrington, J., Carney, D., Ashley, C. & Turton, C. (1999). Sustainable Livelihoods in Practice: Early Applications of Concepts in Rural Areas. *Natural Resource Perspectives*, (42). Londres: Overseas Development Institute (ODI). Recuperado de: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2877.pdf>

Farthing, L. & Kohl, B. (2005). Conflicting Agendas: The Politics of Development Aid in Drug-Producing Areas. *Development Policy Review*, 23(2), 183-198.

Fernández, M. I. & Asensio, R. H. (2013). *¿Unidos podemos? Coaliciones territoriales y desarrollo rural en América Latina*. Lima: IEP, RIMISP. Recuperado de: http://rimisp.org/wp-content/files_mf/1393850884Coaliciones28.02.14.pdf

García-Yi, J. (2014a). Heterogeneous motivations for coca growing: The case of an indigenous Aymara community in Perú. *International Journal of Drug Policy*, (25), 1113-1123. Recuperado de: [http://www.ijdp.org/article/S0955-3959\(14\)00140-6/abstract](http://www.ijdp.org/article/S0955-3959(14)00140-6/abstract)

García-Yi, J. (2014b). Organic coffee certification in Peru as an alternative development-oriented drug control policy. *International Journal of Development Issues*, 13(1), 72-92. Recuperado de: <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJDI-11-2013-0077>

Gestión. (29 de agosto de 2012). Huánuco demanda al Ejecutivo que cumpla plan estratégico de desarrollo. *Gestión*. Recuperado de: <https://gestion.pe/peru/politica/huanuco-demanda-ejecutivo-cumpla-plan-estrategico-desarrollo-19265>

Glave, M. & Rosemberg, C. (2005). *La comercialización de hoja de coca en el Perú: Análisis del mercado formal*. Lima: GRADE.

Gootenberg, P. (2010). *La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la ciencia nacional peruana, 1884-1890*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Hernández Asencio, R. H. (2012). El giro territorial en las ciencias sociales peruanas. Balance de estudios sobre desarrollo, mundo rural y

territorio. En R.H. Asencio, F. Eguren & M. Ruiz (Eds.). *Perú: El problema agrario en debate* (Vol. 14). Lima: SEPIA. Recuperado de:
http://sepia.org.pe/facipub/upload/cont/1207/cont/files/RAUL_HERNANDEZ_AS_CENCIO.pdf

Heuser, C. (2017). Después del auge. Campos de poder en el valle del Monzón. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, año 4(7), 109-136.

IDL-Reporteros. (28 de agosto de 2012). Graves enfrentamientos entre la Policía Nacional y coccaleros en el valle del Monzón. *IDL-Reporteros*. Recuperado de:
<https://idl-reporteros.pe/graves-enfrentamientos-entre-la-policia-nacional-y-coccaleros-en-el-valle-del-monzon/>

IDL-Reporteros. (15 de octubre de 2012). Ibúrcio Morales muere en prisión. *IDL-Reporteros*. Recuperado de:
<https://idl-reporteros.pe/iburcio-morales-muere-en-prision/>

IDL-Reporteros. (22 de octubre de 2012). Los muertos del Monzón. *IDL-Reporteros*. Recuperado de:
<http://idl-reporteros.pe/los-muertos-del-monzon/>

IDL-Reporteros. (2 de febrero de 2013). "Ahorita nos erradican, mañana ¿qué comemos?". *IDL-Reporteros*. Recuperado de:
<https://idl-reporteros.pe/%E2%80%9Cahorita-nos-erradican-manana-%C2%BFque-comemos%E2%80%9D/>

Info región. (29 de setiembre de 2011). Hallan prendas del Ejército en laboratorios de drogas. *Info región*. Recuperado de:
<http://www.inforegion.pe/117908/hallan-prendas-del-ejercito-en-laboratorios-de-drogas/>

Info región. (7 de julio de 2013). Caravana del Desarrollo llegó a Cachicoto, en Monzón. *Info región*. Recuperado de:
<http://www.inforegion.pe/172989/cada-implementa-programas-de-responsabilidad-local/>

Info región. (2 de diciembre de 2013). CADA implementa programas de responsabilidad local. *Info región*. Recuperado de:
<http://www.inforegion.pe/162340/caravana-del-desarrollo-llego-a-cachicoto-en-monzon/>

Info región. (8 de diciembre de 2015). Presidente Humala inauguró planta para tratamiento de cacao en Huánuco. *Info región*. Recuperado de:
<http://www.inforegion.pe/214689/presidente-humala-inauguro-planta-para-tratamiento-de-cacao-en-huanuco/>

Inforegión. (28 de febrero de 2018). Alcaldes del Monzón no se plegarán a paro macroregional. *Inforegión*. Recuperado de: <http://www.inforegion.pe/249225/alcaldes-del-monzon-no-se-plegaran-a-paro-macroregional/>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2007). *Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda*. Lima: INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2012). *IV Censo Nacional Agropecuario*. Lima: INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2015). *Perfil del productor agropecuario del valle del Alto Huallaga*. Lima: INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas*. Lima: INEI.

La República. (23 de febrero de 2003). Cocaleros de los ríos Apurímac y Huallaga en pie de guerra. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/politica/356721-cocaleros-de-los-rios-apurimac-y-huallaga-en-pie-de-guerra>

La República. (2 de marzo de 2003). Cocaleros deciden hoy si reanudan huelga. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/politica/358860-cocaleros-deciden-hoy-si-reanudan-huelga>

La República. (20 de abril de 2003). Diez mil cocaleros marchan hoy hacia el Centro Histórico. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/politica/355568-diez-mil-cocaleros-marchan-hoy-hacia-el-centro-historico>

La República. (8 de noviembre de 2003). Pretenden desprestigiar operativo en Valle del Monzón. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/politica/349074-pretenden-desprestigiar-operativo-en-valle-del-monzon>

La República. (25 de enero de 2004). Presidenta de región Huánuco rechaza erradicación y apoya a los cocaleros. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/politica/354426-presidenta-de-region-huanuco-rechaza-erradicacion-y-apoya-a-los-cocaleros>

La República. (17 de febrero de 2004). Nadie puede erradicar sembríos de hoja de coca en el valle del Monzón. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/politica/365765-nadie-puede-erradicar-sembrios-de-hoja-de-coca-en-el-valle-del-monzon>

La República. (17 de febrero de 2004). La Policía identifica nombres de dirigentes cocaleros en teléfonos satelitales de 'Artemio'. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/politica/611409-la-policia-identifica-nombres-de-dirigentes-cocaleros-en-telefonos-satelitales-de-artemio>

La República. (18 de febrero de 2004). Cocaleros del Monzón niegan haber recibido ayuda de Naciones Unidas. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/politica/365897-cocaleros-del-monzon-niegan-haber-recibido-ayuda-de-naciones-unidas>

La República. (19 de febrero de 2004). Se expanden los cicales y aumenta el precio de la PBC en el Monzón. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/politica/351804-se-expanden-los-cicales-y-aumenta-el-precio-de-la-pbc-en-el-monzon>

La República. (22 de mayo de 2005). El repunte de la coca en el Monzón. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/politica/299196-el-repunte-de-la-coca-en-el-monzon>

La República. (23 de febrero de 2005). Presuntos senderistas en Aucayacu. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/politica/299292-presuntos-senderistas-en-aucayacu>

La República. (29 de julio de 2006). Asesinan a tres hombres y a una mujer en el valle del Monzón. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/sociedad/271429-asesinan-a-tres-hombres-y-a-una-mujer-en-el-valle-del-monzon>

La República. (26 de noviembre de 2010). Valle del Monzón marchará para rechazar detención de dirigentes. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/archivo/499055-valle-del-monzon-marchara-para-rechazar-detencion-de-dirigentes>

La República. (8 de marzo de 2011). Huánuco: Destruyen laboratorios de PBC. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/archivo/524860-huanuco-destruyen-laboratorios-de-pbc>

La República. (28 de agosto de 2012). Dos muertos en choque entre cocaleros y erradicadores. *La República*. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/politica/655910-dos-muertos-en-choque-entre-cocaleros-y-erradicadores>

La República. (30 de agosto de 2012). Monzón es el fortín de cultivos ilícitos de coca. *La República*. Recuperado de:

<https://larepublica.pe/politica/656184-monzon-es-el-fortin-de-cultivos-ilicitos-de-coca>

La República. (18 de febrero de 2013). Narcos pierden US\$ 6.7 millones con erradicación en el Monzón. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/politica/692902-narcos-pierden-us-67-millones-con-erradicacion-en-el-monzon>

La República. (18 de febrero de 2013). Se redujeron 1,300 hectáreas de coca en Valle del Monzón. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/archivo/693069-se-redujeron-1300-hectareas-de-coca-en-valle-del-monzon>

La República. (29 de julio de 2016). Asesinan a tres hombres y a una mujer en el valle del Monzón. *La República*. Recuperado de: <https://larepublica.pe/sociedad/271429-asesinan-a-tres-hombres-y-a-una-mujer-en-el-valle-del-monzon>

La Riva, D. & Castillo, D. (2019). Selección de cultivos: un análisis desde un enfoque de género al caso cusqueño. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social. Recuperado de: http://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/seleccion_de_cultivos_un_analisis_desde_un_enfoque_de_genero_al_caso_cusqueño_diana_la_riva_y_denisse_castillo_-_grade.pdf

López, N. & Tuesta, D. (2015). Economías ilícitas y orden social: la frontera de Perú, Brasil y Colombia. *CIDOB d'Afers Internacionals*, (111), 79-104. Recuperado de: https://www.cidob.org/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/111/economias_ilicitas_y_orden_social_la_frontera_de_peru_brasil_y_colombia

Manrique, H. (2015). Política de drogas y narcotráfico en el Perú: del triunfalismo peruano al laberinto de la cocaína. *Revista Cultura y Droga*. Caldas, 22, 64-85.

Manrique, H. (2016). *El fin de la guerra de la cocaína: construcción del Estado y desarrollo alternativo en la región San Martín (1978-2015)*. (Tesis de licenciatura). Recuperado de: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7280>

Manrique, H., Pastor, A., Mendoza, B., Sierra, J. & Villegas, R. (2015). Política de drogas: debates contemporáneos y situación actual en el Perú. *Revista La Colmena*, (8), 74-89.

Migdal, J. S. (2004). *State in Society. Studying how States and societies transform and constitute one another*. Washington D.C.: Cambridge University Press.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). (3 de diciembre de 2018). *InfoMIDIS*. Recuperado de:
<http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/>

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). (3 de diciembre de 2018). *REDInforma - Repositorio Digital de Información*. Recuperado de:
<http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/view/inicio.aspx>

Ministerio del Interior (MININTER). (2004). *Operación Fierro 2003. Relato visual del operativo antidrogas Fierro 2003 en el Valle del Monzón*. Lima: MININTER.

Morse, S., McNamara, N. & Acholo, M. (2013). *Sustainable Livelihood Approach: A critical analysis of theory and practice*. Dordrecht: Springer.

Panorama. (2003). *Sendero Luminoso y cocaleros en el Monzón* [videograbación]. Recuperado de:
<http://lum.cultura.pe/cdi/video/sendero-luminoso-y-cocaleros-en-el-valle-del-monz%C3%B3n>

Parra y Guerra, E. (2014). Desarrollo alternativo en el Perú: treinta años de aciertos y desaciertos. *Perspectivas Rurales: Nueva Época*, año 12(23), pp. 85-104. Recuperado de:
<http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/5599/5477>

O'Donnell, G. (1993). On the State, Development, and some Conceptual Problems: A Latin American View with Some Glances at some Post-Communist Countries. *World Development*, (21), 1355-1369.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2004). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2003* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2005). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2004* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2006). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2005* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2007). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2006* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2008). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2007* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2009).

Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2008 [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2010). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2009* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2011). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2010* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2012). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2011* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2013). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2012* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2014). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2013* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2014). *Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2013* [informe]. Lima. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Peru/Peru_Monitoreo_de_cultivos_de_coca_2013_web.pdf

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2015). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2014* [informe]. Lima.

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2015). *Perú: Monitoreo de Cultivos de COCA 2014* [informe]. Lima. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Informes/MonitoreoCoca/Informe_monitoreo_coca_2014_web.pdf

Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC). (2016). *Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú 2015* [informe]. Lima.

Perú 21. (29 de agosto de 2012). Huánuco demanda al Ejecutivo que cumpla plan estratégico de desarrollo. *Perú 21*. Recuperado de: <https://peru21.pe/lima/huanuco-demanda-ejecutivo-cumpla-plan-estrategico-desarrollo-43568>

Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 2-23.

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). (2002). *Monitoreo de Cultivos de Coca 2001* [informe]. Lima.

Radio Programas del Perú (RPP). (7 de setiembre de 2009). Sendero Luminoso mata a presunto extorsionador en Huánuco, según prensa. *RPP*. Recuperado de:

<http://rpp.pe/peru/actualidad/sendero-luminoso-mata-a-presunto-extorsionador-en-huanuco-segun-prensa-noticia-207000>

Radio Programas del Perú (RPP). (28 de agosto de 2012). Reportan muertos en operativo contra cultivos ilegales en Huánuco. *RPP*. Recuperado de: <http://rpp.pe/peru/actualidad/reportan-muertos-en-operativo-contra-cultivos-ilegales-en-huanuco-noticia-516228>

Radio Programas del Perú (RPP). (28 de agosto de 2012). Llevan heridos de enfrentamientos en el Monzón a Tingo María. *RPP*. Recuperado de: <http://rpp.pe/peru/actualidad/llevan-heridos-de-enfrentamientos-en-el-monzon-a-tingo-maria-noticia-516273>

Radio Programas del Perú (RPP). (28 de agosto de 2012). Pedraza afirma que coccaleros atacaron a policías en el Monzón. *RPP*. Recuperado de: <http://rpp.pe/politica/actualidad/pedraza-afirma-que-cocaleros-atacaron-a-policias-en-el-monzon-noticia-516299>

Radio Programas del Perú (RPP). (28 de agosto de 2012). Programas sociales del Gobierno no llegan al Valle del Monzón, afirman. *RPP*. Recuperado de: <http://rpp.pe/politica/actualidad/programas-sociales-del-gobierno-no-llegan-al-valle-del-monzon-afirman-noticia-516449>

Radio Programas del Perú (RPP). (28 de agosto de 2012). Huánuco: Policía confirma la muerte de dos coccaleros en el Monzón. *RPP*. Recuperado de: <http://rpp.pe/peru/actualidad/huanuco-policia-confirma-la-muerte-de-dos-cocaleros-en-el-monzon-noticia-516502>

Radio Programas del Perú (RPP). (29 de agosto de 2012). Huánuco demanda suspender erradicación de cultivos ilegales. *RPP*. Recuperado de: <http://rpp.pe/peru/actualidad/huanuco-demanda-suspender-erradicacion-de-cultivos-ilegales-noticia-516538>

Salisbury, D.S. & Faga, C. (2013). Coca and conservation: cultivation, eradication and trafficking in the Amazon borderlands. *GeoJournal*, 78, 41-60.

Schejtman, A. & Berdegú, J. A. (2004). *Desarrollo territorial rural: Debates y Temas Rurales*. Recuperado de: http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1363093392schejtman_y_berdegue_2004_desarrollo_territorial_rural_5_rimisp_CArduen.pdf

Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods. A framework for analysis*. [material para Institute of Development Studies]. Brighton: IDS. Recuperado de: <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3390/Wp72.pdf?sequence=1>

Scott, J. (1998). *Seeing like a State: how certain schemes to improve the*

human condition have failed. New Haven: Yale University Press.

Serrano, M. (2014). *Cultivos ilícitos de coca y bienestar en las regiones productoras: Un análisis desde el enfoque de capacidades*. (Tesis doctoral). Recuperado de:
<http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/noticias/2760-narcotrafico-bienestar-capacidades-comunidades.html>

Skocpol, T., Evans, P. & Rueschemeyer, D. (1985). *Bringing the State back in*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Stockbridge, M. & Dorward, A. (2014). *Economics and Institutions for Development* [material para el Centre for Development, Environment and Policy]. Londres: SOAS University of London. Recuperado de:
<https://www.soas.ac.uk/cedep/online-programmes/modules/file47707.pdf>

Ugarte, D. (2014). *Después de la coca: la persistencia del cambio institucional en Tocache*. (Tesis de licenciatura).

Valle Riestra, E. & Vidal, N. (2014). Ahorita nos erradican, mañana ¿qué comemos?. *IDL-Reporteros*. Recuperado de:
<https://idl-reporteros.pe/“ahorita-nos-erradican-manana-¿que-comemos”/>

Van Dun, M. (2009). *Cocaleros: Violence, Drugs and Social Mobilization in the Post-Conflict Upper Huallaga Valley, Peru*. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Weiss, R. S. (1994). *Learning from strangers: The art and method of qualitative interview studies*. Nueva York: The Free Press.

Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods*. Los Angeles y Londres: Sage Publications.

Zevallos, N. (2012). *El impacto de las estrategias de control de cultivos en la dinámica de la defensa política de la hoja de coca en el Perú*. (Tesis de maestría). Recuperado de:
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4901>

Zevallos, N. (2014). Hoja de coca y la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011: el problema público en el control de cultivos. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 1, 97-113.

Zevallos, N. & Mujica, J. (2015). Consideraciones para una política de drogas desde un enfoque de Seguridad Humana. En N. Zevallos & J. Mujica (Eds.), *Herramientas y métodos de análisis sobre el tráfico de cocaína*. Lima: DEVIDA, Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia.

Anexos

Anexo 1: Entrevista a agricultores y agricultoras (Primer campo)

Bloque 1: Iniciativas estatales

Antecedentes

1. ¿Cómo era un día cotidiano en su distrito cuando la mayoría de la población sembraba coca?
2. ¿Cómo era un día cotidiano para usted cuando se dedicaba al cultivo de coca?
3. ¿Cómo fue que se permitió el ingreso de la erradicación en su distrito? ¿por qué cree que ocurrió?
4. ¿Usted era parte del gremio cocalero antes de que inicie las erradicaciones? ¿Qué pasaba con el gremio en ese entonces?

Control de cultivos

1. ¿Alguien le comunicó que se iniciarían las erradicaciones antes de que empezaran? Si fue así, ¿quién lo hizo y de qué manera?
2. ¿Qué institución se encargó de la erradicación?
3. Cuando llegaron al valle, ¿los convocaron a alguna reunión para darles información sobre lo que ocurriría?
4. ¿En qué lugares del valle se erradicó primero? (o ¿A quiénes se les erradicó la coca primero?)
5. ¿Cómo reaccionó el gremio cocalero cuando iniciaron las erradicaciones en el Monzón?
6. Además de la coca, ¿qué otros productos solían cultivar?
7. A comparación de la coca, ¿cuánto espacio en la chacra dedicaban a esos cultivos?
8. ¿Qué tanto le afectó la erradicación a usted y su familia? ¿Contaban con otros cultivos para sostenerse?
9. ¿La erradicación se dio poco a poco o se hizo de manera radical?
10. Las personas que erradicaron los cultivos, ¿le entregaron insumos o se iniciaron programas que los beneficien? (Ejemplo: canastas, piscigranjas, cocinas mejoradas, etc.). Si la respuesta es sí, ¿esto se dio antes, durante o después de la erradicación?

Desarrollo Alternativo

1. ¿Cuánto tiempo después de las erradicaciones se inició el programa de Desarrollo Alternativo? ¿Qué opinaba del Estado en ese momento?
2. ¿Qué instituciones del Estado se encargaron de empezar con el Desarrollo Alternativo? ¿Las organizaciones locales participaron? Si la respuesta es sí ¿cuál fue su rol?
3. Para iniciar con el programa, ¿se convocó a una reunión para dar información sobre el proceso? ¿quién la convocó y llevó a cabo? ¿cuántas personas asistieron?

4. ¿Qué beneficios les ofrecía el programa? (Ejemplo: asistencia técnica, biohuertos)
5. Además de estos beneficios, ¿cuáles fueron las razones por las que se quiso vincular al D.A.?
6. ¿Usted debió firmar un Acta de Compromiso? ¿Qué es lo que eso significa?
7. ¿Se ofrecieron capacitaciones para iniciar con la sustitución de cultivos? ¿Qué opina sobre estas?
8. ¿Cómo se elige qué cultivo debe sembrarse? ¿Encuentra beneficios en el cultivo que usted sembró? ¿Le gustaría que ofrecieran otro?
9. ¿Cada cuánto tiempo recibe asistencia técnica? ¿Está satisfecho/a con ella?
10. ¿Se han formado nuevas organizaciones a partir de la implementación del Desarrollo Alternativo? ¿Cómo ha sido ese proceso? (Indagar sobre las cooperativas)
11. ¿Cómo era su relación con los implementadores del D.A.? (Indagar respecto a la confianza; trato; comunicación) ¿Cómo ha cambiado esta relación en los últimos años?

Bloque 2: Estrategias de vida

Prácticas

1. A lo largo del proceso de las erradicaciones y el Desarrollo Alternativo, ¿se ha dado migración?
2. Además de agricultores, ¿qué otras personas migraron cuando se inició la erradicación? (Ejemplo: disminución de narcotraficantes o senderistas)
3. ¿Aún hay personas vinculadas al gremio cocalero? ¿Por qué?
4. ¿Aún hay personas que promueven el cultivo de coca? ¿De dónde vienen estas personas? ¿Cómo es su relación con los habitantes de su distrito?
5. ¿Aún se cultiva coca en paralelo a otros cultivos como el cacao y el café? ¿Por qué se hace? ¿Qué beneficios trae? ¿Se hace en todas las temporadas o solo en situaciones específicas?
6. ¿Cuáles son las diferencias entre cultivar coca y cultivar cacao o café? ¿Qué productos nuevos debe usar? ¿Cuáles son las técnicas que deben usarse? ¿Deben invertir más dinero que con los cultivos de coca? ¿Les basta con los insumos que otorga el programa?
7. ¿Cómo se reparten las responsabilidades en su hogar para sostener estos nuevos cultivos? ¿Cómo era esto cuando cultivaban coca? (Indagar en la división sexual del trabajo y el rol de los hijos)
8. ¿Se ha vinculado a alguna organización de productores? ¿Existen requisitos para poder hacerlo? Si la respuesta es sí, ¿cuáles? ¿todos los agricultores los cumplen?
9. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? ¿Cuáles son los mayores problemas que hay en estas organizaciones?

10. ¿Considera que las mujeres pueden participar de la misma manera que los hombres en estos espacios?
11. ¿Usted ha accedido a créditos agrícolas? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles son los beneficios y compromisos que eso implica? ¿Qué tuvo que aprender para acceder a estos créditos? (Trámites bancarios, términos económicos)
12. ¿Se ha promovido la titulación de los terrenos en el distrito? ¿usted se ha beneficiado con ese proceso?
13. Además de la agricultura, ¿qué otras actividades le generan ingresos económicos? ¿desde hace cuánto tiempo las realiza?
14. ¿Con qué frecuencia se moviliza fuera de su distrito? ¿A través de qué medio de transporte lo hace? ¿Siempre ha tenido esas rutas o han cambiado en los últimos años?

Narrativas

1. ¿Cuáles son las diferencias entre los ingresos que provee la coca para el narcotráfico y los que proveen el cacao y el café?
2. ¿Qué les decían las instituciones estatales sobre los ingresos económicos conseguidos con el cultivo de coca? ¿Qué opina usted sobre ello?
3. ¿En qué gastaba el dinero que ganaba cultivando coca? ¿Ahora lo gasta de manera diferente?
4. ¿Cómo vendía la coca anteriormente? ¿Cómo vende los nuevos cultivos ahora? (Indagar sobre transporte de los cultivos, gastos implicados, con quiénes se relacionaba)
5. ¿Cómo ha cambiado la seguridad en su distrito a partir de la erradicación y el Desarrollo Alternativo?
6. ¿Cómo han cambiado las condiciones de vida en el distrito desde que se aplicaron los programas estatales?
7. ¿Considera que la erradicación de cultivos de coca ha permitido un mayor acceso a servicios públicos? ¿Por qué?
8. ¿De qué manera ha cambiado la actitud de los pobladores de su distrito a partir de que se dejó de cultivar coca? (Indagar sobre narrativas sobre "ociosidad")
9. De las cosas que han cambiado en su distrito desde que iniciaron los programas estatales, ¿qué es lo que más le gusta? ¿qué es lo que menos le gusta?
10. ¿Qué oportunidades considera que estos programas estatales le han dado a usted y a su familia?

Preguntas de cierre

1. ¿Cómo quiere que sea su distrito de acá a cinco años?
2. ¿Hay algo más que debería saber sobre el Desarrollo Alternativo?
3. Muchas gracias por su tiempo, yo no tengo más preguntas para usted, ¿usted tiene alguna para mí?
4. ¿Me podría recomendar a alguien para seguir conversando sobre este tema?

Anexo 2: Entrevista a agricultores y agricultoras (Segundo campo)

1. ¿Vivía aquí cuando se llevó a cabo la erradicación manual?
2. ¿Tenía cultivos de hoja de coca que fueron erradicados?
3. ¿Actualmente reside en este centro poblado?

Datos generales

Sexo:

Edad:

4. ¿Cuál es el último grado de estudios que alcanzó?
5. ¿Quiénes viven en su hogar? (averiguar cantidad y edad de hijos)
6. ¿Dónde nació? (si es de otro lugar, ¿hace cuántos años vive aquí? ¿qué lo llevó a mudarse aquí? (indagar sobre razones por las que se fue, y razones por las que eligió este CCPP (contactos, sabía que había trabajo, ya conocía, etc.)
7. ¿A cuánto tiempo de su casa queda su chacra? ¿tiene otra residencia allí?

Capitales

8. ¿A qué se dedicaba cuando vino la erradicación manual? (agricultura, ganadería, comercio, transporte, etc.)

9. Natural:

- a. ¿Cuántas parcelas/hectáreas tenía de tierra?
- b. ¿Contaba con algún título de propiedad o certificado de posesión?
- c. ¿Qué cultivaba en ellas? (intentar averiguar cuántas arrobas de coca tenía)
- d. ¿Cómo vendía sus productos?
- e. ¿Cuántas personas trabajaban su tierra?

10. Financiero:

- a. Además de las ganancias producidas por su trabajo, ¿contaba con otros ingresos? (apoyo económico de familiares, alquiler de bienes, programas sociales, jubilación)
- b. ¿En qué solía utilizar el dinero producido por la hoja de coca? (cubrir necesidades básicas, educar a sus hijos, invertir, ahorrar, comprar bienes)
- c. ¿Tuvo acceso a algún préstamo o crédito en ese tiempo?

11. Humano:

- a. ¿Había tenido experiencia previa con proyectos agrícolas promovidos por instituciones públicas o privadas?
- b. ¿Había recibido alguna capacitación técnica?

- c. Además de conocimiento agrícolas, ¿contaba con algún otro conocimiento que pudiera aplicar laboralmente? (construcción, cocina, mecánica, etc.)

12. Social:

- a. ¿Era usted miembro de alguna asociación? (gremio, agrupación religiosa, partido político, etc.) ¿ocupaba algún cargo en la dirigencia?
- b. ¿Contaba con familiares o amigos a los que pudiera recurrir? ¿recurrió a ellos cuando le erradicaron la coca? ¿recibió apoyo de su parte?

Erradicación

13. ¿Cuántas arrobas de coca le erradicaron?
14. ¿Le permitieron registrar alguna roba para ENACO?
15. ¿Se le brindaron programas de acompañamiento el mes que erradicaron sus cicales? (insumos agrícolas, piscigranjas, cocinas mejoradas, biohuertos, animales menores)

Estrategias: prácticas

16. ¿Qué hizo cuando le erradicaron su coca?
- a. Migrar (¿a dónde fue? ¿por qué eligió ese lugar? ¿a qué se dedicó allí?)
- b. Buscar trabajo en otros lugares (¿a dónde fue? ¿por qué eligió ese lugar? ¿a qué se dedicó allí?)
- c. Pedir apoyo económico de familiares/amigos
- d. Sembrar nuevos cultivos por su cuenta (¿qué sembró? ¿por qué eligió esos cultivos? ¿su tierra resultó apta para ellos? ¿hay cultivos que no ha podido producir a causa de su tierra?)
17. ¿Es miembro de alguna asociación actualmente? (junta vecinal, cooperativa agrícola, partido político, etc.) ¿ocupa algún cargo en la dirigencia? ¿qué lo motivó a asociarse? (tenía conocidos en ella, DEVIDA lo recomendaba, etc.) ¿qué beneficios encuentra en formar parte de aquella asociación?
18. ¿Ha realizado gestiones en los últimos años para obtener un préstamo o crédito? (¿lo gestionó de manera particular o mediante una asociación? ¿qué lo impulsó a (no) pedir el préstamo? ¿lo obtuvo? ¿por qué?)

Desarrollo Alternativo

19. ¿Se ha asociado al programa de Desarrollo Alternativo de DEVIDA?
- a. **Sí:** ¿qué lo llevó a asociarse? ¿le pidieron firmar un Acta de Entendimiento? ¿qué le ha ofrecido el programa? ¿qué cultivo siembra? ¿cómo va el crecimiento de su cultivo? ¿en qué se diferencia trabajar ese cultivo vs la hoja de coca? ¿ya ha cosechado? ¿cómo vendió el producto?

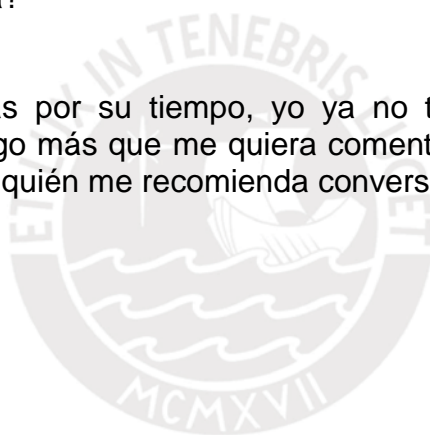
- b. **Sí, pero ya no estoy asociado:** ¿le pidieron firmar un Acta de Entendimiento? ¿qué le ofreció el programa? ¿qué cultivo sembró? ¿por qué decidió retirarse?)
 - c. **No, pero me quiero asociar:** ¿qué quisiera cultivar? ¿por qué no se ha asociado hasta ahora?
 - d. **No y no me quiero asociar:** ¿por qué no?
20. ¿Participó en el programa de Recuperación de Suelos? ¿cómo le fue con el programa?

Estrategias: narrativas

- 21. ¿Qué opina sobre que ya no se cultive hoja de coca?
- 22. ¿Qué opina sobre los programas que viene implementando el Estado?
- 23. ¿Cómo es la situación de su familia en la actualidad, en comparación a cómo era cuando aún se cultivaba coca?
- 24. De las cosas que han cambiado en su distrito desde que iniciaron los programas estatales, ¿qué es lo que más le gusta? ¿qué es lo que menos le gusta?

Cierre

- 25. Muchas gracias por su tiempo, yo ya no tengo más preguntas para usted, ¿hay algo más que me quiera comentar? ¿tiene alguna pregunta para mí? ¿con quién me recomienda conversar para informarme más del tema?



Anexo 3: Entrevista a funcionarios y expertos

Bloque 1: Iniciativas estatales

Antecedentes

1. ¿Cómo describiría al valle del Monzón antes de las intervenciones estatales?
2. ¿Cuáles considera que eran las principales dificultades que el Estado tenía para ingresar al valle?

Operativos de erradicación

1. ¿Cómo se dio la implementación de operativos de erradicación en el valle?
2. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en este proceso?
3. ¿Cómo describiría el rol del gremio cocalero durante este periodo?
4. ¿Cómo era la relación entre los implementadores y la población afectada?
5. ¿Tiene conocimiento sobre si se brindaron alguno de los siguientes programas en los caseríos del valle?
 - a. Entrega de insumos agrícolas
 - b. Instalación de piscigranjas
 - c. Instalación de cocinas mejoradas
 - d. Instalación de biohuertos
 - e. Instalación de cultivos forestales
 - f. Entrega de animales menores (ejemplo: cuyes)
6. ¿Cuáles considera que fueron las principales consecuencias que tuvo este proceso para las familias del Monzón?

Desarrollo Alternativo

1. ¿Cómo inició la implementación del programa de DA en el Monzón?
 - a. ¿Se implementaron biohuertos? ¿cuánta población diría que fue beneficiada? ¿en qué medida considera que esta iniciativa aportó al bienestar de la población? ¿cuáles fueron las principales dificultades que surgieron para la implementación de biohuertos?
 - b. ¿Se construyó infraestructura o se apoyó en la mejora de la existente? ¿qué se construyó / qué construcciones se mejoraron?
 - c. ¿Se llevaron a cabo programas de reforestación y/o agro forestería? ¿cuánta población se vio beneficiada? ¿en qué medida eso aportó a su bienestar?
2. ¿Qué actores participaron? ¿Cuál fue el rol de cada uno?
3. ¿Cuál fue la inicial actitud de la población hacia los programas de desarrollo alternativo?
4. ¿Cómo se fomentó la participación y apoyo de la población?
5. ¿Quiénes fueron los principales interesados en que se implemente el programa?
6. ¿Cómo describiría a aquellos que no deseaban vincularse al DA? ¿por qué cree que decidían no involucrarse?

7. ¿Cuáles son las etapas para la implementación de los programas?
8. ¿Qué tipo de beneficios reciben los agricultores que se asocian al DA?
 - a. ¿Cada cuánto tiempo se llevan a cabo las Escuelas de campo? ¿asisten todos los socios?
 - b. ¿Se entregan insumos y herramientas más de una vez a los inscritos?
 - c. ¿De qué manera se ha impulsado la creación de asociaciones y cooperativas agrícolas? ¿en qué medida los agricultores desean vincularse a ellas?
9. ¿Cuáles han sido las principales dificultades en la implementación de estos programas?
10. ¿Qué cree que debería mejorarse respecto al Desarrollo Alternativo?
11. ¿Cómo considera que este proceso ha variado en los diferentes centros poblados del valle?

Otras iniciativas del Plan de Pos erradicación

12. ¿Se ha impulsado la creación de Junta Vecinal en todos los caseríos? ¿cómo se ha dado el proceso? ¿de qué manera considera que esto ha beneficiado a la población? ¿cuáles son las principales dificultades que se han presentado?
13. ¿Cómo ha sido el desarrollo de los programas de deporte y música impulsados por DEVIDA? ¿cuáles considera que han sido sus mayores beneficios? ¿cuáles sus mayores dificultades?
14. ¿Qué otras iniciativas públicas o público-privadas se han dado en el valle en el marco del Plan de Pos erradicación?
 - a. Instalación de Comisarías
 - b. Caravanas
 - c. Educación ambiental
 - d. Capacitaciones laborales (ejemplo: a jóvenes en construcción civil)

Bloque 2: Estrategias de vida

Prácticas

1. ¿De qué manera considera que las iniciativas implementadas han cambiado la vida de los agricultores del Monzón? ¿Cree que ha cambiado la de todos los agricultores por igual?
2. ¿Las organizaciones políticas a las que las familias se vinculan han cambiado?
3. ¿Cómo ha cambiado la situación socioeconómica del valle? (flujo de dinero, de personas, seguridad, etc.)

Narrativas

1. ¿Cómo ha ido cambiando la percepción de las personas sobre las iniciativas que se han implementado en el valle?
2. ¿Cómo considera que ha cambiado la percepción de los agricultores respecto al Estado?

Cierre

1. Muchas gracias por el tiempo brindado. Quería preguntarle, para mi investigación:
 - a. ¿Con quién me recomienda conversar para informarme más?



Anexo 4: Matriz de operacionalización

| Pregunta de Investigación | ¿De qué manera el proceso de implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas ha modificado la configuración de estrategias de vida de los agricultores cocaleros del valle del Morzón, Huancayo? | Definiciones operativas de las dimensiones | Variables | Indicadores |
|--|--|---|--|---|
| <p>X: Implementación de iniciativas estatales en materia de lucha contra las drogas Definición operativa de X: Implementación de programas y operativos de control de cultivos y Desarrollo Alternativo desde el Estado y organismos internacionales que tienen como objetivo reducir la oferta de hoja de coca ilegal</p> | | <p>Forma en que se llevó a cabo la implementación de operativos que erradican, voluntaria o forzosamente, cultivos de hoja de coca ilegal</p> | <p>Variables</p> <p>Hectáreas erradicadas a través de operativos Existencia de alguna comunicación previa a los operativos Proceso para iniciar la erradicación de cultivos Encargados de implementar los operativos Principales focalizados por la intervención Forma en que se procedía a erradicar los cultivos Aplicación de programas que acompañan la erradicación Dificultades para implementar la intervención Explicaciones o comunicaciones dadas por los implementadores respecto a la intervención Apoyo recibido por actores no estatales Retos encontrados al inicio de la intervención Forma en la que se fomentó la participación de los agricultores en programas de DA Formas en las que se comunicó de qué se trataba el programa Proceso para iniciar la sustitución de cultivos Aplicación de programas que acompañan DA Encargados de implementar los programas de DA Asistencia técnica recibida para implementar la sustitución de cultivos Principales focalizados por la implementación de los programas Dificultades para implementar la intervención Organización comunal Apoyo recibido por actores no estatales</p> | <p>Indicadores</p> <p>Percepción respecto a la cantidad de hectáreas erradicadas a través de operativos Avisos a las autoridades locales sobre la inclusión de campañas de erradicación Personal que se acercó a la población por primera vez Eventos a los que se convocó la población Zonas en las que se erradicó coca ilegal primero Instituciones que enviaron personal para erradicar los cultivos Agricultores a los que se les erradicó primero Agricultores a los que se les erradicó más hectáreas Agricultores que reciben más en la coca como ingreso económico Erradicación era progresiva o radical Existencia de diálogo o conciliación con las familias a las que se erradicaba Entrega de productos Instalación de psicogéjinas Instalación de cocinas mejoradas Medidas tomadas por la población para dificultar o evitar erradicación Problemas de presupuesto para llevar a cabo erradicación Relembra de cultivos entre campañas de erradicación Presencia de discursos que justificaban la erradicación Presencia de discursos matizados sobre la erradicación Explicación sobre medidas poserradicación Apoyo recibido por el gobierno norteamericano Apoyo recibido por la DEA Presencia de conflictividad, tensión o violencia Resiembra Entrega de insumos Oferta de asistencia técnica Instalación de biopuntos Discursos sobre los beneficios que se tendrían con el DA Eventos realizados para la población Personal se acercaba para conversar sobre el programa Firma de Actas de Compromiso Capacitaciones impartidas para preparar la siembra Asistencia técnica brindada en el proceso de siembra Biohuertos Caravanas Encargados de coordinar el proceso y asegurar funcionamiento del da Encargados de brindar información sobre el proceso Encargados de llevar a cabo las capacitaciones Encargados de aplicar la sustitución de cultivos Frecuencia de la asistencia técnica para acompañar el proceso Proporción de agricultores por técnico Percepción sobre el nivel de los técnicos contratados Cantidad de hectáreas de las familias beneficiadas Actividades económicas secundarias de las familias beneficiadas Dificultades presupuestales Dificultades logísticas Falta de conocimiento para llevar a cabo el proceso Negativa de la población Dificultad para comunicar los beneficios del DA Desconfianza en las entidades implementadoras Imposibilidad de costear los gastos para sustituir cultivos Dificultad para vincularse a una cooperativa Rol de las instituciones estatales en la formación de juntas vecinales Rol de las instituciones estatales en la formación de cooperativas Dificultades de las cooperativas para organizarse Importancia de las cooperativas para la sostenibilidad del proceso Apoyo recibido por USAID Rol cumplido por la hidroeléctrica Apoyo recibido por la Cooperación Internacional</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>Y. Estrategias de vida Definición operativa de Y: Conjunto de prácticas y narrativas que los productores emplean para sustentarse económicamente, organizarse políticamente y mejorar su estatus social</p> | <p>Narrativas</p> | <p>Discursos empleados por los productores respecto a su pasado, presente y expectativas futuras en relación a su situación económica, política y social</p> | <p>Deslegitimación de la producción previa de hoja de coca ilegal</p> | <p>Presencia de discursos sobre la no rentabilidad de la coca Presencia de discursos auto criminalizantes</p> |
| | | | <p>Asociación de los cultivos ilícitos a un mayor desarrollo individual y colectivo</p> | <p>Vinculación del cambio de cultivos con mayor seguridad Vinculación del cambio de cultivos con menor pobreza Vinculación del cambio de cultivos con mayor acceso a servicios Vinculación del cambio de cultivos con menor toxicidad en la población Vinculación del gremio con narcotraficantes</p> |
| | | | <p>Deslegitimación del rol del gremio cocalero</p> | <p>Discursos que consideran que el gremio buscaba su beneficio personal Discursos sobre que el gremio no apoyó a la población cuando se erradicó Aprobación de la instalación de instituciones públicas en el valle Aprobación de la aplicación de los programas de erradicación</p> |
| | | | <p>Legitimación de la presencia estatal en el territorio</p> | <p>Percepción de que antes se tenían mayores ingresos económicos Percepción sobre que antes se tenían menos obligaciones Percepción de que antes había mayor cohesión social</p> |
| | | | <p>Nostalgia respecto al pasado en el valle</p> | <p>Percepción de que antes se tenía más tiempo libre Mayor posibilidades para mejorar economía familiar Mayor posibilidades para que sus hijos estudien Mayor posibilidades para que sus hijos prosperen económicamente Mayor posibilidades para acceder a créditos</p> |
| | | | <p>Expectativas a futuro</p> | <p>Migración Resiembra</p> |
| | | | <p>Prácticas para mantener cultivo de coca ilícita</p> | <p>Uso de la violencia para evitar erradicación Sustitución total de la coca por cultivos ilícitos Sustitución parcial de la coca por cultivos ilícitos</p> |
| | | | <p>Reemplazo de la producción de coca ilícita por otros cultivos ilícitos</p> | <p>Se mantiene el cultivo de coca ilícita Cambio en el uso de pesticidas Mayor rotación de cultivos Uso de nuevas técnicas agrícolas Asociación a cooperativas para acceder a insumos</p> |
| | | | <p>Cambio en las prácticas agrícolas</p> | <p>Asociación a cooperativas para vender cultivos No asociación a cooperativas Beneficios encontrados en la asociación a cooperativas Problemas generados por la asociación a cooperativas</p> |
| | | | <p>Asociación a cooperativas</p> | <p>Dificultades para asociarse Mayor acceso a créditos Mayor inversión en mejora de vivienda Mayor inversión en acceso a educación para los hijos Menor gasto en actividades recreativas</p> |
| <p>Cambios en el manejo del dinero</p> | <p>Se realiza un trabajo remunerado más además del cultivo Hijos que antes no trabajaban empiezan a trabajar Desvinculación del gremio cocalero Apoyo a autoridades no cocaleras Vinculación con nuevos partidos políticos</p> | | | |
| <p>Ampliación de actividades económicas realizadas para sustentar económicamente la familia</p> | <p>Reducción o anulación de vínculos con compradores de coca Reducción o anulación de vínculos con compradores de pasta básica de cocaína Trábulaciones en terrenos no documentados</p> | | | |
| <p>Cambio de las organizaciones políticas a las que la persona se vincula o apoya</p> | <p>Mayor participación de mujeres en organizaciones políticas como las juntas comunales</p> | | | |
| <p>Modificación de las personas con las que el agricultor se vincula</p> | <p>Mayor participación de mujeres en la directiva de las cooperativas</p> | | | |
| <p>Cambios en la tenencia de tierra</p> | <p>Mayor participación de mujeres en los terrenos del hogar</p> | | | |
| <p>Mejora en la equidad de género</p> | <p>Nuevas rutas o lugares frecuentados por el agricultor y/o su familia</p> | | | |
| <p>Cambios en la movilización</p> | <p>Modificación en el dinero gastado en transporte Frecuencia con la que se sale del valle</p> | | | |